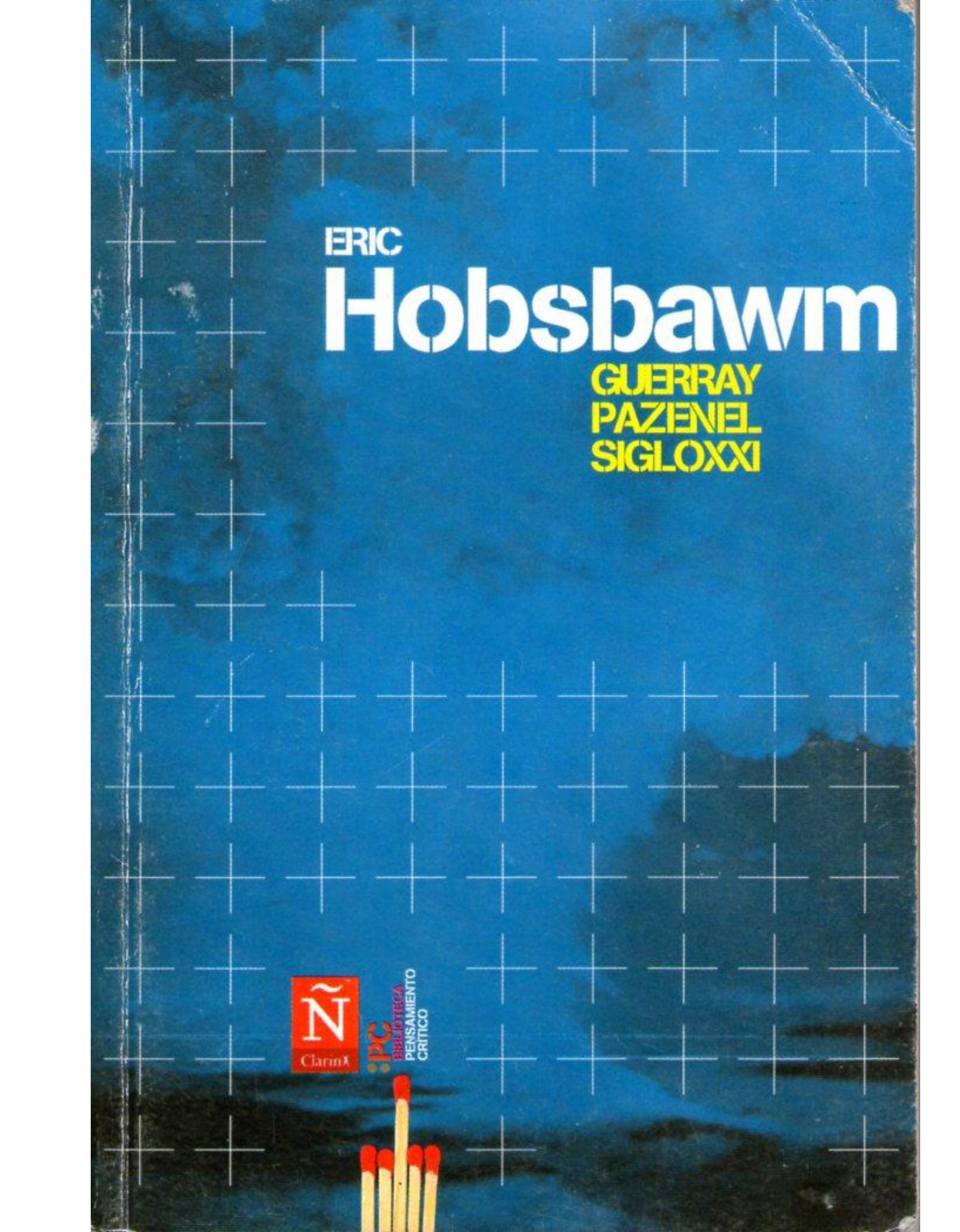


ERIC
Hobsbawm
GUERRA Y
PAZ EN EL
SIGLO XXI
Ñ
Clarín
PC
BIBLIOTECA
PENSAMIENTO
CRÍTICO



ERIC

Hobsbawm

GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI



ERIC

Hobsbawm

GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI

GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XXI

Título original: *Essays on Globalization, Democracy and Terrorism*
Traducción castellana de Beatriz Eguibar, Ferran Esteve, Tomás Fernández y Juanmari Madariaga

Diseño de colección: Fernando Rapa Carballo

Foto de tapa e interior: Hongo atómico tras una explosión nuclear. Getty Images; Desfile militar en el Día Nacional de Malaisia. Jupiter Images.

Hobsbawm, Eric
Guerra y paz en el siglo XXI / Eric Hobsbawm ; edición literaria a cargo de José Antonio Alemán. - 1a ed. - Buenos Aires : Arte Gráfico Editorial Argentino, 2012.
208 p. ; 18x12 cm. - (Pensamiento crítico; 11)

ISBN 978-987-07-2072-0
Impreso por PUNTO Arte y Reproducciones S. A.
Av. Del Barco Centenera 2749
C1437GUH – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina

1. Sociología. I. Alemán, José Antonio, ed. lit. II. Título.
CDD 301

Fecha de catalogación: 11/07/2012

PRÓLOGO*

El siglo xx ha constituido el período más extraordinario de la historia de la humanidad, ya que en él se han dado, juntos, catástrofes humanas carentes de todo paralelismo, fundamentales progresos materiales, y un incremento sin precedentes de nuestra capacidad para transformar, y tal vez destruir, la faz de la tierra —sin olvidar el hecho de que hayamos penetrado incluso en su espacio exterior—. ¿Cómo habremos de pensar esa pasada «edad de los extremos» o las perspectivas futuras de la nueva era que ha surgido de la antigua? La presente recopilación de artículos es el esfuerzo de un historiador por deslindar, analizar y comprender la situación del mundo en el arranque del tercer milenio, así como algunos de los principales problemas políticos a que hoy nos enfrentamos.

Dichos artículos completan y actualizan lo que he expuesto en publicaciones anteriores, principalmente en la *Historia del siglo xx. 1914-1991*, en la conversación mantenida con Antonio Polito en *Entrevista sobre el siglo xxi* y en *Naciones y nacionalismo desde 1780*.**

Estos esfuerzos son necesarios. ¿Cuál puede ser la contribución de los historiadores a esta tarea? Su principal función, aparte de recordar lo que otros han olvidado o desean olvidar, consiste en tomar distancia, en la medida de lo posible, respecto de la crónica de lo contemporáneo y en encuadrarla en un contexto más amplio y con mayor perspectiva.

* Traducción castellana de Tomás Fernández y Beatriz Eguibar.
** Obras todas ellas publicadas por la Editorial Crítica. (*N. de los t.*)

En esta colección de estudios, principalmente centrados en torno a temas políticos, he optado por centrarme en cinco grupos de cuestiones que hoy precisan de una reflexión clara e informada: la cuestión general de la guerra y la paz en el siglo XXI, el pasado y el futuro de los imperios del mundo, la naturaleza, el cambiante contexto del nacionalismo, las perspectivas de la democracia liberal, y la cuestión de la violencia y el terrorismo políticos. Todos estos asuntos se desarrollan en una escena mundial dominada por dos acontecimientos vinculados entre sí: la enorme y constante aceleración de la capacidad de la especie humana para modificar el planeta mediante la tecnología y la actividad económica, y la globalización. El primero de ellos, por desgracia, no ha ejercido hasta el momento un impacto significativo en quienes han de tomar las decisiones políticas. El objetivo de los gobiernos sigue siendo la maximización del crecimiento económico, y tampoco existe una expectativa realista que indique que se estén dando pasos efectivos para afrontar la crisis del calentamiento global. Por otra parte, desde la década de 1960, el apresurado crecimiento de la globalización, esto es de un mundo convertido en una unidad indivisa de actividades interrelacionadas y libres del estorbo de las fronteras locales, ha producido un profundo efecto político y cultural, en especial en su actual forma dominante: la de un mercado global libre y carente de controles. Esta cuestión no es sometida a un debate específico en estos textos, principalmente porque la política es el único campo de actividad humana que prácticamente no se ve afectado por ella. En su afán de efectuar la cuestionable tarea de cuantificarla, no le resulta difícil al Índice de globalización del Instituto para la Investigación de la Coyuntura Económica de la Universidad Politécnica de Zurich (KOF, 2007) hallar indicadores de los flujos económicos y de información, de la existencia de contactos personales o de la difusión cultural (por ejemplo, en el número de restaurantes de la cadena McDonald's o de almacenes IKEA *per cápita*), pero no concibe mejor forma de medir la «globalización política» que estimar el número de embajadas presentes en un país, o la pertenencia de éste a las organizaciones internacionales y su participación en las misiones del Consejo de Seguridad de la ONU. El examen general de la globalización queda fuera del alcance de este libro. No obstante, cuatro observaciones generales relacionadas con ella resultan de particular relevancia para los temas que trata.

En primer lugar, la globalización del mercado libre, actualmente tan de moda, ha traído consigo un crecimiento espectacular de las desigualdades económicas y sociales, tanto en el seno de los estados como en el ámbito internacional. No hay signo alguno de que esta polarización no se prolongue en el interior de los países, a pesar de la general disminución de la pobreza extrema. Este brusco aumento de la desigualdad, especialmente en las condiciones de desmesurada inestabilidad económica creadas por el mercado libre global en la década de 1990, constituye la raíz de las principales tensiones sociales y políticas del nuevo siglo. Y en la medida en que las desigualdades internacionales puedan hallarse sometidas a la presión provocada por el ascenso de las nuevas economías asiáticas, tanto la amenaza a los niveles de vida relativamente astronómicos de los ciudadanos del viejo Occidente como la imposibilidad práctica de lograr algo semejante a que están abocadas las enormes poblaciones de países

como India y China, habrán de generar a su vez tensiones internas e internacionales.

En segundo lugar, quienes perciben con mayor intensidad el impacto de esta globalización son quienes menos se benefician de ella. De ahí que la creciente polarización de los puntos de vista sobre el particular distancie a quienes se encuentran potencialmente al abrigo de sus efectos negativos —los empresarios que pueden «desplazar sus costes» a países con mano de obra barata, los profesionales de los sectores de la alta tecnología y los que se hallan en posesión de un título universitario, que pueden conseguir trabajo en cualquier economía de mercado de elevados ingresos— de quienes carecen de amparo. Ésta es la razón de que los comienzos del siglo XXI presenten, para la mayoría de las personas que viven de las pagas o de los salarios derivados de su empleo en los viejos «países desarrollados», un cariz inquietante, por no decir siniestro. El mercado libre global ha socavado la capacidad de sus estados y sus sistemas de bienestar, que antes tenían la posibilidad de proteger su estilo de vida. En la economía global compiten con hombres y mujeres de países extranjeros que poseen igual titulación pero cobran una ínfima parte de la mensualidad común en Occidente, y en sus propios países se encuentran sometidos a la presión generada por la globalización de lo que Marx llamó «el ejército industrial de reserva»,* compuesto por los inmigrantes procedentes de las aldeas de las grandes zonas de pobreza global. Este tipo de situaciones no prometen una era de estabilidad política y social.

En tercer lugar, y a pesar de que el actual alcance de la globalización sea aún modesto, excepto, quizá, en un cierto número de estados más bien pequeños por lo general, situados sobre todo en Europa, su impacto político y cultural es desproporcionadamente grande. De este modo, la inmigración constituye un importante problema político en la mayoría de las economías desarrolladas de Occidente, pese a que la tasa de seres humanos que vivan en un país distinto al que les vio nacer no supere el tres por ciento. En el Índice de globalización económica del KOF, Estados Unidos ocupa el puesto número 39, Alemania el 40, China el 55, Brasil el 60, Corea del Sur el 62, Japón el 67 y la India el 105, aunque todos, salvo Brasil, aparecen clasificados en posiciones algo más altas en términos de «globalización social». (El Reino Unido es la única gran economía que figura entre los diez primeros puestos, tanto en la lista de la globalización económica como en la de la globalización social.)[1] Aunque aún no sepamos si éste es o no un fenómeno pasajero desde el punto de vista histórico, sería muy factible que la desmesurada amplitud de este impacto revelara tener graves consecuencias políticas nacionales e internacionales a corto plazo. Yo diría que, de uno u otro modo, existe la posibilidad de que la resistencia política, pese a que sea poco probable que vuelva a poner en marcha

* *El capital*, traducción de Wenceslao Roces, FCE, México, 1986 [1867-1894], vol. I, XXIII. 3, pp. 532 y ss.; sobre la relación de esta «población obrera *remanente* o *sobrante*» (énfasis del autor) con la superpoblación, véase p. 535; respecto a su influencia en los obreros activos, véanse las pp. 541 y ss.; en *idem*, I, XXIII. 4, se habla de sus diversas formas. (*N. de los t.*)

1. *Konjunkturforschungsstelle* (KOF) —Instituto para la Investigación de la Coyuntura Económica—, Universidad Politécnica de Zurich, Suiza, *Index of Globalization* 2007. (Las distribuciones están basadas en datos del año 2004.)

las políticas proteccionistas formales, ralentice el progreso de la globalización del mercado libre en una o dos décadas.

Espero que los capítulos sobre la guerra, la hegemonía, los imperios y el imperialismo, la situación actual del nacionalismo y de las transformaciones de la violencia pública y el terrorismo resulten comprensibles para el lector sin mayores comentarios por parte de su autor. Por consiguiente, también espero eso mismo de los dos capítulos sobre la democracia, pese a que sea consciente de que resulta notablemente controvertido tratar de mostrar que una de las vacas más sagradas de la vulgata discursiva política de Occidente produce en realidad menos leche de lo que suele suponerse. Sobre la democracia, y concretamente sobre las milagrosas cualidades asignadas a los gobiernos electos por mayorías aritméticas de votantes que optan entre partidos enfrentados se vierten hoy más tonterías y disparates sin sentido en el discurso público occidental que sobre cualquier otra palabra o concepto político. En la retórica estadounidense de los últimos tiempos, el vocablo ha perdido todo contacto con la realidad. Estos capítulos son una pequeña contribución a la necesaria tarea de relajar el ambiente mediante la aplicación de la razón y el sentido común, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso en favor de un gobierno para las personas —para todas las personas, ricas y pobres, tontas y listas, informadas e ignorantes—, y en favor de que se las consulte y se procure su consentimiento.

Los artículos aquí reunidos, en su mayor parte conferencias leídas ante públicos diversos, tratan de exponer y de explicar la situación en que hoy se encuentra el mundo, o grandes porciones de él. Tal vez contribuyan a definir los

problemas a que nos enfrentamos al inicio del siglo XXI, pero no sugieren un programa ni una solución práctica. Han sido escritos entre el año 2000 y el 2006, y reflejan por tanto las preocupaciones internacionales específicas de ese período, un período dominado por la decisión que en 2001 llevó al gobierno estadounidense a imponer una hegemonía mundial unilateral, a denunciar los convenios internacionales hasta entonces aceptados, a reservarse el derecho a declarar guerras de agresión o a emprender siempre que lo considerara oportuno otro tipo de operaciones militares, así como a poner efectivamente en práctica esas decisiones. Dado el desastre* de la guerra de Irak, no resulta ya necesario demostrar que este proyecto andaba falto de realismo, con lo que la pregunta de si hubiéramos deseado alcanzar o no el éxito en esa empresa pertenece por entero al ámbito académico.** No obstante, debería ser evidente, y los lectores deberían tenerlo así presente, que estos artículos han sido escritos por un autor que se muestra profundamente crítico con dicho proyecto. Esto se debe en parte a la solidez y al carácter inquebrantable de las convicciones políticas del autor, entre las que se cuenta la hostilidad con el imperialismo —ya sea el de las grandes potencias que pretenden estar haciendo un favor a sus víctimas al conquistarlas o el de los hombres blancos

* El autor utiliza la voz francesa *débacle*, de enérgicas connotaciones político-literarias por su vinculación a la novela homónima de Émile Zola —volumen 19 de la monumental panorámica en 20 volúmenes de la Francia del Segundo Imperio plasmada en *Los Rougon-Macquart*. (*N. de los t.*)

** El autor alude aquí a la interrogante que lanzó el presidente George W. Bush a la sociedad estadounidense con intención exculpatoria tras quedar demostrado que no había en Irak armas de destrucción masiva y que la posguerra se hallaba fuera de control. (*N. de los t.*)

que asumen automáticamente que ellos mismos y sus disposiciones son superiores a las que puedan determinar gentes con otro color de piel—. Y en parte se debe también a que sospecho, en términos racionalmente justificables, que la patología ocupacional de los estados y los gobernantes que no conciben límites para su poder o su éxito es la megalomanía.

La mayor parte de los argumentos y mentiras con que políticos estadounidenses y británicos, abogados —pagados o no—, retóricos, publicistas e ideólogos aficionados han justificado las acciones de Estados Unidos desde el año 2001 no pueden ya detenernos. Sin embargo, se ha planteado una cuestión menos vergonzosa, si no en relación con la guerra de Irak, sí al menos en referencia a la afirmación general de que en una época de barbarie, violencia y desorden global crecientes, las intervenciones armadas transfronterizas destinadas a salvaguardar o a establecer los derechos humanos resultan legítimas y a veces necesarias. Para algunos, esto implica que es deseable la existencia de una hegemonía imperial mundial, y más concretamente la de una hegemonía ejercida por la única potencia capaz de imponerla: los Estados Unidos de América. Esta propuesta, a la que podría darse el nombre de imperialismo de los derechos humanos, pasó a formar parte del debate público en el transcurso de los conflictos de los Balcanes surgidos como consecuencia de la desintegración de la Yugoslavia comunista, de manera especial en Bosnia, conflictos que parecían sugerir que únicamente una fuerza armada externa podría poner fin a una interminable matanza recíproca y que sólo Estados Unidos tenía la capacidad y la determinación de emplear tal fuerza. El hecho de que Estados Unidos careciera de intereses particulares de orden histórico, político o económico en la región hizo que su intervención resultase aún más impresionante y aparentemente altruista. He tomado nota de ello en mis artículos. Pese a que dichos textos, en especial el capítulo 7 (La difusión de la democracia), contienen razones para rechazar este planteamiento, no estará de más añadir algunas observaciones a esta postura.

Es un planteamiento viciado en sus fundamentos por el hecho de que, aunque pueda darse efectivamente el caso de que las grandes potencias que procuran la materialización de sus políticas internacionales hagan cosas que convengan a los campeones de los derechos humanos y sean conscientes del valor publicitario de realizarlas, se trata no obstante de algo notablemente secundario en relación con sus objetivos, cuya concreción procuran hoy, si lo consideran necesario, con la implacable barbarie que nos ha legado el siglo XX. La relación con quienes consideran que una gran causa humanitaria es el eje central de todo estado puede derivar en alianza o en oposición, pero nunca desembocar en una identificación permanente. Dicha relación es siempre efímera, incluso en el raro caso de los jóvenes estados revolucionarios que verdaderamente trataban de difundir un mensaje universal —la Francia posterior al año 1792 y la Rusia de 1917, aunque, casualmente, no el Estados Unidos aislacionista de George Washington—. La postura que adopta por sistema cualquier estado es la de la procura de sus intereses.

Al margen de esto, el argumento humanitario en favor de la intervención armada en los asuntos de los estados descansa en tres presupuestos: que en el mundo contemporáneo existe la posibilidad de que surjan situaciones

intolerables —por lo general matanzas, o incluso genocidios— que la exijan; que no es posible hallar otras formas de hacer frente a tales situaciones; y que los beneficios derivados de proceder de este modo son patentemente superiores a los costes. Todos estos presupuestos se encuentran justificados en ocasiones, aunque, como prueba el debate sobre Irak e Irán, rara vez exista concordancia universal respecto a qué sea exactamente una «situación intolerable». Es probable que hubiera un consenso en los dos casos más obvios de intervención justificada: la invasión de Kampuchea* por Vietnam, que puso fin al espantoso sistema de los «campos de exterminio» de Pol Pot (1978), y la acción de Tanzania que desmanteló el régimen de terror de Idi Amin en Uganda (1979). (No todas las intervenciones armadas extranjeras que han permitido actuar con rapidez y éxito en ciertas situaciones de crisis local han arrojado resultados tan satisfactorios —piénsese por ejemplo en Liberia o en Timor Oriental—.) Ambas intervenciones se realizaron mediante breves incursiones, produjeron beneficios inmediatos, dieron probablemente pie a algunas mejoras duraderas, y al mismo tiempo no se vieron acompañadas de una abrogación sistemática del arraigado principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. Además, entre otras consideraciones secundarias, carecieron de implicaciones imperialistas y tampoco involucraron a la política general del mundo. De hecho, tanto Estados Unidos como China continuaron apoyando al depuesto Pol Pot. Ahora bien, este tipo de intervenciones *ad hoc* carece de relevancia como argumento en favor del carácter deseable de la hegemonía mundial de Estados Unidos.

No sucede lo mismo con las intervenciones armadas de los últimos años, que, en cualquier caso, han sido selectivas y han dejado intactas situaciones que de acuerdo con criterios humanitarios se contarían sin duda entre los peores ejemplos de atrocidad, en particular el del genocidio del África central. En los Balcanes de la década de 1990, la preocupación humanitaria fue ciertamente un factor significativo, aunque no el único. Es probable que en Bosnia, pese a que se haya argumentado lo contrario, la intervención exterior contribuyera a detener el derramamiento de sangre en la zona con mayor rapidez que si se hubiera dejado proseguir hasta su término la guerra entre serbios, croatas y bosnios musulmanes, pero la región sigue siendo inestable. No está en modo alguno claro que en 1999 la intervención armada fuera el único modo de zanjar los problemas suscitados por el alzamiento contra Serbia de un grupo extremista minoritario surgido entre los nacionalistas albaneses de Kosovo. Su fundamento humanitario era bastante más dudoso que el de Bosnia, y dado que provocó que Serbia procediera a expulsar en masa a los albaneses de Kosovo, y que fue causa tanto de las víctimas civiles de la propia guerra como de los varios meses de devastadores bombardeos sobre Serbia, es posible que de hecho empeorara la situación humanitaria. Además, las relaciones entre los serbios y los albaneses tampoco se han normalizado. En cualquier caso, al menos en los Balcanes las intervenciones fueron rápidas, y a corto plazo decisivas, aunque hasta el momento nadie, excepto quizá Croacia, tenga motivos para sentirse satisfecho con el resultado.

* O Camboya, a partir del año 1989. (*N. de los t.*)

Por otra parte, las guerras libradas en Afganistán e Irak desde el año 2001 han sido operaciones militares estadounidenses emprendidas por razones distintas de las humanitarias, pese a haber sido justificadas ante la opinión pública humanitaria con el fundamento de que iban a eliminar algunos regímenes indeseables. De no haber sido por el 11-S, ni siquiera Estados Unidos habría considerado que la situación de uno u otro país exigiera una invasión inmediata. Si la intervención en Afganistán fue aceptada por los demás estados sobre la base de los obsoletos argumentos «realistas», la invasión de Irak fue condenada de forma prácticamente universal. Aunque los regímenes de los talibán y de Sadam Hussein fueron derrocados de forma rápida, ninguna de las dos guerras se ha saldado con una victoria, y desde luego ninguna ha alcanzado los objetivos anunciados al principio: el establecimiento de regímenes democráticos en sintonía con los valores de Occidente y capaces de convertirse en faro para otras sociedades aún no democratizadas de la región. Ambas contiendas, aunque especialmente la catastrófica guerra de Irak, se han revelado largas y capaces de provocar una destrucción masiva y sangrienta, sin contar con que no sólo siguen activas en el momento en que escribo estas líneas, sino que no hay perspectivas de que vayan a concluir.

En todos estos casos, la intervención armada ha partido de unos estados extranjeros dotados de un poderío militar y unos recursos muy superiores. Ninguna de estas actuaciones ha generado hasta el momento soluciones estables. En todos los países concernidos se mantienen tanto la ocupación militar como la supervisión política extranjeras. En el mejor de los casos —aunque evidentemente no en Afganistán e Irak—,

la intervención ha puesto fin a unas guerras sangrientas y conseguido una especie de paz, pero los resultados positivos, como sucede en los Balcanes, son decepcionantes. En el peor de los casos —Irak—, nadie se atrevería a negar en serio que la situación del pueblo cuya liberación fue la excusa oficial para poder emprender la guerra es peor que antes. La reciente cuenta de resultados de las intervenciones armadas en los asuntos de otros países, incluso en el caso de las llevadas a cabo por superpotencias, no arroja un balance de éxito.

Este fracaso se basa parcialmente en una suposición que también subyace a buena parte del imperialismo de los derechos humanos, la de que los regímenes de barbarie y tiranía son inmunes al cambio interno, por lo que únicamente una fuerza exterior puede provocar su fin y la consiguiente difusión de nuestros valores y nuestras instituciones políticas o legales. Estas suposiciones son una herencia de la época en que los beligerantes de la Guerra Fría denunciaban el «totalitarismo». Son supuestos que no debieron haber perdurado tras el fin de la Unión Soviética o, en el mismo sentido, después del evidente proceso de democratización interna vivido con posterioridad al año 1980 en varios de los regímenes no comunistas de Asia y Sudamérica considerados en su día indeseables, autoritarios, militaristas y dictatoriales. Las mencionadas suposiciones se basan también en la creencia de que es posible alumbrar instantáneamente importantes transformaciones culturales mediante actos de fuerza. Pero no es así.

La difusión de valores e instituciones casi nunca puede materializarse por medio de la imposición súbita de unas fuerzas externas, a menos que en su punto de aplicación se

1
GUERRA Y PAZ EN EL SIGLO XX*

El siglo xx ha sido el más sangriento en la historia conocida de la humanidad. La cifra total de muertos provocados directa o indirectamente por las guerras se eleva a unos 187 millones de personas, un número que equivale a más del 10 por 100 de la población mundial de 1913. Si tomamos el año 1914 como punto de partida, el siglo xx ha sido un siglo de guerras casi ininterrumpidas, a excepción de algunos breves períodos sin conflictos armados organizados en todo el planeta. Ha sido un siglo dominado por las guerras mundiales, guerras entre estados territoriales o alianzas de estados. Podríamos considerar incluso el período comprendido entre 1914 y 1945 como una sola «guerra de los Treinta Años», tan sólo interrumpida por una pausa en los años veinte; una pausa que se inició con la retirada final de los japoneses de las regiones más orientales de la Unión Soviética, en 1922, y que concluyó con la invasión de Manchuria en 1931. A este episodio le sucedieron, casi de inmediato, cuarenta años de guerra fría, que contribuyeron a forjar la definición que hiciera Hobbes de la guerra: «más que la batalla ni la lucha en sí misma, el espacio de tiempo en el que reina la voluntad de resolver las diferencias por medio de la batalla». Cabe discutir si las acciones en las que se ha visto envuelto el ejército de Estados

* «War and Peace in the 20th Century», *London Review of Books*, 21 de febrero de 2002, pp. 16-18; traducción castellana de Ferran Esteve.

Unidos desde el final de la guerra fría en diferentes zonas del planeta no son, en el fondo, una continuación del período de guerra mundial. Sea como fuere, nadie puede negar que, en Europa, África y el Asia central y occidental, los años noventa estuvieron marcados por los conflictos militares, bien declarados, bien encubiertos. El mundo no conoce la paz desde 1914, ni siquiera ahora.

Aun así, no podemos estudiar el siglo como si de un bloque uniforme se tratara, ni cronológica, ni geográficamente. Cronológicamente, abarca tres períodos: el período de la guerra mundial con Alemania como eje (de 1914 a 1945), el período de la confrontación entre las dos superpotencias (de 1945 a 1989) y el período que se inició con el fin del sistema clásico de equilibrio de poder internacional. Me referiré a estos períodos como período I, período II y período III. Geográficamente, el impacto de las operaciones militares ha sido altamente desigual. Con la salvedad de la guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, no ha habido grandes guerras entre estados —no hay que confundirlas con las guerras civiles— en el hemisferio occidental (las Américas) en el siglo XX. Las operaciones militares enemigas apenas han tenido como escenario esa región, de ahí el *shock* que provocó el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001. Desde 1945, las guerras entre estados también han desaparecido del mapa europeo, una zona que, hasta entonces, había sido su principal campo de batalla. Aunque en el período III la guerra regresó al sudeste europeo, no parece muy posible que vaya a extenderse al resto del continente. Por otro lado, durante el período II las guerras entre estados también asolaron Oriente Medio y el sur de Asia, aunque no estuvieran

necesariamente conectadas con el clima de confrontación global, mientras que el este y el sudeste asiático (Corea o Indochina) fueron escenario de grandes guerras provocadas por las tensiones a escala mundial. Otras zonas, como el África subsahariana, apenas afectadas por las guerras durante el período I (a excepción de Etiopía, víctima tardía de la conquista colonial italiana entre 1935 y 1936), vivieron conflictos armados durante el período II y fueron testigo de masacres y del sufrimiento de la población durante el período III.

Se observan asimismo otras dos características en las guerras en el siglo XX, aunque la primera es menos evidente que la segunda. A principios del siglo XXI, estamos en un mundo donde las operaciones armadas ya no están fundamentalmente en manos de los gobiernos y de sus agentes autorizados, y donde las partes en conflicto no comparten características, ni estatus, ni objetivos, excepción hecha del deseo de recurrir a la violencia. Las guerras entre estados fueron la forma predominante de guerra durante los períodos I y II, tanto que prácticamente ensombrecieron guerras civiles y demás conflictos armados dentro de las fronteras de los estados o de los imperios. Incluso las guerras civiles que se sucedieron en los territorios del Imperio ruso después de la Revolución de Octubre y las que estallaron tras la caída del Imperio chino podrían considerarse conflictos internacionales, pues no habrían tenido sentido sin éstos. Por otro lado, aunque en América Latina ningún ejército haya atravesado las fronteras de otro país en el siglo XX, el continente ha sido el escenario de grandes enfrentamientos civiles: en México a partir de 1911, en Colombia desde 1948 y en diferentes países de Centroamérica durante el período II. Nadie se atreve

a admitir que el número de guerras internacionales haya ido en descenso de forma constante desde mediados de los años sesenta, cuando las disputas entre estados cedieron su lugar a los problemas internos. La cifra de éstos no dejó de crecer hasta los años noventa, momento en el que se estabilizó.

Más familiar nos resulta la progresiva desaparición de la línea que separaba a los combatientes de los no combatientes. En las dos guerras mundiales de la primera mitad del siglo se vio envuelta toda la población de los países en liza, y sufrieron del mismo modo militares y población civil. A lo largo del siglo, sin embargo, el peso de la guerra ha ido recayendo más y más sobre los hombros de los civiles, que no sólo eran las víctimas del conflicto sino también el objetivo de las operaciones militares y politicomilitares. El contraste entre la primera guerra mundial y la segunda es sobrecogedor: solamente el 5 por 100 de las víctimas de la primera guerra mundial eran civiles; en la segunda, el porcentaje se elevó hasta el 66 por 100. En la actualidad, la proporción de víctimas civiles de cualquier guerra se sitúa entre el 80 y el 90 por 100 del total, y esta cifra ha aumentado desde el fin de la guerra fría porque muchas de las operaciones militares que se han llevado a cabo desde entonces no han correspondido a ejércitos de soldados de reemplazo sino a tropas regulares o irregulares, las cuales, en muchos casos, disponían de armamento de última generación y se protegían para evitar bajas. Si bien es cierto que este armamento ha hecho posible recuperar, en algunos casos, la distinción entre objetivos civiles y militares, y por extensión entre combatientes y no combatientes, nada nos induce a creer que los civiles hayan dejado de ser las principales víctimas de la guerra.

Más aún, el sufrimiento de la población civil no guarda relación con la escala o la intensidad de las operaciones militares. En términos estrictamente militares, las dos semanas que duró la guerra entre la India y Pakistán por la independencia de Bangla Desh en 1971 fueron un asunto menor, pero entre sus consecuencias se cuentan diez millones de refugiados. En los combates entre grupos armados en África en los años noventa no participaron más que unos miles de personas, en su mayoría soldados mal equipados. Aun así, aquellas guerras obligaron a siete millones de personas a refugiarse, más que las que tuvieron que hacerlo durante la guerra fría, cuando aquel mismo continente fue el escenario escogido por las superpotencias para librar varias luchas a través de sus aliados.

Este fenómeno no se limita a zonas pobres y remotas. En algunas regiones del planeta, las consecuencias de la guerra sobre la población civil se ven acrecentadas por la globalización y la importancia mayor que se concede a un flujo de información, de servicios técnicos, de entregas y de aprovisionamientos cada vez más importante. Incluso una interrupción comparativamente breve de estos movimientos, como lo fue por ejemplo el cierre del espacio aéreo de Estados Unidos después del 11 de septiembre, puede tener un efecto de primera magnitud, y no siempre de corta duración, en la economía global.

Sería mucho más sencillo escribir sobre guerra y paz en el siglo XX si la diferencia entre ambas fuera tan diáfana como parecía serlo a principios de siglo, cuando las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 dictaban las reglas por las que se regía la guerra. En principio, los conflictos

estallaban entre estados soberanos o, si transcurrían dentro de las fronteras de un estado en concreto, entre bandos suficientemente organizados como para que otros estados soberanos los consideraran partes en conflicto. Las operaciones militares debían distinguir claramente entre combatientes —que se diferenciaban del resto por el uniforme que vestían y por otros signos que denotaban su pertenencia a unas fuerzas armadas organizadas— y civiles no combatientes. En principio, la guerra enfrentaba únicamente a soldados. En la medida de lo posible, en tiempo de guerra había que proteger a la población civil. Y siempre quedaba implícito que estas convenciones no cubrían la totalidad de los conflictos armados civiles e internacionales, y más concretamente los que resultaban de la expansión imperial de los estados occidentales en aquellas regiones que no estaban bajo la jurisdicción de un estado soberano internacionalmente reconocido, aun cuando algunos de estos conflictos, si bien no todos, recibieran el apelativo de «guerras». Tampoco cubrían revueltas a gran escala contra estados consolidados, como el motín de la India, ni la actividad armada recurrente en aquellas regiones situadas allende el control *de facto* de los estados o de las autoridades imperiales que gobernaban sobre el papel, como las operaciones y las masacres en las montañas de Afganistán o de Marruecos. Con todo, las Convenciones de La Haya siguieron siendo las pautas que se aplicaron durante la primera guerra mundial. Durante el siglo xx, sin embargo, la relativa claridad del panorama se vio sustituida por el caos.

En primer lugar, la frontera entre los conflictos entre estados y los conflictos en el seno de los estados, es decir, entre guerras civiles y conflictos internacionales, se difuminó un tanto, pues una de las características del siglo xx es que no sólo ha sido un siglo de guerras, sino también de revoluciones y del fin de diferentes imperios. Las revoluciones o las guerras de liberación en el seno de un estado tuvieron consecuencias para la coyuntura internacional, especialmente durante la guerra fría. Por otro lado, después de la Revolución rusa, la intervención de los estados en la política doméstica de otros estados cuyas decisiones no compartían se convirtió en moneda corriente, cuando menos en aquellas situaciones en las que los riesgos para el agresor eran prácticamente nulos. Y sigue siendo así.

En segundo lugar, también dejó de ser clara la frontera entre guerra y paz. Con algunas excepciones, la segunda guerra mundial no empezó con declaraciones de guerra, ni acabó con tratados de paz. Asimismo, tras la contienda se dio un período que no podemos calificar claramente como de guerra o de paz ateniéndonos a las definiciones tradicionales, de ahí la invención de la expresión «guerra fría» para describirlo. El caos de la situación desde la guerra fría queda de manifiesto en la situación actual que se vive en Oriente Medio. Ni la palabra «paz», ni la palabra «guerra» describen exactamente la coyuntura en Iraq desde el fin efectivo de la guerra del Golfo —las potencias extranjeras siguen bombardeando el país casi a diario—, o las relaciones entre palestinos e israelíes, o las relaciones entre Israel y sus vecinos Siria y Líbano. Esta es la desgraciada herencia de las guerras mundiales del siglo xx, pero también de la cada vez más poderosa maquinaria de la propaganda de masas que trae consigo la guerra, y de un período de confrontación

entre ideologías incompatibles y apasionadas que impregnaron las guerras de un elemento propio de las cruzadas y comparable al que se daba en las guerras de religión del pasado. Más y más, el objetivo de estos conflictos, a diferencia de las guerras tradicionales del sistema de potencias internacionales, era algo tan innegociable como la «rendición incondicional». Y comoquiera que las partes contemplaban las guerras y las victorias en términos absolutos, rechazaban los obstáculos que las convenciones aceptadas de los siglos XVIII y XIX ponían a la posibilidad de victoria, incluidas las declaraciones de guerra. Y otro tanto sucedía con cualquier limitación sobre la posibilidad de imponer su voluntad. La historia nos muestra que los acuerdos fruto de un tratado de paz se pueden romper con facilidad.

En los últimos años, la situación se ha complicado más si cabe con la tendencia en el discurso público a emplear la palabra «guerra» para referirse al despliegue de una fuerza organizada contra actividades nacionales o internacionales consideradas como contrarias a la sociedad —«la guerra contra la Mafia», por ejemplo, o «la guerra contra los cárteles de la droga»—. Sin embargo, no sólo es mucha la distancia que separa la lucha por controlar o eliminar estas organizaciones o redes, incluidos los pequeños grupos terroristas, de las grandes operaciones bélicas, sino que este empleo confunde dos tipos de fuerzas armadas. Uno, que podemos llamar «soldados», se enfrenta a otros ejércitos y tiene como propósito su derrota. El otro, llamémoslo «policía», aspira a mantener o a restablecer el grado necesario de ley y orden público en el seno de una entidad política ya existente, por lo general un estado. La victoria, que no tiene necesariamente

una connotación moral, es el fin de una de las fuerzas; la otra debe llevar ante la justicia a quien ha quebrantado la ley, y esta tarea sí que posee una connotación moral. Esta distinción es, sin embargo, mucho más fácil en la teoría que en la práctica. En sí mismo, el homicidio que un soldado comete en acto de servicio no es delito. Pero, ¿y si un miembro del IRA se ve a sí mismo como un soldado, a pesar de ser, según las leyes del Reino Unido, un asesino? ¿Eran las operaciones en Irlanda del Norte una guerra tal y como sostenía el IRA, o un intento por mantener el orden frente a un grupo de malhechores en una provincia del Reino Unido? A la vista de que, durante más de treinta años, la movilización contra el IRA no afectó únicamente a un contingente policial numeroso sino también al ejército, podemos concluir que sí fue una guerra, aunque siguió un plan sistemático, como si de una operación policial se tratara, para minimizar el número de bajas y no perturbar el día a día de la provincia. Al final, se alcanzó una solución negociada, una solución que, como es habitual, no ha traído consigo de momento la paz; tan sólo la ausencia de enfrentamientos. Así de complejas y confusas son las relaciones entre guerra y paz al principio de este nuevo siglo. Y nada mejor para ilustrarlo que las operaciones militares en las que se ven mezclados hoy Estados Unidos y sus aliados.

Como ya sucediera durante todo el siglo XX, vivimos en un período marcado por la ausencia total de una autoridad global eficaz y capaz de controlar o de resolver los conflictos armados. La globalización ha avanzado en casi todos los aspectos —en el económico, en el tecnológico, en el cultural e incluso en el lingüístico— menos en uno: política y militar-

mente, los estados territoriales siguen siendo las únicas autoridades reales. Oficialmente, existen unos doscientos estados, pero en la práctica sólo unos cuantos tienen peso, y de todos ellos Estados Unidos es el más poderoso. Sin embargo, ningún estado o imperio ha sido lo suficientemente extenso, rico y poderoso para mantener la hegemonía política, y menos aún para alzarse con la supremacía política y militar. El mundo es demasiado grande, complicado y plural. Y no parece factible que Estados Unidos, ni ninguna otra potencia estatal imaginable, pueda consolidar su dominio, por más que se lo proponga.

Una sola superpotencia no puede compensar la ausencia de autoridades globales, máxime a la vista de la falta de convenciones —sobre desarme internacional, por ejemplo, o sobre control armamentístico— lo suficientemente vinculantes como para que los principales estados se sometan a ellas. Existen algunos órganos que sí entran en esta categoría, y el caso más paradigmático son las Naciones Unidas, diversos organismos técnicos y financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y algunos tribunales internacionales. No obstante, todos ellos tienen simplemente el poder que les otorgan los acuerdos entre estados, el que les brinda el respaldo de estados poderosos o el que los estados acceden voluntariamente a concederles. Por lamentable que esto sea, nada hace pensar que las cosas vayan a cambiar en un futuro próximo.

Siendo los estados los únicos que ejercen un poder real, existe el riesgo de que las instituciones internacionales se vean despojadas de eficacia o que carezcan de legitimidad

universal a la hora de tratar de resolver delitos como los «crímenes de guerra». Incluso cuando el acuerdo de todas las partes permita la creación de los tribunales mundiales, como sucedió, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, surgida del Estatuto de Roma de Naciones Unidas del 17 de julio de 1998, las decisiones de éste no se considerarán necesariamente legítimas y vinculantes mientras los estados más poderosos hagan oídos sordos a sus sentencias. Por el contrario, una sociedad formada por varios estados poderosos puede tener la fuerza suficiente para llevar a algunos criminales de estados más pequeños ante estos tribunales, frenando tal vez de este modo la crueldad de los conflictos armados en determinadas zonas. Pero esto no es un ejemplo de ejercicio del derecho internacional, sino de ejercicio tradicional del poder y de la influencia en el seno de un sistema internacional de estados.[1]

Hay sin embargo una gran diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI: la idea de que la guerra ya no transcurre en un mundo dividido en áreas territoriales bajo la autoridad de gobiernos legítimos que están en posesión del monopolio de los mecanismos del poder público y de la coerción. Nunca lo fue en el caso de los países donde había estallado la revolución, ni en los restos de los imperios en desintegración. No obstante, todavía recientemente, y con la única salvedad de China entre 1922 y 1949, los nuevos regímenes revoluciona-

1. Otro tanto sucede, por definición, cuando los estados aceptan individualmente el derecho internacional humanitario y afirman unilateralmente su derecho a aplicarlo en sus tribunales nacionales a los ciudadanos de otros países, como sucediera concretamente con los tribunales españoles, con el respaldo de la Cámara de los Lores británica, en el caso del general Pinochet.

rios o poscoloniales no han tardado en afirmarse como estados o regímenes más o menos organizados y que sucedían al orden anterior.

Aun así, aproximadamente durante los últimos treinta años el estado territorial ha perdido, por diferentes motivos, el monopolio tradicional del ejército, buena parte de la fuerza y la estabilidad que lo caracterizaron y, con una frecuencia cada vez mayor, el sentido fundamental de legitimidad o cuando menos de aceptación que les permitía obligar a ciudadanos obedientes a pagar impuestos o a someterse al servicio militar. Los instrumentos materiales para la guerra están hoy al alcance de grupos privados, como también los canales para financiar una contienda en la que no participen los estados. Y todo esto ha provocado un cambio en el equilibrio entre las organizaciones estatales y las no estatales.

Los conflictos armados entre estados se han agravado, y esta situación puede seguir así durante años sin que se atisbe la menor posibilidad de victoria de uno de los dos bandos o de alcanzar una solución: Cachemira, Angola, Sri Lanka, Chechenia, Colombia... En casos extremos, como por ejemplo en algunas regiones de África, el estado prácticamente ha desaparecido; en Colombia, ya no controla una parte de su territorio. Incluso los estados fuertes y consolidados han tenido problemas para acabar con grupúsculos armados al margen de la ley, como el IRA en Gran Bretaña o ETA en España. Esta situación presenta, sin embargo, una novedad: después de sufrir un atentado terrorista, el estado más poderoso del planeta se ha visto en la obligación de lanzar una operación contra una pequeña red u organización internacional

y no gubernamental que carece tanto de un espacio territorial como de un ejército propiamente dicho.

¿Cómo afectan estos cambios al equilibrio entre guerra y paz en este siglo? Prefiero no aventurarme en predicciones sobre qué conflictos podrían estallar o sobre sus posibles resultados. No obstante, tanto la forma de los conflictos armados como las vías de solución han cambiado radicalmente como consecuencia de la transformación del sistema mundial de estados soberanos.

La desaparición de la URSS ha traído consigo la desaparición del sistema de superpotencias que rigió las relaciones internacionales durante casi dos siglos y que, salvo contadas excepciones, permitió mantener bajo control hasta cierto punto los conflictos entre estados. Pero su desaparición ha acabado también con una de las principales trabas en las guerras entre estados y en la intervención armada de unos en las cuestiones de otros, por cuanto las fuerzas armadas pocas veces se atrevían a cruzar las fronteras de otro país durante la guerra fría. Sin embargo, incluso entonces el sistema internacional era potencialmente inestable, de resultas de la proliferación de pequeños estados y, en algunos casos, sumamente débiles, que, con todo, habían conseguido ingresar en las Naciones Unidas como estados oficialmente «soberanos». La desintegración de la URSS y de los regímenes comunistas en Europa no hizo sino acrecentar esta inestabilidad. Las tendencias separatistas de toda índole que ya se han manifestado en estados-nación consolidados, como Gran Bretaña, España, Bélgica o Italia, podrían incluso acentuarse. También se ha multiplicado la cifra de actores que operan en la escena internacional. En esta situación, no debe

sorprendernos que las guerras transfronterizas y las intervenciones armadas hayan aumentado desde que acabara la guerra fría.

¿De qué mecanismos disponemos para controlar y zanjar estos conflictos? La perspectiva no es nada halagüeña. En ninguno de los conflictos armados de los años noventa se llegó a una solución firme. La pervivencia de las instituciones, de los postulados y de la retórica de la guerra fría ha mantenido con vida las viejas sospechas, ha exacerbado la desintegración poscomunista del sudeste europeo y ha complicado más si cabe la posibilidad de alcanzar una solución en la región antaño conocida como Yugoslavia.

Habrá que olvidar todos estos postulados propios de la guerra fría, tanto los ideológicos como los políticos, si nos proponemos dotarnos de herramientas que nos permitan controlar los conflictos armados. También es evidente el fracaso presente y futuro de Estados Unidos en su empeño por imponer un nuevo orden mundial (sea cual sea su naturaleza) por medio de la fuerza unilateral, por más que las relaciones de poder le den la razón en el presente y por más que cuente hoy con el respaldo de una alianza condenada inevitablemente a desaparecer a corto plazo. La coyuntura internacional seguirá siendo multilateral, y su funcionamiento dependerá de la capacidad de diferentes entidades de peso para ponerse de acuerdo entre sí, aun cuando haya un estado que domine militarmente. Hoy sabemos hasta qué punto dependen las acciones militares internacionales que decide emprender Estados Unidos de una solución negociada con otros estados, y también sabemos que la resolución política de las guerras, incluso de aquellas en las que participa

Estados Unidos, nacerá de la negociación, no de la imposición unilateral. No parece que, en un futuro próximo, vayan a volver los tiempos en que las guerras terminaban con la rendición incondicional de una de las partes.

Asimismo, es preciso replantearse el papel de los organismos internacionales existentes, y especialmente el de las Naciones Unidas que, siempre presente y llamada a intervenir en no pocas ocasiones, carece de unas funciones claramente delimitadas en la resolución de disputas, y su estrategia y su proceder están siempre a merced de unos poderes políticos cambiantes. El principal defecto del sistema que ha de servir para zanjar cualquier conflicto ha sido hasta la fecha la ausencia de un intermediario internacional realmente neutral y capaz de actuar sin necesidad de autorización previa por parte del Consejo de Seguridad.

Desde el fin de la guerra fría, la gestión de la paz y de la guerra ha respondido a un plan improvisado. A lo sumo, como sucediera en los Balcanes, se ha logrado detener el conflicto armado con la intervención militar extranjera y regresar, tras el fin de las hostilidades, al *statu quo* gracias a la participación de ejércitos de terceros países. Hace años que algunos estados fuertes empezarón a decantarse, individualmente, por esta suerte de intervención a largo plazo en sus círculos de influencia (Siria en el Líbano, por ejemplo), pero solamente han recurrido a ella en tanto que forma de acción colectiva Estados Unidos y sus aliados, en ocasiones bajo los auspicios de Naciones Unidas, en ocasiones no. Los resultados no han sido, hasta la fecha, satisfactorios para ninguna de las partes. Estas intervenciones obligan a los países a mantener sus tropas indefinidamente, y a un coste desorbitado,

en regiones sin ningún interés concreto y que no les reportan beneficio alguno, dejándolas a merced de la pasividad de la población ocupada, una pasividad que, sin embargo, no siempre se puede garantizar; asimismo, la organización de una resistencia armada obliga a sustituir a los pequeños grupos de «garantes de la paz» armados por escuadrones mucho más numerosos. Además, los países pobres y débiles pueden ver estas intervenciones como un recordatorio de la época de las colonias y los protectorados, sobre todo cuando buena parte de la economía local pasa a depender sobremanera de las fuerzas de ocupación. Por todo ello, seguimos sin tener la certeza de si es posible deducir de este tipo de intervenciones un modelo general para controlar en el futuro los conflictos armados.

El equilibrio entre guerra y paz en el siglo XXI no dependerá de la creación de mejores mecanismos de negociación y resolución de conflictos sino de la estabilidad doméstica y de la capacidad para evitar enfrentamientos militares. Salvo contadas excepciones, es poco probable que se repitan las disputas y las fricciones entre los estados ya existentes que desembocaron en el pasado en conflictos armados. Comparativamente hablando, se ha reducido, por ejemplo, el número de disputas entre gobiernos por cuestiones fronterizas. Por otro lado, es más sencillo que aumente la violencia a escala interna: el principal peligro de la guerra estriba en la intervención de otros estados o de otros agentes militares.

Los estados con una economía boyante y estable y una distribución de la riqueza relativamente equitativa son menos susceptibles de sufrir un seísmo social y político que aquellos pobres, donde las desigualdades están a la orden del día y cuya economía es todo menos estable. Del mismo modo, la posibilidad de la paz se vería afectada por un aumento drástico de las desigualdades económicas y sociales, tanto en el seno de los países como entre unos y otros. Evitar o controlar la violencia armada dentro del estado depende más que nunca, sin embargo, del poder y de la intervención eficaz de los gobiernos nacionales y de su legitimidad a ojos de la mayoría de la población. Hoy ningún gobierno puede dar por sentada la existencia de una población civil desarmada, ni que sigue vigente el grado de orden público que se dio en grandes partes de Europa. Hoy, ningún gobierno puede pasar por alto o eliminar a las minorías armadas de su territorio. Y aun así el mundo está cada vez más dividido en estados que saben cómo administrar sus territorios y a su población, incluso cuando se enfrenta, como le sucediera al Reino Unido, a décadas de acción armada por parte de un enemigo interno; como también está dividido en un número mayor de territorios delimitados por fronteras internacionales reconocidas oficialmente y cuyos gobiernos o bien son débiles y corruptos, o simplemente no existen. Estas zonas son el escenario de luchas internas sangrientas y de conflictos internacionales, como los que hemos visto en África Central. Sin embargo, nada parece indicar que, a corto plazo, vayan a mejorar las condiciones en estas regiones. Todo lo contrario: si los gobiernos de estos países inestables se debilitaran aún más, o el mapa político del mundo se sobrebalcanizara, aumentaría el peligro de un conflicto armado.

Podemos aventurarnos a esbozar aquí una previsión: en el siglo XXI, la guerra no será tan sangrienta como lo fue en el siglo XX, pero la violencia armada, que dará lugar a un grado

de sufrimiento y a unas pérdidas desproporcionadas, continuará omnipresente y será un mal endémico, y epidémico por momentos, en gran parte del mundo. Queda lejos la idea de un siglo de paz.

2
GUERRA, PAZ Y HEGEMONÍA A COMIENZOS DEL SIGLO XXI*

I

Hablaré de guerra, de paz y de hegemonía aunque, como es costumbre entre los historiadores, abordaré problemas actuales a partir del pasado. Resulta imposible hablar del futuro político del planeta a menos que tengamos presente que vivimos una época en la que la historia, y por historia entiendo el proceso de cambio en la vida humana y en la sociedad y el impacto de las personas en el entorno global, se ha acelerado a un ritmo vertiginoso. La historia avanza hoy a una velocidad que amenaza el futuro de la raza humana y del medio natural. Un incauto norteamericano anunció el fin de la Historia tras la caída del muro de Berlín, y por eso soy muy reticente a emplear una frase tan manifiestamente desacreditada. Aun así, a mediados del siglo pasado ingresamos en una nueva etapa de la historia universal que comportó el fin de la Historia tal y como la hemos conocido en los últimos diez mil años, es decir, desde la invención de la agricultura sedentaria. Y no sabemos hacia dónde nos dirigimos.

He intentado esbozar en mi *Historia del siglo xx* las líneas maestras de esta ruptura súbita y drástica en la historia uni-

* «War, Peace and Hegemony at the Beginning of the 21st Century», Delhi, 17 de diciembre de 2004; traducción castellana de Ferran Esteve.

versal. Las transformaciones tecnológicas y en los procesos de producción son evidentes. Basta pensar en la velocidad a la que se ha producido una revolución en el terreno de las comunicaciones que ha acabado con las cuestiones de índole temporal y espacial. En 2004, internet, sin embargo, apenas tiene diez años de vida. También he señalado cuatro aspectos sociales de esta revolución que inciden en el futuro internacional: el funesto declive y caída del campesinado, que constituyó hasta el siglo XIX el grueso de la humanidad y la base del sistema económico; la importancia que, en consecuencia, ha ido cobrando una sociedad predominantemente urbana, y sobre todo las megalópolis con sus millones de habitantes; la sustitución de un mundo basado en la comunicación verbal por un mundo donde la lectura es un hecho universal y en el que hombres y máquinas practican la escritura; y, por último, los cambios en la situación de las mujeres.

El declive y la caída del sector de la población mundial dedicado a tareas agrícolas es obvio en el mundo desarrollado. Hoy, la agricultura da empleo al 4 por 100 de la población ocupada en los países de la OCDE, y al 2 por 100 en Estados Unidos. Sin embargo, no sólo en esas zonas es evidente. A mediados de los años sesenta, existían todavía en Europa cinco estados donde más de la mitad de la población ocupada trabajaba en este sector, once en el continente americano, dieciocho en Asia y era el sector principal en todos los países africanos, a excepción de tres: Libia, Túnez y Sudáfrica. Hoy, la situación ha dado un vuelco. Por cuestiones prácticas, ya no quedan en Europa o en América países con más del 50 por 100 de la población dedicada a la agricultura, ni tampoco en el mundo islámico. Incluso en Pakistán la cifra es inferior al 50

por 100. En el caso de Turquía, la población dedicada a la agricultura ha pasado de tres cuartas partes a un tercio, y algunos de los principales baluartes de la economía campesina en el sudeste asiático se han venido abajo: en Indonesia, la proporción ha pasado del 67 por 100 al 44 por 100; en Filipinas, del 53 por 100 al 37 por 100; en Tailandia, del 82 por 100 al 46 por 100; en Malasia, del 51 por 100 al 18 por 100. De hecho, si exceptuamos la mayor parte del África subsahariana, los únicos bastiones de la sociedad rural —donde más de un 60 por 100 de la población ocupada se dedica a la agricultura— se hallan hoy en las zonas del sudeste asiático antaño en manos de los imperios francés y británico: India, Bangla Desh, Myanmar y los países de la península indochina. No obstante, dado el ritmo creciente de la industrialización, ¿por cuánto tiempo seguirá siendo así? A finales de los años sesenta, la población rural suponía la mitad de los habitantes de Taiwán y de Corea del Sur; hoy representa, respectivamente, el 8 por 100 y el 10 por 100. En pocas décadas habremos dejado de ser lo que fuimos desde nuestra aparición: una especie formada principalmente por cazadores, recolectores y productores de alimentos.

También habremos dejado de ser una especie eminentemente rural. En 1900,[1] solamente el 16 por 100 de la población del planeta vivía en ciudades. En 1950, esta cifra estaba ligeramente por debajo del 26 por 100. Hoy, se sitúa en torno al 48 por 100. En los países desarrollados y en muchas otras regiones del planeta, el campo, incluso en zonas productivas desde

1. Paul Bairoch, *Cities and Economic Development from the Dawn of History to the Present*, University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 634.

el punto de vista de la agricultura, es un desierto verde donde apenas tienen presencia los humanos, salvo los que viajan en coche o los que habitan pequeños asentamientos, y el viajero sólo se topa con otras personas al llegar a la población más cercana. En este caso, sin embargo, la extrapolación se complica. Es cierto que el grado de urbanización en los viejos países desarrollados es considerable, pero no nos encontramos ya ante el modelo típico de urbanización que se había dado hasta hoy, y que consistía en la desesperada huida del campo a lo que podríamos denominar hiperciudades. Las ciudades en el mundo desarrollado, incluso las ciudades que crecen a un ritmo normal, asisten a la suburbanización de áreas cada vez mayores que se sitúan alrededor del centro o centros originales. Hoy, solamente diez de las cincuenta mayores ciudades del planeta, y únicamente dos de las dieciocho que cuentan con más de diez millones de habitantes, se hallan en Europa o en Norteamérica. A excepción de Oporto, en Portugal, las ciudades cuyo ritmo de crecimiento es más elevado y que superan el millón de habitantes se encuentran en Asia (20), África (6) y América Latina (5). Dejando de lado otras posibles consecuencias, esta situación supone, especialmente en países con parlamentos o presidentes elegidos democráticamente, un cambio drástico en el equilibrio político entre las zonas urbanas con una gran densidad de población y las poblaciones rurales geográficamente repartidas por el territorio de unos estados donde casi la mitad de la población vive en la capital, aunque nadie acierta a explicar en qué condiciones.

Poco diré del cambio educativo, pues no es fácil distinguir los efectos sociales y culturales de la alfabetización general de los efectos sociales y culturales de esta revolución

súbita y sin precedentes en los medios de comunicación públicos y privados en la que estamos sumidos. Permítanme tan sólo apuntar un hecho significativo. Existen en la actualidad veinte países donde más del 55 por 100 de las franjas de edad afectadas siguen con sus estudios después de la educación secundaria. No obstante, menos en el caso de Corea del Sur, todos estos países pertenecen a Europa (tanto viejos países capitalistas como antiguos países socialistas), Norteamérica y Australasia. Capaz de generar capital humano, el viejo mundo desarrollado conserva todavía una ventaja sustancial sobre los principales países que se han incorporado a este escenario en el siglo XXI. ¿Cuánto tardarán la India y especialmente China en recortar esta distancia?

Quiero referirme aquí únicamente al gran cambio social que se produjo en el siglo pasado, la emancipación de la mujer, para hacer una observación que complementa lo que acabo de decir. No hay mejor indicador de la emancipación de la mujer que el hecho de que hayan igualado o incluso superado a los hombres en su nivel de estudios. ¿Debo apuntar que todavía hay regiones del planeta donde, sin embargo, aún están muy por detrás?

II

Permítanme que abandone esta panorámica de las transformaciones sin precedentes que se produjeron durante el último medio siglo para ocuparme de los factores que han influido en la guerra, la paz y el ejercicio del poder en los albores del siglo XXI. En este sentido, no hay que confundir las pautas

generales con reglas aplicables a realidades prácticas. Es obvio, por ejemplo, que a lo largo del siglo XX la población mundial, a excepción del continente americano, dejó de estar mayoritariamente gobernada, como si la situación respondiera a un mandato superior, por príncipes hereditarios o por agentes de potencias extranjeras. Nació una retahíla de estados técnicamente independientes, cuyos gobiernos, incluidos los regímenes denominados «totalitarios», reclamaban para sí legitimidad ante el «pueblo» o la «nación» al tiempo que sostenían que habían llegado al cargo por medio de plebiscitos, procesos electorales reales o fraudulentos, o por ceremonias públicas periódicas en las que participaba la muchedumbre y que simbolizaban el vínculo existente entre la autoridad y el «pueblo». De un modo u otro, el pueblo dejó de ser un conjunto de *súbditos* para convertirse en un conjunto de *ciudadanos* que, en el siglo XX, no sólo incluía a los hombres, sino también a las mujeres. Sin embargo, ¿cuánto nos acerca todo esto a la realidad, incluso hoy, cuando muchos gobiernos se han dotado, desde un punto de vista técnico, de constituciones inspiradas en el ideario liberal-demócrata y que han sufrido procesos electorales impugnados y suspendidos en ocasiones por una junta militar que se dice temporal y que, en cambio, ha permanecido en el poder años y años? No mucho, la verdad.

No obstante, en buena parte del planeta se advierte una tendencia general, un cambio en la postura del propio estado territorial independiente, que a lo largo del siglo XX se convirtió en la unidad política e institucional básica bajo la que se agrupaban las personas. En su hogar original, en la región noratlántica, se inspiraba en *diferentes* innovaciones originarias de la Revolución Francesa. Suyo era el monopolio de los

mecanismos del poder y de los coercitivos: armas, soldados y prisiones; por medio de una autoridad central y de sus agentes, ejercía un control cada vez más férreo de lo que sucedía dentro de sus fronteras, gracias a la creciente capacidad del sistema para recabar información. Aumentó el abanico de sus actividades, así como su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, y supo movilizar a la población apelando a su lealtad al estado y a la nación. Esta fase del desarrollo del estado alcanzó su punto álgido hace unos cuarenta años.

Pensemos en el «estado del bienestar» de la Europa occidental de los años setenta, en el que el «gasto público», es decir, el porcentaje del PNB destinado a programas públicos y no al consumo privado o a la inversión, apenas estaba entre el 20 y el 30 por 100 (*Economist World*). Pensemos, por otro lado, en la predisposición de los ciudadanos no sólo a permitir que las autoridades públicas crearan impuestos para incrementar esas cantidades extraordinarias sino a alistarse en el ejército para luchar y morir «por su país» por millones en las dos guerras mundiales del siglo pasado. Durante más de dos siglos, y hasta los años setenta, el crecimiento del estado moderno fue una constante, y fue ajeno a cuestiones de ideología o de organización política: liberal, socialdemócrata, comunista o fascista.

La situación, sin embargo, ha cambiado y la tendencia se ha invertido. Vivimos en un mundo económico que se globaliza a una velocidad vertiginosa y que depende de empresas privadas transnacionales que se empeñan en vivir al margen de las leyes estatales y de los impuestos del estado, lo que limita notablemente la capacidad de otros gobiernos aún mayores para controlar sus propias economías. Gracias a la teo-

logía dominante del libremercado, los estados han ido dejando un buen número de sus actividades directas más tradicionales —servicios de correos, policía, prisiones e incluso algunos sectores importantes de las fuerzas armadas— en manos de contratistas privados que sólo piensan en enriquecerse. Se estima que hoy trabajan en Iraq más de treinta mil «contratistas privados» armados.[2] Con el desarrollo y el desembarco masivo en todos los rincones del planeta de armamento pequeño y de gran precisión durante la guerra fría, los estados y sus actores han perdido el monopolio de las fuerzas armadas. Algunos estados más fuertes y más estables, como Gran Bretaña, España o la India, han aprendido a vivir durante grandes períodos sin el miedo a grupos de disidentes armados, indestructibles en la práctica y que, sin embargo, no suponían tampoco una amenaza para el sistema. Por diferentes motivos, hemos asistido a la rápida desintegración de un buen número de estados miembros de las Naciones Unidas, fruto las más de las veces, aunque no siempre, de la desintegración de los imperios del siglo XX; imperios cuyos gobiernos nominales eran incapaces de administrar o de ejercer un control real en buena parte del territorio, o sobre la población o sus instituciones. No olvidemos que persisten movimientos separatistas en viejos estados como Gran Bretaña o España.

Resulta sorprendente, asimismo, la legitimidad cada vez menor de los estados, y el hecho de que se vea con más reticencia la obligación de dejar en manos de los habitantes, ya sean ciudadanos o súbditos, el gobierno y sus leyes. El imperialismo de los siglos XIX y XX no habría sido posible de no haber existido la predisposición de grandes segmentos de la población a aceptar como legítimo cualquier poder estatal efectivamente establecido, incluso el de un puñado de extranjeros. Solamente aquellas zonas donde esta convicción era inexistente, como Afganistán o el Kurdistán, las potencias extranjeras no supieron cómo actuar. Sin embargo, tal y como se ve en el caso de Iraq, la obediencia natural del pueblo frente al poder, incluso frente a un poder que demuestra una superioridad militar abrumadora, es agua pasada, y con ella el retorno de los imperios. Pero no sólo la obediencia de los súbditos está quedando ya como algo de un pasado más y más remoto; también la de la ciudadanía. Dudo mucho que existan en la actualidad estados, a excepción de Estados Unidos, Rusia o China, que puedan embarcarse en una guerra a gran escala con ejércitos de reclutas dispuestos a luchar y a morir «por su país». Pocos estados occidentales pueden confiar hoy, como hicieran en el pasado la mayoría de los «países desarrollados», en que la población, con la salvedad de los criminales y otros sectores situados en los márgenes del orden social, respetará la ley y se comportará según las reglas del juego. El aumento extraordinario, entre otros, de los medios tecnológicos para mantener a los ciudadanos sometidos a una vigilancia constante —con cámaras en lugares públicos, escuchas telefónicas, acceso a datos personales y a ordenadores, etc.— no ha mejorado la eficacia del estado ni la de la ley en esos países; sí que ha provocado, por el contrario, una pérdida de libertad de los ciudadanos.

Todo esto ocurre en una época de una globalización vertiginosa, en una época en la que se han acentuado las dispa-

2. Patrick Radden Keefe, «Iraq, America's Private Armies», *New York Review of Books*, 12 de agosto de 2004, pp. 48-50.

ridades regionales en el planeta. Porque, por naturaleza, la globalización da lugar a un crecimiento asimétrico y dispar, y subraya asimismo la contradicción entre los ámbitos de la vida contemporánea sujetos a la globalización y a las presiones de la uniformización global, como la ciencia, la tecnología, la economía, diferentes infraestructuras técnicas y, en menor medida, las instituciones culturales, y los que no lo están, como el estado y la vida política. La globalización, por ejemplo, trae consigo lógicamente un aumento del flujo de mano de obra que emigra de las regiones más pobres a las más ricas. Este movimiento, sin embargo, provoca un cierto grado de tensión social y política en los diferentes estados afectados, en especial en los países ricos del viejo Atlántico Norte, aun siendo, en términos globales, un movimiento sin importancia: en la actualidad, solamente el 3 por 100 de la población mundial vive fuera de su país de nacimiento. A diferencia de lo que sucede con los movimientos de capitales y de productos y de las comunicaciones, los estados y la política han logrado dificultar no sin éxito estas emigraciones laborales.

Dejando de lado la terrible desindustrialización que la vieja Unión Soviética y las economías socialistas de la Europa del Este sufrieron en los años noventa, el desequilibrio más extraordinario de los que se han derivado de la globalización económica es el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial, que ha pasado de la región que limitaba con el Atlántico Norte a diferentes puntos de Asia. Si bien nos hallamos en las primeras fases del proceso, no cabe duda de que avanza a buen ritmo. Nadie puede ya dudar de que el crecimiento de la economía mundial durante los últimos diez años se debe, en gran medida, a los motores asiáticos, y

más concretamente al fabuloso aumento de la producción industrial en China: según los datos de 2003, mientras que este indicador era de menos del 0,5 por 100 en Estados Unidos y en Alemania y del 3 por 100 en el resto del mundo, la economía china experimentó un incremento del 30 por 100.[3] Es evidente que esta situación aún no ha modificado el peso relativo de Asia y del Atlántico Norte, por cuanto Estados Unidos, la Unión Europea y Japón representan todavía el 70 por 100 del PNB del planeta. Sin embargo, Asia ya deja notar su presencia. En términos de compra de energía, el sur, el sudeste y el este asiáticos constituyen un mercado casi dos tercios mayor que el de Estados Unidos. Qué efectos tendrá este cambio en el peso relativo de la economía norteamericana es la pregunta sobre la que giran las previsiones internacionales para el siglo XXI, y regresaré a ella más adelante.

III

Permítanme que me detenga ahora en la cuestión de la guerra, la paz y la posibilidad de un orden internacional en el siglo que empieza. De entrada, la paz mundial parece hoy más factible que en el siglo XX, un siglo marcado por una cifra récord de guerras mundiales y por las muchas formas de morir a gran escala. Aun así, un estudio reciente llevado a cabo en Gran Bretaña y que comparaba las respuestas que los británicos dieron en 2004 a unas preguntas ya formuladas en 1954

3. El crecimiento en Australia, Francia, Italia, el Reino Unido y el Benelux fue negativo. *CIA World Factbook*, actualizado a fecha de 19 de octubre de 2004.

apunta que el miedo a una guerra mundial es hoy mayor que en el pasado.[4] Este miedo responde, principalmente, a un hecho cada vez más evidente: vivimos en una época de conflictos armados mundiales endémicos, guerras que suelen transcurrir dentro de las fronteras de los estados aunque se ven magnificadas por la intervención extranjera.[5] Si bien el impacto de estos conflictos en la historia del siglo xx fue pequeño en términos militares, no podemos decir lo mismo si nos fijamos en la población, la principal víctima de estos enfrentamientos, que ha pagado, y paga todavía hoy, un elevado precio. Desde la caída del muro de Berlín, nos hallamos de nuevo sumidos en una era de genocidios y de traslados de población masivos y forzosos, tanto en algunas regiones de África como en el sudeste europeo o en Asia. Se estima que, a finales de 2003, la cifra de refugiados dentro y fuera de su propio país alcanzó los 38 millones de personas, unos números comparables a la extraordinaria cantidad de «personas desplazadas» después de la segunda guerra mundial. Un dato bastará para ilustrar estas afirmaciones: en 2000, el número de muertos en combate en Birmania se situaba entre las doscientas y las quinientas personas; la cifra de «desplazados internos», fundamentalmente por obra del ejército de Myanmar, rondaba el millón.[6] Y la guerra de Iraq no hace sino confirmar este aspecto. Lo que, según los estándares del siglo xx, podríamos calificar como guerras pequeñas provocan unas catástrofes sin parangón.

4. *Daily Mail*, Londres, 22 de noviembre de 2004, p. 19.
5. Véase Eric Hobsbawm, «War and Peace in the 20th Century», en Geir Lundestad y Olaf Njølstad, eds., *Proceedings of the Nobel Centennial Symposium: War and Peace in the 20th Century and Beyond*, Singapur, 2002, pp. 25-40.
6. Margarita Sollenberg, ed., *States in Armed Conflict 2000*, Uppsala 2001; *Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2003* (http://www.idpproject.org/global_overview.htm).

La guerra típica del siglo xx, la guerra entre estados, ha perdido peso rápidamente. En la actualidad no hay conflictos entre estados, aunque no podemos descartar que vaya a haberlos en distintas regiones de África y Asia, o en aquellas zonas donde la inestabilidad o la cohesión de los estados existentes se vean amenazadas. Por otro lado, aunque no estamos ante una amenaza inmediata, no ha desaparecido el riesgo de una gran guerra global, fruto probablemente de la reticencia de Estados Unidos a aceptar la aparición de China como su rival. En ocasiones, incluso, las posibilidades de evitar su estallido parecen muy superiores a las que había en 1929 para evitar la segunda guerra mundial, si bien conviene no olvidar que la posibilidad de esta guerra seguirá presente en las décadas venideras.

Sin embargo, y aun sin las guerras tradicionales entre estados, grandes o pequeñas, pocos son los observadores realistas que auguran que este será un siglo en el que el mundo vivirá ajeno a la presencia constante de armas y a los brotes de violencia. Con todo, es nuestro deber combatir la retórica del miedo irracional de la que se sirven gobiernos como el del presidente Bush o el del primer ministro Blair para justificar unas políticas que nos acercan al imperio global. Salvo como metáfora, no existe una «guerra contra el terror o el terrorismo», sino contra un agente político determinado que recurre a una táctica, no a un programa. El terror como táctica es indiscriminado y moralmente inaceptable, tanto si se amparan en él grupos clandestinos como si lo hacen los estados. La Cruz Roja Internacional reconoce el aumento de

la barbarie en su condena a los dos bandos en conflicto en Iraq. También ha crecido el miedo a que pequeños grupos terroristas opten por la guerra biológica, al tiempo que no parecen preocuparnos tanto los riesgos, mayores e impredecibles, que indudablemente se plantearán cuando la manipulación de los procesos vitales, incluida la vida humana, se nos vaya de las manos. Aun así, el peligro real que para la estabilidad mundial o para cualquier estado consolidado suponen las actividades de las redes terroristas panislámicas a las que Estados Unidos declaró la guerra global, así como las de la suma de todos los grupos terroristas que operan en cualquier punto del planeta, es residual. Aunque han logrado asesinar a muchas más personas que sus antecesores —y menos que los estados—, el riesgo es mínimo desde un punto de vista estadístico y su importancia, escasa en términos de agresión militar. A menos que estos grupos puedan hacerse con armas nucleares, una posibilidad que, no por no ser inmediata, podemos descartar, el terrorismo no provocará la histeria, sino la reflexión.

IV

Con todo, el caos mundial es una realidad, como también lo es la perspectiva de otro siglo de conflictos armados y de calamidades humanas. ¿Es posible volver a una suerte de control global, como sucedió, a excepción de un período de treinta años, durante los 175 años que transcurrieron desde la batalla de Waterloo hasta la caída de la URSS? La cuestión es hoy mucho más complicada, por dos motivos. En primer

lugar, las desigualdades a que ha dado lugar la globalización descontrolada del libremercado, y que han aumentado a un ritmo exponencial, son el caldo de cultivo natural de todo tipo de inestabilidades y agravios. Como se ha observado recientemente, «ni siquiera los estamentos militares más avanzados podrían enfrentarse a una crisis total del sistema jurídico»,[7] y la crisis de los estados a la que aludí anteriormente ha hecho de esta una posibilidad más factible que en el pasado. En segundo lugar, ya no existe un sistema de superpotencias internacionales plurales como el que estuvo vigente y que evitó que, salvo en el catastrófico período comprendido entre 1914 y 1945, estallara una guerra total. Este sistema descansaba en un postulado que se remontaba a los tratados que habían logrado acabar con la guerra de los Treinta Años en el siglo XVII: existían en el mundo unos estados cuyas relaciones se regían por diversas reglas, y entre ellas la de no interferir en los asuntos internos del otro, y por una distinción diáfana entre guerra y paz. Sin embargo, nada de todo esto es válido en la actualidad. Otro de los pilares del sistema era la realidad de un mundo donde convivían diferentes potencias, algo que ya existía en la reducida «primera división» de estados, apenas un puñado de «grandes potencias» que, a partir de 1945, se reduciría aún más, hasta quedar sólo dos superpotencias. Ninguna de las dos supo imponerse de un modo abrumador. Incluso fuera de buena parte del mundo occidental, la hegemonía regional siempre se demostró temporal. Ambas estaban condenadas a convivir. El

7. John Steinbrunner y Nancy Gallagher, «An alternative vision of global security», *Daedalus*, verano de 2004, p. 84.

final de la URSS y la sensacional superioridad militar de Estados Unidos han puesto fin a este sistema de potencias. Es historia. Y no sólo eso, sino que, desde 2002, Estados Unidos se ha dedicado a denunciar las obligaciones que el país había contraído en virtud de los diferentes tratados rubricados y de las convenciones que articulaban el sistema internacional, aprovechándose de una supremacía que todo apunta que será larga en el terreno de la tecnología militar, y que hoy lo convierte en el único estado capaz de llevar a cabo una operación militar de envergadura en cualquier parte del mundo y en un breve lapso de tiempo.

Los ideólogos de Estados Unidos y sus partidarios ven en esto el inicio de una nueva era de paz mundial y de crecimiento económico, auspiciado por un magnánimo imperio global norteamericano, al que equivocadamente comparan con la *Pax Britannica* del Imperio británico del siglo XIX. Y digo que se equivocan porque, históricamente, a su alrededor, es decir fuera de sus propios territorios, los imperios no han traído la paz y la estabilidad. Si algo ha caracterizado esas regiones ha sido la ausencia de un gran conflicto internacional que les impidiera emanciparse, como sucediera con el Imperio británico. En cuanto a los buenos propósitos de los conquistadores y a los efectos benéficos de su presencia, pertenecen a la esfera de la retórica imperial. En términos morales, los imperios siempre se han justificado a sí mismos, y en ocasiones no sin una cierta sinceridad, tanto cuando afirmaban que llevaban (su versión de) la civilización o la religión a unos pueblos sumidos en la ignorancia, como cuando decían llevar (su versión de) la libertad a los oprimidos (por otro imperio) o, en la actualidad, cuando se presen-

tan como los campeones de los derechos humanos. Nadie puede negar que los imperios también hayan dado frutos positivos. Sostener que el imperialismo llevó consigo la modernidad a un mundo atrasado, una afirmación hoy sin la menor validez, no era del todo espuria en el siglo XIX. Defender, sin embargo, que aceleró considerablemente el crecimiento económico de los territorios bajo su manto es algo mucho más discutible, cuando menos fuera de los territorios de ultramar bajo dominio europeo. Entre 1820 y 1950, el PIB per cápita medio de doce estados de la Europa occidental se multiplicó por 4,5, mientras que el aumento que se experimentó en la India o en Egipto fue testimonial.[8] En cuanto a la democracia, de todos es sabido que los grandes imperios no la exportaron; solamente las potencias en crisis hicieron concesiones, aunque mínimas.

Con todo, la verdadera cuestión es saber si un proyecto sin precedentes en la historia, el del dominio global por parte de un solo estado, es posible, y si la reconocida superioridad militar de Estados Unidos puede no sólo implantar este dominio, sino también consolidarlo. Y la respuesta a ambas preguntas es que no. Es cierto que los imperios se han construido a menudo con la ayuda de las armas, pero las armas no bastan para mantener el orden, como nos lo recuerda un viejo dicho que se remonta a los tiempos napoleónicos: «Puedes hacer lo que quieras con una bayoneta, salvo sentarte en ella». Y más todavía hoy, cuando incluso la superioridad mi-

8. Angus Maddison, *L'économie mondiale, 1820-1992. Analyse et Statistiques*, OCDE, París, 1995, pp. 20-21. Las cifras de Egipto se refieren únicamente al año 1900.

litar más abrumadora ya no provoca, por sí misma, el consentimiento tácito. De hecho, la mayoría de los imperios históricos han ejercido el poder indirectamente, a través de las élites indígenas que, a menudo, gobernaban las instituciones indígenas. Pero, cuando la capacidad de ganarse amigos y colaboradores entre los súbditos fallaba, necesitaban algo más que las armas. Ni siquiera un millón de colonos, un ejército de ocupación de 80.000 soldados y la derrota militar de la insurgencia por medio de la masacre y de la tortura sistemática permitieron a los franceses conservar Argelia.

¿Qué sentido tiene, sin embargo, hacerse esta pregunta? Y esto me lleva al rompecabezas con el que quiero acabar mi conferencia. ¿Por qué abandonó Estados Unidos unas políticas gracias a las que, a partir de 1945, conservó una posición hegemónica en gran parte del planeta, a saber, el mundo no comunista y los países que no se habían declarado neutrales? Su capacidad para ejercer dicha hegemonía no se fundamentaba en la destrucción de sus enemigos o en su sometimiento mediante la aplicación directa de la fuerza militar, sino en el miedo a un suicidio nuclear. La capacidad militar de Estados Unidos tenía peso en términos hegemónicos en tanto en cuanto algunos estados lo preferían a otras potencias militares, o lo que es lo mismo: durante la guerra fría, los países europeos que formaban parte de la OTAN deseaban contar con su apoyo militar para contrarrestar la amenaza de la URSS.

La hegemonía estadounidense durante la segunda mitad de siglo no descansó en las bombas sino, *económicamente*, en la sensacional riqueza de Estados Unidos y en el papel preponderante de ese gigante económico en el mundo, especialmente a partir de 1945. *Políticamente*, lo hacía en el consenso general en los países del rico Norte de que aquellas sociedades eran preferibles a las que existían bajo los regímenes comunistas. Allá donde no había acuerdo, como en América Latina, el consenso se materializaba en alianzas con las clases dirigentes y con unos ejércitos temerosos de una revolución social. *Culturalmente*, en los atractivos de la próspera sociedad de consumo norteamericana, para deleite de sus ciudadanos y que el país que la había inventado exportaba, y en la conquista mundial de Hollywood. *Ideológicamente*, Estados Unidos se beneficiaba sin lugar a dudas de ser el paradigma de la lucha de la «libertad» contra la «tiranía», salvo en aquellas regiones donde su alianza con los enemigos de la libertad era demasiado evidente.

Todo esto se mantenía fácilmente al final de la guerra fría. ¿Por qué no podían buscar otros países amparo en el liderazgo de la superpotencia que representaba lo que muchos otros estados, las principales potencias económicas entregadas a la ideología neoliberal que estaba ganando terreno en todo el planeta, habían adoptado, la democracia electoral? Su influencia era extraordinaria, como también lo era la de sus ideólogos y sus empresarios. Aunque la economía iba perdiendo su papel central en el mundo y ya no era el agente dominante en el terreno industrial y menos aún desde los años ochenta, los de las inversiones extranjeras directas,[9] seguía siendo la de un gigante, y generaba una riqueza fabulosa. Quienes habían estado al frente de la política imperial habían procurado maquillar la realidad de la supremacía de

9. En 1980 se situaban en torno del 40 por 100; en el año 2000, entre el 22 y el 25 por 100 (UNCTAD).

Estados Unidos sobre sus aliados, en lo que conformaba una auténtica «coalición de los comulgantes». Sabían que, incluso después de la desaparición de la URSS, Estados Unidos ya no estaba solo en el mundo. Pero también sabían que la partida en la que se decidía la suerte del planeta se jugaba con unas cartas que ellos mismos habían repartido y de acuerdo con unas reglas que les favorecían, y que era impensable la irrupción de un contrincante con una fuerza y con unos intereses globales comparables. La primera guerra del Golfo, que contó con el respaldo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional, y la reacción inmediata a los atentados del 11 de septiembre pusieron de manifiesto la fortaleza de la postura norteamericana tras la caída de la Unión Soviética.

Ha sido la política megalómana de Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre lo que ha socavado, en gran medida, los pilares políticos e ideológicos de su antigua influencia hegemónica, dejando al país sin más instrumentos que una fuerza militar realmente aterradora para consolidar la herencia del período posterior a la guerra fría. No hay lógica alguna en esta situación. Probablemente por vez primera en la historia, Estados Unidos, casi internacionalmente aislados, son un país impopular entre la mayoría de los gobiernos y de los pueblos. Su fuerza militar subraya la debilidad económica de una nación cuyo extraordinario déficit comercial se mantiene por la intervención de unos inversores asiáticos cada vez menos interesados, económicamente, en sostener un dólar renqueante. Pero también subraya el relativo peso económico del resto de actores: la Unión Europea, Japón, los países del este de Asia e incluso las organizaciones que agrupan a los productores de materias primas

del Tercer Mundo. En la OMC, Estados Unidos carece hoy de la capacidad de negociar con los clientes. Tal vez la propia retórica de la agresión, justificada por una sentencia tan improbable como la que habla de las «amenazas contra Estados Unidos», no haga sino indicar una sensación de inseguridad sobre el futuro global del país.

Sinceramente, no encuentro sentido alguno a lo que ha sucedido en Estados Unidos desde que el 11 de septiembre permitiera que un grupo de locos políticos diseñaran un plan a largo plazo para interpretar totalmente en solitario su propia versión de la supremacía mundial. Y creo que todo esto demuestra que la sociedad norteamericana vive una crisis que va acentuándose con el tiempo, y que se advierte en la división cultural y política más profunda que ha vivido el país desde la guerra de Secesión, así como en una división geográfica evidente entre la economía globalizada de las dos orillas y las vastas extensiones de un interior resentido, entre las grandes ciudades, culturalmente abiertas, y el resto. Hoy, un régimen derechista radical se ha propuesto movilizar a los «auténticos norteamericanos» para luchar contra una oscura fuerza extranjera y contra un mundo que no reconoce el carácter único, la superioridad y el destino evidente de Estados Unidos. La política global de Estados Unidos se orienta hacia el interior del país, no hacia el exterior, por grande y ruinoso que sea su impacto en el resto del mundo. No *pretende* crear un imperio o consolidar una posición realmente hegemónica, como tampoco buscaba la doctrina Rumsfeld, basada en acciones relámpago contra grupos débiles y desorganizados y la posterior retirada de las tropas, alcanzar la conquista global. Sin embargo, no por eso deja de ser peligrosa. Todo lo contrario. Como ya

hemos comprobado, provoca enfrentamientos impredecibles e inestabilidad, y sus consecuencias que escapan de cualquier previsión, son casi siempre desastrosas. En la actualidad, el mayor peligro de la guerra nace de las ambiciones globales de un gobierno en Washington que es incontrolable y aparentemente irracional.

¿Cómo hemos de adaptarnos para vivir en un mundo peligroso, inestable y explosivo, un mundo que descansa sobre unas placas tectónicas sociales y políticas, nacionales e internacionales cambiantes? Si ahora me hallase en Londres, advertiría a los pensadores liberales de Occidente, por indignados que estuvieran por las vulneraciones contra los derechos humanos en otras partes del planeta, de que no se dejaran engañar y que no creyeran que la intervención militar norteamericana en el extranjero compartía sus motivos o podía dar los resultados deseados. En Nueva Delhi no será necesario decir algo así. En cuanto a los gobiernos, lo mejor que pueden hacer el resto de estados es demostrar el aislamiento, y por extensión los límites, del poder mundial real de Estados Unidos, negándose, firme pero decididamente, a formar parte de cualquier iniciativa que venga de Washington y que pueda llevar a una acción militar, sobre todo en Oriente Medio y en el este del continente asiático. La principal tarea de la política internacional, y también la más urgente, es brindar a Estados Unidos la oportunidad de abandonar su postura megalómana para regresar a una política exterior racional. Porque, nos guste o no, Estados Unidos seguirá siendo una superpotencia, una potencia imperial, incluso en una etapa de declive económico relativo evidente. Confiemos, sin embargo, en que sea una potencia menos peligrosa.

3
POR QUÉ LA HEGEMONÍA AMERICANA DIFIERE DEL IMPERIO BRITÁNICO*

I

La historia, según se nos dice, es un discurso, y no se puede entender a menos que conozcamos la lengua en la que la gente piensa, habla y toma decisiones. Entre los historiadores tentados por lo que se denomina «el giro lingüístico» los hay incluso que argumentan que son las ideas y conceptos expresados en los términos característicos de un período los que explican lo que sucedió y por qué. La época en que vivimos y el tema de mi conferencia Massey deberían bastar para suscitar cierto escepticismo acerca de tales proposiciones. Una y otro están saturados de lo que el filósofo Thomas Hobbes llamaba «discurso insignificante», palabras que no significan nada, y de sus subvariedades «eufemismo» y «neolengua» (George Orwell), esto es, palabras destinadas deliberadamente a engañar mediante una descripción equívoca. Pero a menos que cambien los propios hechos, los cambios en las palabras utilizadas para describirlos no bastarán para modificarlos.

Los actuales debates sobre el imperio son buenos ejemplos al respecto, aun si dejamos a un lado el aspecto de ba-

* «Why America's Hegemony Differs from Britain's Empire», *Massey Lecture*, Harvard, 19 de octubre de 2005; traducción castellana de Juanmari Madariaga.

rrena publicitaria o la pura mojigatería en los textos. Se refieren a las consecuencias de la actual pretensión del gobierno estadounidense de alcanzar una supremacía global. Los partidarios de esa idea tienden a argumentar que los imperios son buenos, y los que no, a esgrimir una larga tradición de argumentos antiimperialistas. Pero esos alegatos y censuras no se ocupan de la historia real de los imperios. Tratan de acomodar viejos nombres a acontecimientos históricos que no concuerdan necesariamente con las viejas realidades, perdiendo la perspectiva histórica. Los actuales debates son particularmente nebulosos, porque lo más próximo a la supremacía mundial a la que aspira el actual gobierno estadounidense es un conjunto de palabras —«imperio», «imperialismo»— en franca contradicción con la autodefinición política tradicional de Estados Unidos, y que además se hicieron muy impopulares durante el siglo xx. También están en abierto conflicto con creencias positivas ampliamente difundidas en el sistema estadounidense de valores políticos, como «autodeterminación» y «derechos», que se aplican igualmente a escala internacional. No olvidemos que tanto la Sociedad de Naciones como la Organización de Naciones Unidas fueron proyectos esencialmente impulsados por presidentes estadounidenses. También resulta desconcertante que no exista ningún precedente histórico de la supremacía global que el gobierno estadounidense trata de establecer, y que entre los buenos historiadores y casi todos los observadores sensatos de la escena mundial predomine el pronóstico de que ese proyecto está condenado a fracasar. El más inteligente de la escuela neoimperial, el excelente historiador Niall Ferguson, no duda de ese probable fracaso aunque, a diferencia de gente como yo, lo lamenta.[1]

Bajo los actuales intentos de resucitar el imperio mundial como modelo para el siglo xxi subyacen cuatro acontecimientos. El primero es la extraordinaria aceleración de la globalización desde la década de 1960 y las consiguientes tensiones surgidas entre los aspectos económicos, tecnológicos, culturales, etc., de ese proceso y la única rama de la actividad humana que se ha mostrado hasta ahora imperturbable, en concreto la política. La globalización en la forma actualmente dominante del capitalismo de libre mercado ha traído también un aumento espectacular y potencialmente explosivo de las desigualdades sociales y económicas dentro de cada país e internacionalmente.

El segundo es el colapso del equilibrio de poder internacional a partir de la segunda guerra mundial, que mantuvo a raya tanto el peligro de una guerra global como la caída de gran parte del planeta en el desorden y la anarquía. La desaparición de la URSS destruyó ese equilibrio que ya venía agrietándose desde finales de la década de 1970. Las reglas básicas de ese sistema, establecidas en el siglo xvii, fueron formalmente impugnadas por el presidente Bush en 2002, y muy en particular la de que cada estado soberano, en su actuación oficial, debía respetar las fronteras de los demás y mantenerse al margen de sus asuntos internos. Desde la desaparición del equilibrio estable entre las superpotencias, ¿cómo se podría estabilizar políticamente el mundo? En términos más generales, ¿cuál sería la estructura de un sistema

1. Niall Ferguson, *Colossus: The Rise and Fall of the American Empire*, 2005.

internacional compuesto por una pluralidad de potencias, ahora que a finales de siglo ya sólo quedaba una?

El tercero es la pérdida de capacidad del llamado «estado-nación» soberano, que durante la segunda mitad del siglo XX se convirtió en la forma casi universal de gobierno en todo el mundo, para ejercer las funciones básicas de mantenimiento del control sobre lo que sucede en su territorio. No es este el lugar para analizar en detalle por qué es tan importante esta cuestión. El mundo ha entrado en una época de estados inadecuados, y en muchos casos fracasados o a punto de fracasar. Esta crisis también se agudizó desde los primeros años de la década de 1970, cuando incluso estados fuertes y estables como el Reino Unido, España y Francia tuvieron que aprender a soportar durante décadas la presencia en su territorio de grupos armados como el IRA, ETA o los separatistas corsos, que no se veían capaces de eliminar. En 2006 el banco de datos de Upsala sobre tales asuntos registraba incidentes de violencia armada durante el período 2001-2004 en treinta y uno de los estados soberanos del mundo.[2]

El cuarto es la proliferación de catástrofes humanas de masas, incluidas la deportación y el genocidio de pueblos enteros, y con ellas del temor generalizado. Incluso tenemos la reaparición de algo parecido a la peste negra medieval en la pandemia de sida, el desasosiego global ante la expansión potencial de una «gripe aviar» que hasta el momento no ha matado más que a unas pocas docenas de personas, y asomos de histeria escatológica en el tono de muchas discusiones públicas sobre los efectos del calentamiento global.

2. *Uppsala Conflict Data Project (Armed Conflicts 1945-2004).*

La guerra y la guerra civil han regresado, incluso en Europa —desde la caída del muro de Berlín ha habido más guerras que durante todo el período de la Guerra Fría—, pero aunque la cuantía de los combatientes y sus bajas sea pequeña comparada con las guerras masivas del siglo XX, su efecto sobre la población no combatiente es desmesuradamente grande. A finales de 2004 se estimaba que había casi cuarenta millones de refugiados fuera de sus propios países y cada vez más dentro de ellos,[3] cifra comparable a la del número de «personas desplazadas» tras la segunda guerra mundial. Esas imágenes de desolación, concentradas en unas pocas zonas del globo y reproducidas en la pantalla de nuestros televisores en la sala de estar casi en el mismo momento en que se producen, tienen un efecto público mucho mayor e inmediato que antes en los países ricos; basta recordar la reacción frente a las guerras de los Balcanes durante la década de 1990. Evidentemente, la gente de los países ricos del globo juzga que hay que hacer algo para resolver la situación espantosa en la que parecen estar hundiéndose muchos de los países más pobres.

En resumen, el mundo parecía reclamar cada vez más soluciones supranacionales a problemas supranacionales o transnacionales, pero no había autoridades globales disponibles con capacidad de tomar decisiones políticas, y menos aún con poder suficiente para llevarlas a la práctica. La globalización se queda corta en el terreno de la política, ya sea nacional o internacional. Las Naciones Unidas no cuentan

3. ACNUR, *The State of the World's Refugees: Human Displacement in the New Millennium*, 2006, cap. 7, fig. 7.1.

con una autoridad o poder autónomo y dependen de la decisión colectiva de los *estados*, por no mencionar que pueden verse bloqueadas por el veto de cualquiera de los cinco *grandes*. Hasta las organizaciones financieras internacionales del mundo posterior a 1945 —el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial— necesitaban, para poder tomar decisiones eficaces, el patrocinio de las grandes potencias (el denominado «consenso de Washington»). La única excepción a esa dependencia, el GATT (desde 1995 Organización Mundial del Comercio u OMC), ha encontrado hasta ahora en la oposición de estados un obstáculo casi infranqueable al acuerdo global. Los únicos actores reales y eficaces son los estados, y en cuanto a capacidad militar para desarrollar acciones importantes a escala global, en este momento sólo existe uno capaz de llevarlas a cabo, Estados Unidos.

II

Se ha dicho que «el mejor argumento en favor del imperio es siempre el del orden».[4] En un mundo cada vez más desordenado e inestable es natural soñar con algún poder capaz de hacer reinar el orden y la estabilidad. El Imperio es el nombre de ese sueño. Se trata de un mito histórico; el imperio estadounidense, con su esperanza de una *Pax Americana*, se remonta a la presunta *Pax Britannica*, un período de globalización y paz mundial durante el largo siglo XIX asociado a la hegemonía del Imperio británico, y ésta a su vez se retrotraía

4. Ferguson, *op. cit.*

a la *Pax Romana* del antiguo Imperio romano; pero no es más que pompa hueca y pretenciosa, ya que si el término *paz* tiene algún significado en este contexto, se refiere como mucho a la paz *dentro* del imperio, pero no con sus vecinos.

Pero incluso a ese respecto se exagera mucho. Los imperios históricos rara vez dejaron de llevar a cabo operaciones militares en su propio territorio y evidentemente éstas eran muy frecuentes en sus fronteras, sólo que esas operaciones rara vez afectaban a la vida civil metropolitana. En la época del imperialismo de los siglos XIX y XX no se solían tener en cuenta las guerras contra los no-blancos, las «razas inferiores y sin ley» de las que hablaba Kipling, como auténticas guerras en las que hubiera que aplicar las mismas reglas. Hew Strachan pregunta con razón: «¿Dónde estaban los prisioneros tomados en los conflictos coloniales británicos, aparte de la guerra de los bóer [que se entendía como una guerra entre blancos]? ¿Qué procesos judiciales se aplicaban regularmente?».[5] Los «combatientes ilegales» en Afganistán e Irán del presidente Bush, excluidos de la aplicación del derecho y de la Convención de Ginebra, tienen rancios precedentes imperialistas.

En cuanto a la paz mundial o incluso regional, hasta ahora ha estado fuera del alcance de todos los imperios conocidos en la historia, y por supuesto de todas las grandes potencias de los tiempos modernos. Si América Latina ha sido la única parte del mundo en gran medida inmune a las principales guerras internacionales durante casi doscientos años no se debe a la doctrina Monroe, que fue «durante décadas... poco

5. *The Times Literary Supplement*, 29 de julio de 2005.

más que un bluff yanqui»[6] ni al poderío militar estadounidense, que nunca estuvo en condiciones de subyugar directamente a ningún estado sudamericano. Hasta el momento de enunciarla sólo se aplicaba de forma habitual a los estados diminutos de Centroamérica y las islas del Caribe, y no siempre directamente. El presidente Wilson practicó en México (o en lo que quedaba de él tras la guerra de 1848) la intervención militar y el intento de imponer un «cambio de régimen»,[7] pero el resultado de lo que se ha descrito como su «programa de imperialismo moral» con el que «Estados Unidos se esforzaba de forma continua, y a veces tortuosamente, por obligar a la nación mexicana a satisfacer sus atolondradas especificaciones» fue el caos de 1913-1915.[8] A partir de entonces Washington decidió, prudentemente, no practicar los juegos del Pentágono en el único país grande de su patio trasero caribeño. No fue pues su poder militar el que impuso la dominación estadounidense en las Américas.

Gran Bretaña, como sugiere la frase «espléndido aislamiento», fue siempre consciente de que no podía controlar el sistema de poder internacional del que formaba parte, y no contaba con una presencia militar significativa en el continente europeo. El Imperio británico se benefició enormemente del siglo de paz entre las grandes potencias, pero no fue obra suya. Yo resumiría las relaciones entre imperios, guerra y paz como sigue: los imperios se construyeron principalmente, como el Imperio británico, mediante la agresión y la guerra; y a su vez fue la guerra, en general la guerra entre imperios rivales —como señala con acierto Niall Ferguson— la que acabó con ellos. La victoria en grandes guerras resultaba tan fatal para los imperios como perderlas; una lección de la historia del Imperio británico que Washington debería tener en cuenta. Y aunque la paz internacional no fuera obra suya, es lo que les dio una posibilidad de sobrevivir. El soberbio libro *Forgotten Armies* (Christopher Bayly y Tim Harper, 2004) presenta un vívido retrato de cómo el poder europeo en el sudeste de Asia, aparentemente tan espléndido y seguro, se vino abajo en cuestión de semanas en 1941-1942.

6. Ferguson, *op. cit.*, p. 42.
7. Friedrich Katz, *The Secret War in Mexico: Europe, the United States and the Mexican Revolution*, 1981.
8. Howard F. Cline, *Mexico, Revolution to Evolution*, 1962, p. 141.

III

En cualquier caso, dejando a un lado la España del siglo XVI y quizá los Países Bajos durante el XVII, Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del XX y Estados Unidos desde entonces son los únicos ejemplos de imperios genuinamente globales con horizontes políticos globales y no meramente regionales, y con recursos de poder —la supremacía naval en el caso británico durante el siglo XIX, y la supremacía en la destrucción desde el aire en el caso estadounidense en el XXI— respaldados por una red mundial de bases al efecto. Hoy esto ya no es bastante, puesto que los imperios no sólo dependen de las victorias o la seguridad militar sino de un control duradero. Por otra parte, Gran Bretaña durante el siglo XIX y Estados Unidos en la segunda mitad del XX también disfrutaron de un activo que ningún imperio ante-

rior había tenido ni podía haber tenido antes de la globalización económica moderna. Dominaban la economía industrial mundial, y lo hacían no sólo gracias al tamaño de su aparato productivo como «talleres del mundo»: en su momento cumbre en la década de 1920, y de nuevo tras la segunda guerra mundial, Estados Unidos representaba alrededor del 40 por 100 de la producción industrial global[9] y en la actualidad representa alrededor de una cuarta parte (27 por 100). Ambas metrópolis imperialistas sirvieron también como modelo económico, pioneras técnicas y organizativas y marcadoras de tendencias, así como centros del sistema mundial de flujos financieros y de mercancías y de los estados cuya política financiera y comercial determinaba en gran medida la configuración de esos flujos.

También han ejercido, evidentemente, una influencia cultural desproporcionada, y no sólo mediante la globalización de la lengua inglesa. Pero la hegemonía cultural no evidencia potencia imperial ni depende mucho de ella. Si fuera así, Italia, desunida, impotente y pobre, no habría dominado la vida musical y el arte europeos desde el siglo XV hasta el XVIII. Además, allí donde el poder cultural sobrevive al declive del poder y prestigio de los estados que en otro tiempo lo sostuvieron, como el Imperio romano o la monarquía absoluta francesa, no es más que una reliquia del pasado, como la nomenclatura militar o el sistema métrico debidos a Francia.

Sin duda debemos distinguir los efectos culturales del dominio imperial directo de los de la hegemonía económica, y ambos de otros acontecimientos postimperiales distintos.

9. *Industrialisation and Foreign Trade*, Sociedad de Naciones, 1943, p. 13.

La difusión del críquet y del béisbol fue un fenómeno imperial, ya que sólo se juegan allí donde hubo estacionados en algún momento soldados británicos o marines estadounidenses. Pero eso no explica el triunfo de deportes realmente globales como el fútbol, el tenis, o el golf entre los ejecutivos. Todos ellos fueron innovaciones británicas durante el siglo XIX, como prácticamente todos los deportes practicados a escala internacional, incluidos el alpinismo y el esquí. Algunos (como las carreras de caballos) pueden deber su organización y difusión global al prestigio internacional de la clase dominante británica durante el siglo XIX, que también impuso su vestimenta masculina a la clase alta de todo el orbe,[10] como el prestigio de París impuso la moda femenina entre las mujeres de clase alta. Otros (en particular el fútbol) tuvieron sus raíces originales en la diáspora mundial durante el siglo XIX de británicos contratados por empresas de la metrópoli para trabajar en el extranjero, y otros (como el golf) quizá en el número desproporcionado de escoceses en el desarrollo imperial y económico. Sin embargo, han superado con mucho sus orígenes históricos. Sería absurdo entender la próxima Copa Mundial de fútbol como un ejemplo del «poder blando» de Gran Bretaña en el mundo.

Me referiré ahora a las diferencias cruciales entre un estado y otro. El tamaño potencial de las metrópolis es la primera diferencia obvia: las islas como Gran Bretaña tienen fronteras fijas; Gran Bretaña no tenía una frontera en el sentido estadounidense. Había formado parte de un imperio continental europeo ocasionalmente —en los tiempos de

10. Anne Hollander, *Sex and Suits: The Evolution of Modern Dress*, 1994.

Roma, tras la conquista normanda y durante un breve período cuando María Tudor se casó con el español Felipe de Habsburgo—, pero nunca fue la base de esos imperios. Cuando los países que forman Gran Bretaña generaron una población excedente, ésta emigró a otros lugares o fundó colonias en ultramar. Las islas británicas se convirtieron en una fuente importante de emigrantes. Estados Unidos, en cambio, fue y sigue siendo esencialmente receptor de población y no emisor. Llenó sus espacios vacíos con el crecimiento de su propia población y con inmigrantes llegados del extranjero, hasta la década de 1880 principalmente de Europa noroccidental y centrooccidental. Junto a Rusia (aparte de las zonas de asentamiento judío) es el único imperio importante que nunca dio lugar a una diáspora emigrante significativa. Pero a diferencia de Rusia desde su fragmentación en 1991, Estados Unidos todavía no ha sufrido ninguna. Sus expatriados constituyen un porcentaje de la población de cualquier país de la OCDE menor que el de los expatriados de cualquier otro país de la OCDE excepto Japón.[11]

El imperio estadounidense, me parece a mí, es el resultado lógico de esta expansión en todo un continente. Los jóvenes Estados Unidos, recién constituidos, imaginaban que su república se extendía a toda Norteamérica. A los colonos que llegaban con las formas europeas de cultivo, basadas en la gran densidad de población, sus grandes extensiones les parecían ilimitadas e infrautilizadas. De hecho, dado

11. Jean-Christophe Dumont y Georges Lemaître, «Counting Immigrants and Expatriates in OECD Countries: A New Perspective», cap. 2, cuadro 3, 2003/2006.

el rápido genocidio —en parte no pretendido— de la población indígena debido al efecto de las enfermedades europeas, gran parte del continente estaba efectivamente casi desierto. Aun así, cabe sorprenderse de que la famosa «tesis de la Frontera»[12] de Frederick Jackson Turner sobre la formación de Estados Unidos no hallara un lugar donde mencionar siquiera a los nativos del país, que después de todo habían estado muy presentes en la época de Fenimore Cooper. Norteamérica no era en absoluto una «tierra virgen»,[13] sino que la sustitución del uso indígena extensivo del territorio por las formas europeas de economía implicaba deshacerse de los nativos, aun dejando a un lado la convicción de los colonos de que Dios les había concedido el país exclusivamente a ellos. Después de todo, la Constitución de Estados Unidos excluía específicamente a los nativos del cuerpo político del «pueblo que disfruta del derecho de nacimiento» y de las «bendiciones de la libertad».[14] Evidentemente, la eliminación efectiva sólo fue posible allí donde la población original era relativamente pequeña, como en Norteamérica o Australia. Donde no lo era, como en Argelia, Sudáfrica, México y más tarde en Palestina, poblaciones de colonos aún mayores han tenido que convivir con, o más bien por encima de, grandes poblaciones nativas.

De nuevo, a diferencia de Gran Bretaña y otros estados europeos, Estados Unidos nunca se vio a sí mismo como parte de un sistema internacional de potencias políticas ri-

12. F. J. Turner, «Western State-making in the Revolutionary Era», 1895.
13. Henry Nash Smith, *Virgin Land: The American West As Symbol and Myth*, 1957.
14. Eric Foner, *The Story of American Freedom*, 1998, p. 38.

vales. Ese fue precisamente el sistema que la doctrina Monroe pretendía excluir del continente americano. En ese continente de territorios descolonizados Estados Unidos no tenía rival ni tampoco tenía un proyecto colonial, ya que todas las regiones del continente norteamericano debían integrarse en Estados Unidos más pronto o más tarde, en particular Canadá a la que intentó separar del Imperio británico sin conseguirlo. Por eso tuvo problemas en apoderarse de territorios adyacentes que no se adecuaban al modelo, sobre todo porque no habían sido colonizados o no eran colonizables por anglos blancos, como Puerto Rico, Cuba y diversas islas del Pacífico. Entre ellas sólo Hawai se iba a convertir en un estado. Un Sur esclavista independiente, acostumbrado a las diferencias entre una población libre y otra no libre y a la integración en el sistema comercial global británico, bien se podría haber convertido en algo más parecido a un imperio europeo, pero fue el Norte el que prevaleció: libre, proteccionista y con un desarrollo basado en el ilimitado mercado interno de masas. La forma característica del imperio estadounidense fuera de su núcleo continental no se iba a parecer pues ni a la de la Commonwealth británica ni a la del imperio colonial británico. No podía incluir dominios, esto es, áreas progresivamente autónomas de colonización blanca, con o sin nativos locales (Canadá, Australia, Nueva Zelanda, e incluso Sudáfrica) porque no disponía de colonos en el extranjero. En cualquier caso, con la victoria del Norte en la guerra civil quedó descartada la secesión de cualquier parte de la Unión, que ya no era legal ni políticamente posible ni podía formar parte de la agenda política. La forma característica del poder estadounidense fuera de su propio

territorio no era colonial ni un dominio indirecto en un marco colonial de control directo, sino un sistema de estados satélites o subordinados. Esto era tanto más esencial cuanto que el poder imperial estadounidense hasta la segunda guerra mundial no era global sino sólo regional, confinado de hecho al Caribe y el Pacífico. Por eso nunca pudo establecer una red, de la que fuera totalmente propietario, de bases militares en el exterior comparables a las británicas, la mayoría de las cuales siguen ahí aunque hayan perdido su antigua importancia. Hasta este momento varias de las bases cruciales del poder estadounidense en el extranjero están situadas técnicamente en el territorio de algún otro estado que podría —como Uzbekistán— dar por finiquitada la presencia estadounidense.

En segundo lugar, Estados Unidos proviene de una revolución; quizá, como argumentó Hannah Arendt, de la más duradera de la historia de las revoluciones de la era moderna, las impulsadas por las esperanzas laicas de la Ilustración del siglo XVIII.[15] Para poder asumir una misión imperial, ésta tenía que basarse en el mensaje mesiánico y la convicción básica de que su sociedad libre era superior a todas las demás y estaba destinada a convertirse en modelo para todas ellas. Su política, como previó Alexis de Tocqueville, sería inevitablemente populista y antielitista. En Gran Bretaña tanto Inglaterra como Escocia tuvieron sus revoluciones en los siglos XVI y XVII, pero fueron efímeras y sus efectos se reabsorbieron en un régimen capitalista modernizado pero socialmente jerárquico, gobernado hasta bien entrado el

15. Hannah Arendt, *On Revolution*, 1963, p. 19.

siglo XX por las redes aristocráticas de una clase gobernante terrateniente. El imperio colonial podía insertarse fácilmente en ese marco, como sucedió en Irlanda. Gran Bretaña tenía ciertamente una convicción muy profunda de su superioridad frente a otras sociedades, pero no una creencia mesiánica ni un deseo particular de convertir a otros pueblos a las formas británicas de gobierno, ni tan siquiera a la cosa más cercana a una tradición nacional ideológica, en concreto el protestantismo anticatólico. El Imperio británico no fue construido por ni para misioneros; de hecho, en su principal posesión, la India, el imperio desalentó activamente sus actividades.

En tercer lugar, desde el Domesday Book o Libro del Día del Juicio Final, el reino de Inglaterra (1086) —y a partir del Acta de Unión de 1707 el reino de Gran Bretaña— se estructuró en torno a un fuerte centro de ley y gobierno que vertebraba el estado nacional más antiguo de Europa. Libertad, derecho y jerarquía social iban de consuno con una autoridad estatal soberana única, «el rey en el parlamento». Obsérvese que en 1707 Inglaterra y Escocia se unieron bajo un único gobierno central, y no como una federación, aunque Escocia permanecía distanciada de Inglaterra en muchos otros aspectos: leyes, religión del estado, estructura administrativa, educación e incluso prosodia de la lengua. En Estados Unidos la libertad se contrapone al gobierno central, e incluso a cualquier autoridad del estado, deliberadamente limitada por la separación de poderes. Compárese la historia de la Frontera estadounidense con la muy británica historia de su equivalente canadiense. Los héroes del Salvaje Oeste estadounidense eran pistoleros que hacían

su propia ley al estilo de John Wayne en un territorio sin ley, mientras que los del oeste canadiense son los miembros de la Policía Montada, una fuerza policial armada [fundada en 1873] que mantenía la ley del estado. Después de todo, ¿no proclamaba la Ley Británica de Norteamérica en 1827 por la que se creó el dominio de Canadá que su objetivo era «paz, orden y buen gobierno» y no «vida, libertad y búsqueda de la felicidad» como la Declaración de Independencia de Estados Unidos?

Permítaseme mencionar brevemente una diferencia adicional entre los dos países, considerados como naciones: la *edad*. Junto a una bandera y un himno, los estados-nación necesitan para esa construcción moderna, la nación, un mito fundacional preferiblemente procedente de la historia ancestral; pero Estados Unidos no podía recurrir a una historia ancestral como mito fundacional, como podían hacerlo Inglaterra y hasta la Francia revolucionaria; incluso Stalin recurrió a Aleksandr Nevski para movilizar el patriotismo ruso contra los alemanes. Estados Unidos no disponía en su territorio de antepasados útiles anteriores a los primeros colonos ingleses, ya que los puritanos se definían precisamente como distintos de los americanos nativos, y éstos, al igual que los esclavos, quedaban fuera de la definición de los Padres Fundadores del «pueblo». A diferencia de los criollos hispanoamericanos, no podían recurrir a la memoria de los imperios indígenas —aztecas, incas— en su lucha por la independencia. Tampoco podían recurrir a las heroicas tradiciones de los pueblos guerreros aborígenes aunque sus intelectuales los admiraran, porque la política de los colonos empujó a los candidatos más obvios a la integración en una ideología que

incluyera a todos los habitantes del país, la Confederación Iroquesa, a aliarse con los británicos. El único pueblo que vinculaba su identidad nacional con los indios americanos era europeo: los escasos y aislados galeses, cuyos románticos exploradores pensaron que habían localizado a los descendientes del príncipe Madoc, presunto descubridor de América antes que Colón, de lo que estaban seguros, entre los indios mandanes de Missouri, cuya lengua se empeñaban en reconocer como variante gaélica.[16] Y dado que Estados Unidos se fundó en una revolución contra Gran Bretaña, la única continuidad con la vieja metrópoli que no quedó en entredicho fue la cultural o más bien lingüística. Pero obsérvese que incluso a ese respecto Noah Webster trató de interrumpir esa continuidad insistiendo en el uso de una ortografía distinta.

Así pues, la identidad nacional de Estados Unidos no se podía construir a partir de un pasado inglés común, ni siquiera antes de la inmigración en masa de no anglosajones. Tenía que construirse primordialmente a partir de su ideología revolucionaria y sus nuevas instituciones republicanas. La mayoría de las naciones europeas tienen «ajenos hereditarios», vecinos antiquísimos con los que las relaciona el recuerdo de siglos de conflicto, en oposición a los cuales se define; Estados Unidos, cuya existencia nunca se ha visto amenazada por ninguna guerra aparte de la civil, sólo tiene enemigos ideológicos: cuantos rechazan la forma de vida americana, estén donde estén.

16. Gwyn A. Williams, *Madoc: The Making of a Myth*, 1987, p. xx.

IV

Lo mismo que de los estados se puede decir de los imperios. También en eso Gran Bretaña y Estados Unidos son muy diferentes. El imperio —formal o informal— fue un elemento esencial tanto para el desarrollo económico británico como para su poder internacional, pero no es este el caso de Estados Unidos, para el que prevaleció desde el principio la decisión de no ser un estado entre otros, sino un gigante continental con una población continental. La tierra, y no el mar, era la columna vertebral de su desarrollo. Estados Unidos fue expansionista desde el principio, pero no en la forma en que lo fueron imperios marítimos en ultramar como el castellano y el portugués en el siglo XVI, el holandés en el XVII y el británico, con metrópolis de dimensiones y poblaciones modestas. Se parecía más a Rusia, que se expandía hacia el exterior atravesando la estepa desde el núcleo central moscovita hasta que también pudo proclamar que llegaba «de un océano a otro», en concreto desde los mares Báltico y Negro hasta el Pacífico. Estados Unidos, aun sin un imperio, seguía siendo el estado con mayor población de las Américas y el tercer país más poblado del globo. Incluso Rusia, reducida como ha quedado ahora a lo que era antes de Pedro el Grande, sigue siendo un gigante relativo, y no sólo en cuanto a los recursos naturales disponibles en su vasto territorio. Gran Bretaña, en cambio, privada de su imperio era únicamente una economía de mediano tamaño entre muchas otras, y sabía que era así aun cuando gobernaba la cuarta parte de las tierras y la población del mundo.

Y lo que viene más a cuento, dado que la economía británica estaba esencialmente ligada a las transacciones económicas globales, el Imperio británico fue en muchos aspectos un elemento central del desarrollo de la economía-mundo del siglo XIX, y no porque se tratara de un imperio formal. En América Latina no había colonias británicas significativas fuera del área del Caribe, y Gran Bretaña se abstuvo deliberadamente de utilizar su fuerza naval o militar para intervenir allí, aunque lo podría haber hecho fácilmente. Y sin embargo, hasta la primera guerra mundial América Latina estuvo mucho más ligada a la economía-mundo centrada en Gran Bretaña que a Estados Unidos: en 1914 las inversiones británicas eran más de dos veces mayores que las de Estados Unidos,[17] y casi se situaban al mismo nivel en México, donde (junto con Cuba) se concentraban las inversiones estadounidenses.[18] De hecho, durante el siglo XIX la economía británica era complementaria de la del mundo subdesarrollado. Durante la década de 1950 más de tres cuartas partes de las enormes inversiones británicas en el exterior correspondían a países subdesarrollados,[19] e incluso durante el período de entreguerras más de la mitad de las exportaciones británicas iban a las regiones formal o informalmente británicas. Por eso la relación con Gran Bretaña alentó la prosperidad del Cono Sur latinoamericano mientras duró, mientras que la relación estadounidense con

17. Angus Maddison, *L'économie mondiale 1820-1992: Analyse et statistiques*, 1995, cuadro 3.3.
18. Calculado a partir de Feis, 1930, p. 23, y Lewis, 1938, apéndice D, p. 606. El tipo de cambio dólar: libra se ha estimado en 4,5:1.
19. Eric J. Hobsbawm (con Christopher Wrigley), *Industry and Empire*, 1999 (trad. cast., 2001), cuadro 32a.

México ha generado principalmente una fuente de mano de obra barata para el vecino del Norte. Una vez que la Europa continental y Estados Unidos se industrializaron, Gran Bretaña dejó pronto de ser el taller del mundo, excepto en lo que hace al sistema internacional de transportes, pero siguió siendo el mayor comerciante del mundo, el banquero del mundo y el mayor exportador de capital. Tampoco deberíamos olvidar que en el apogeo de su supremacía económica Gran Bretaña era el principal mercado mundial de productos primarios, esto es, de alimentos y materias primas. Por modesta que fuera en tamaño y población, hasta la década de 1880 compraba la mayor parte del algodón en crudo que se comercializaba en todo el mundo y el 35 por 100 de la lana, y consumía algo así como la mitad del trigo y la carne y la mayor parte del té comercializados internacionalmente.[20]

La economía estadounidense no tenía ni tiene esa relación orgánica con la economía mundial. Al ser de lejos la mayor economía industrial del mundo, influía y sigue influyendo sobre éste por su puro tamaño continental y por la originalidad yanqui en cuanto a tecnología y organización empresarial, que se convirtieron en modelo para el resto del mundo a partir de la década de 1870 y especialmente durante el siglo XX, cuando se convirtió en la primera sociedad de consumo de masas. Con una hiperprotección arancelaria hasta el período de entreguerras, recurrió abrumadoramente a los recursos propios y al mercado interno. A diferencia de Gran Bretaña, hasta finales del siglo XX fue un importador de bienes

20. F. X. von Neumann-Spallart, *Übersichten der Weltwirtschaft 1883-84*, pp. 189, 226-227, 352-353, 364-366.

de consumo relativamente modesto y un exportador desproporcionadamente pequeño de bienes y capital. En el cenit de su poder industrial, en 1929, las exportaciones estadounidenses equivalían al 5 por 100 de su PNB (en precios de 1990) frente al 12,8 por 100 de Alemania, el 13,3 por 100 del Reino Unido, el 17,2 por 100 de los Países Bajos o el 15,8 por 100 de Canadá.[21] De hecho, a pesar de su primacía industrial global desde la década de 1880 en adelante, con el 29 por 100 de la producción industrial mundial, su participación en las exportaciones globales no igualó a la de Gran Bretaña hasta poco antes del hundimiento de 1929.[22] Sigue siendo una de las economías menos dependientes del comercio del mundo, mucho menos que el área del euro.[23] Aunque a partir de la primera guerra mundial el gobierno estadounidense alentó a los exportadores de su propio país mediante reducciones de impuestos y exenciones en las leyes antimonopolios,[24] las empresas estadounidenses no pensaron seriamente en penetrar en las economías europeas hasta mediados de la década de 1920 y su avance se vio frenado por la Gran Depresión. Hablando en general, la conquista económica por el Nuevo Mundo del Viejo es algo que tuvo lugar durante la guerra fría, y tampoco está garantizado que vaya a durar mucho tiempo.

A diferencia de los avances mundiales de Gran Bretaña durante el siglo XIX, esa conquista sólo se debió en parte a lo que

21. Angus Maddison, *The World Economy: A Millennial Perspective*, 2001, apéndice F5.
22. W.W. Rostow, *The World Economy: History and Prospect*, 1978, pp. 72-73, 75.
23. *Pocket World in Figures 2004*, p. 32.
24. Victoria de Grazia, *Irresistible Empire: America's Advance through Twentieth-Century Europe*, 2005 (trad. cast., 2007), p. 213.

se podría llamar la división global del trabajo entre países industrializados y subdesarrollados (productores de bienes primarios). El gran salto adelante desde la segunda guerra mundial se basó en un intercambio cada vez más globalizado entre las economías similares y rivales de los países industriales avanzados, y por eso la distancia entre los mundos desarrollado y subdesarrollado se ha ampliado tan dramáticamente. Pero también por eso la zambullida en la globalización del mercado libre hace depender incluso a la economía nacional más fuerte de fuerzas que no puede controlar.

No es este el lugar más indicado para analizar la reciente modificación en la distribución geográfica del poder económico, de sus viejos centros a ambos lados del Atlántico a las regiones de los océanos Índico y Pacífico, ni su consiguiente vulnerabilidad. Ambos son fenómenos bastante evidentes. Las ventajas históricas que permitieron a la mayoría de los habitantes de Norteamérica y a los sectores más favorecidos de Europa, Japón y Australia, a principios del nuevo milenio, disfrutar de un PNB per cápita cinco veces mayor que la media global,[25] de un nivel de vida principesco en relación con el de 1900 y de unas condiciones sin precedentes en cuanto a la seguridad social, se están viendo erosionadas rápidamente. Quienes se venían beneficiando desproporcionadamente de una economía de mercado globalizada pueden dejar de ser tan privilegiados.

Los pioneros de la globalización se pueden convertir en sus víctimas. J. Walter Thompson, la mayor de las agencias de publicidad estadounidense, que llevó al mundo entero la

25. *World Report on Human Development 1999*, cuadro 11.

forma de comercialización del siglo xx, pasó a formar parte en 1987 de un servicio de ventas británico que ahora dirige cuarenta compañías en ochenta y tres países.

Ante la industrialización de Europa y Estados Unidos, la Gran Bretaña victoriana, todavía masivamente industrializada y que todavía era el exportador e inversor mayor del mundo, desplazó sus mercados e inversiones de capital al imperio formal e informal. Los Estados Unidos de principios del siglo xxi no tienen esa opción y en cualquier caso no estaría a su alcance, ya que han dejado de ser un importante exportador de bienes y capitales, y para satisfacer la enorme demanda de bienes que no pueden producir ya por sí mismos contraen deudas cada vez mayores con los nuevos centros de la industria mundial. Es el único imperio importante que también se ha convertido en un importante deudor. De hecho, con la excepción de los setenta años transcurridos entre la primera guerra mundial y 1988,[26] su economía siempre ha estado en números rojos. Los activos de capital, visibles e invisibles, acumulados desde 1945 son muy grandes y no es probable que se vean sometidos a una rápida erosión. Sin embargo, la supremacía estadounidense sí puede ser muy vulnerable a su declive relativo y al desplazamiento del poder industrial, el capital y la alta tecnología a Asia. En un mundo globalizado el «poder blando» del mercado y la americanización cultural ya no refuerza la superioridad económica estadounidense. Estados Unidos fue el primero en promover las cadenas de supermercados, pero en América Latina y en China se ha puesto a la cabeza la cadena francesa Carrefour. El imperio estadounidense, a diferencia del británico, ha tenido que recurrir permanentemente a sus fuerzas armadas.

26. Jeffry A. Frieden, *Global Capitalism*, 2006, pp. 132, 381 (trad. cast., 2007).

El proyecto global estadounidense estuvo entrelazado con la política desde un principio, o al menos desde el momento en que el presidente Wilson se dirigió a un congreso de vendedores en Detroit (1916) diciéndoles que la «democracia empresarial» estadounidense tenía que encabezar «la lucha por la conquista pacífica del mundo».[27] Sin duda su influencia planetaria se basaba en constituir un modelo empresarial y en su enorme tamaño, pero también en su afortunada elusión de las catástrofes de las dos guerras mundiales que dejaron exhaustas las economías de Europa y Asia Oriental mientras que su propia economía prosperaba. Los gobiernos estadounidenses eran conscientes del enorme respaldo que esto significó para la diplomacia del dólar. «Hemos llegado a financiar el mundo en un grado importante —decía Woodrow Wilson— y los que financian el mundo deben entenderlo y gobernarlo con su propio espíritu y su mente.»[28] Durante y después de la segunda guerra mundial, desde el acuerdo de Préstamo y Arriendo de 1940 hasta el préstamo británico de 1946, Washington no ocultaba que pretendía el debilitamiento del Imperio británico tanto como la victoria sobre el Eje.

Durante la guerra fría el crecimiento global de las empresas estadounidenses tuvo lugar bajo el patrocinio del proyecto político de su gobierno, con el que se identificaban la

27. V. de Grazia, *op. cit.*, p. 1.
28. J. A. Frieden, *op. cit.*, p. 133.

mayoría de los directivos empresariales al igual que la mayoría de su población. A cambio, y dado su poder mundial, la convicción del gobierno estadounidense de que sus propias leyes debían prevalecer en los tratos que llevaran a cabo los estadounidenses en cualquier lugar del mundo le otorgó una considerable fuerza política en su frase de 1950 (a menudo mal citada), «lo que es bueno para el país es bueno para General Motors y viceversa».[29] Evidentemente, la primera economía de consumo de masas se benefició enormemente del ascenso de las ricas sociedades europeas de consumo de masas durante las décadas doradas de 1950 y 1960. Después de todo, Estados Unidos había desarrollado la capacidad productiva, las grandes empresas, las instituciones, el conocimiento práctico e incluso el lenguaje de esas sociedades. Como decía un novelista francés ya en 1930, la publicidad vendía no sólo artículos sino también los adjetivos para calificarlos. Esto, más que el hecho afortunado de que, gracias al Imperio británico el inglés se había convertido en una lengua global universal, es la esencia de la hegemonía cultural estadounidense. Sin embargo, dejando a un lado su efecto-demostración, las principales contribuciones de Estados Unidos al desarrollo económico mundial durante el siglo xx tenían un anclaje político: el plan Marshall en Europa, la reforma agraria durante la ocupación en Japón, la movilización militar en Asia para la guerra de Corea y más tarde la de Vietnam. Sin la supremacía política de Estados Unidos durante la guerra fría en el «mundo libre», ¿habría bastado por sí solo el colosal tamaño de su economía para hacer prevalecer

29. *New Dictionary*, 2002.

como normas globales su forma de hacer negocios, sus agencias de valoración de créditos, sus firmas auditoras y prácticas contractuales, por no mencionar el «consenso de Washington» para la financiación internacional? Cabe dudarlo.

Por todo esto el viejo Imperio británico no es y no puede ser un modelo para el proyecto estadounidense de supremacía mundial, excepto en un aspecto. Gran Bretaña conocía sus límites, y especialmente los límites presentes y futuros de su capacidad militar. Siendo un país de tamaño medio que sabía que no podía mantener para siempre el liderazgo mundial, estaba a salvo de la megalomanía que constituye la enfermedad profesional de los eventuales conquistadores del mundo. Ocupó y gobernó una parte del mundo —y una población— mayor que lo que ningún otro estado había gobernado nunca ni es probable que llegue a hacerlo, pero sabía que no gobernaba el mundo entero ni podía hacerlo y no lo intentó. Su marina de guerra, que de hecho disfrutó de la supremacía en los océanos durante largo tiempo, no era una fuerza adecuada para ese propósito. Una vez que Gran Bretaña hubo establecido su predominio global mediante la agresión y la guerra victoriosa, se mantuvo fuera de la política de los estados europeos tanto como pudo y lo mismo hizo en las Américas. Trató de mantener el resto del mundo lo bastante estable como para que prosperaran sus propios negocios, pero no le impuso lo que tenía que hacer. Cuando concluyó la época de los imperios occidentales en ultramar a mediados del siglo xx, Gran Bretaña reconoció «los aires de cambio» antes que otros colonizadores. Y dado que su ventajosa situación económica no dependía del *poder* imperial sino del comercio, se acomodó más fácilmente a su pérdida política, como se había

adaptado después de todo al retroceso más dramático de toda su historia anterior, la pérdida de las colonias americanas.

¿Aprenderá Estados Unidos esa lección? ¿O se verá tentado a mantener su predominio global, cada vez más erosionado, recurriendo a la fuerza político-militar, y al hacerlo promoverá no el orden global sino el desorden, no la paz global sino el conflicto, no el avance de la civilización sino el de la barbarie? Esa, como dijo Hamlet, es la cuestión. Sólo el futuro nos lo dirá. Dado que los historiadores no somos, afortunadamente, profetas, no estoy profesionalmente obligado a darles una respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

ACNUR, *The State of the World's Refugees: Human Displacement in the New Millennium*, ACNUR, Oxford, 2006.

Arendt, Hannah, *On Revolution*, Nueva York y Londres, 1963.

Bayly, Christopher y Tim Harper, *Forgotten Armies: The Fall of British Asia 1941-1945*, Londres, 2004.

Cline, Howard F., *Mexico, Revolution to Evolution*, Oxford, Nueva York, Toronto, 1962.

De Grazia, Victoria, *Irresistible Empire: America's Advance through Twentieth-Century Europe*, Cambridge y Londres, 2005 [hay trad. cast.: *Imperio irresistible*, Belacqua, Barcelona, 2007].

Dumont, Jean-Christophe, y Georges Lemaître, «Counting Immigrants and Expatriates in OECD Countries: A New Perspective», *OECD Social Employment and Migration Working Papers*, OCDE, París, 2003-2006, n.º 25.

Economist, The, *Pocket World in Figures 2004*, Londres, 2003.

Ferguson, Niall, *Colossus: The Rise and Fall of the American Empire*, Londres, 2005.

Feis, Herbert, *Europe The World's Banker, 1870-1914*, New Haven y Londres, 1930.

Foner, Eric, *The Story of American Freedom*, Londres, Basingstoke y Oxford, 1998.

Frieden, Jeffry A., *Global Capitalism*, Nueva York y Londres, 2006 [hay trad. cast.: *Capitalismo global*, Crítica, Barcelona, 2007].

Hirsch, E. D. Jr., Joseph F. Kett y James Trefil, eds., *The New Dictionary of Cultural Literacy*, Boston y Nueva York, 2002.

Hobsbawm, Eric J., y Christopher Wrigley, *Industry and Empire*, nueva edición, Londres, 1999 [hay trad. cast.: *Industria e imperio*, Crítica, Barcelona, 2001].

Hollander, Anne, *Sex and Suits: The Evolution of Modern Dress*, Nueva York, 1994.

Katz, Friedrich, *The Secret War in Mexico: Europe, the United States and the Mexican Revolution*, Chicago y Londres, 1981.

Lewis, Cleona, *America's Stake in International Investments*, Washington DC, 1938.

Liga de Naciones, *Industrialisation and Foreign Trade*, Ginebra, 1943.

Maddison, Angus, *L'économie mondiale 1820-1992: Analyse et statistiques*, Centro de Desarrollo de la OCDE, París, 1995.

Maddison, Angus, *The World Economy: A Millennial Perspective*, Centro de Desarrollo de la OCDE, París, 2001.

Neumann-Spallart, Dr F.X. von, *Übersichten der Weltwirtschaft 1883-84*, Stuttgart, 1887.

Rostow, W. W., *The World Economy: History and Prospect*, Londres y Basingstoke, 1978.

Smith, Henry Nash, *Virgin Land: The American West As Symbol and Myth*, Nueva York, 1957.
Turner, F. J., «Western State-making in the Revolutionary Era», *American Historical Review*, I, 1, octubre de 1895, pp. 70 ss.
Uppsala Conflict Data Project (Armed Conflicts 1945-2004); disponible en www.prio.no/cwp/ArmedConflict. Consultado el 17 de junio de 2006.
Williams, Gwyn A., *Madoc: The Making of a Myth*, Oxford, 1987.
World Report on Human Development 1999, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bruselas, 1999, disponible (en inglés) en hdr.undp.org/reports/view_reports.cfm?type=1.

4
EL IMPERIO SE EXTIENDE MÁS Y MÁS*

La situación mundial actual es bastante insólita. Los grandes imperios globales conocidos hasta ahora, como el español en los siglos XVI y XVII y sobre todo el británico en los siglos XIX y XX, no se pueden comparar apenas con lo que vemos hoy en el imperio estadounidense. El actual estado de globalización carece de precedentes en cuanto a su integración, su tecnología y su política.

Vivimos en un mundo tan integrado, en el que las operaciones ordinarias están tan engranadas entre sí, que cualquier interrupción tiene consecuencias inmediatas; el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por ejemplo, originado en algún lugar desconocido de China, lleva camino de convertirse en unos días en un fenómeno global. Las perturbaciones en el sistema mundial de transportes, las conferencias e instituciones internacionales, los mercados globales e incluso economías enteras se transmiten con una velocidad impensable en cualquier período anterior.

La tecnología, constantemente cambiante, ejerce una enorme influencia en la economía y sobre todo en la fuerza militar; es ahora más decisiva en los asuntos militares que nunca. El poder político a escala global requiere el dominio de esa tecnología, además de un estado extraordinariamente

* «After winning the War the Empire expands wider and still wider», *Counterpunch*, 11 de junio de 2003; traducción castellana de Juanmari Madariaga.

grande y poderoso. Hasta muy recientemente, la cuestión del tamaño no era tan relevante: la Gran Bretaña que gobernaba el mayor imperio de su época era, incluso con el criterio de los siglos XVIII y XIX, un país de tamaño medio. Durante el siglo XVII los Países Bajos, un país de una envergadura semejante a la de Suiza, se pudo convertir en una potencia global de primer orden. Hoy sería inconcebible que ningún país de ese tamaño, por rico y tecnológicamente avanzado que fuera, se pudiera convertir en una potencia global.

Así es la compleja naturaleza de la política de hoy. En nuestra época todavía prevalecen los estados-nación, y ese es el único aspecto en el que la globalización no parece tener efecto; pero se trata de un tipo particular de estado en el que casi todos sus ciudadanos corrientes desempeñan un papel importante. En el pasado los que tomaban las decisiones dirigían los estados sin atender apenas a lo que pensaba el grueso de la población, y hasta finales del siglo XIX y principios del XX los gobiernos podían recurrir a una movilización de su pueblo que hoy consideramos, retrospectivamente, impensable. Sin embargo, lo que piensa la población, o lo que está dispuesta a aceptar, depende más de ellos que antes.

Una novedad clave del proyecto imperial estadounidense es que todos los demás imperios y grandes potencias sabían que no eran únicos y ninguno pretendía una dominación global. Ninguno se creía invulnerable, aunque pudiera considerarse el centro del mundo, como en el caso de China o el Imperio romano en su momento cumbre. La máxima amenaza que podía tener que afrontar el sistema de relaciones internacionales bajo el que vivió el mundo hasta el final de la guerra fría era una dominación regional. El alcance global,

que se hizo posible a partir de 1492, no debería confundirse con la dominación global.

El Imperio británico del siglo XIX fue el único realmente global en el sentido de que operaba en todo el planeta, y en esa medida es un lejano precedente del imperio estadounidense. El estado soviético, durante la época comunista, podía soñar con un mundo transformado, pero sus dirigentes sabían bien, incluso en el momento de mayor poder de la Unión Soviética, que la dominación mundial estaba fuera de su alcance, y contrariamente a lo que podía expresar la retórica de la guerra fría nunca pretendieron seriamente tal dominación.

Pero las diferencias entre las ambiciones estadounidenses actuales y las de Gran Bretaña hace un siglo o más son muy notables. Estados Unidos es un país geográficamente muy vasto con una de las mayores poblaciones del globo y que todavía sigue creciendo (a diferencia de la Unión Europea) debido a una inmigración casi ilimitada. También hay diferencias de estilo. El Imperio británico, en su momento de mayor gloria, ocupaba y administraba una cuarta parte de la superficie del planeta.[1] Estados Unidos nunca ha practicado de hecho el colonialismo, excepto durante un breve período en el que el imperialismo colonial fue la moda dominante a finales del siglo XIX y principios del XX. Ejercía su hegemonía mediante estados dependientes y satélites, en particular en las Américas donde casi no tenía competido-

1. Eric Hobsbawm, *The Age of Empire 1875-1914*, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1987 [hay trad. cast.: *La Era del Imperio, 1875-1914*, Crítica, Barcelona, 1998].

res. A diferencia de la dominación británica, la suya durante el siglo xx se ha basado de forma decisiva en una política de intervención armada.

Como el instrumento decisivo del imperio mundial era en su época la Armada, el Imperio británico se hizo con el control de bases marítimas estratégicamente importantes y puestos avanzados de observación en todo el mundo. Por eso, desde Gibraltar a Santa Elena y las islas Malvinas-Falkland, la Union Jack ondeaba y sigue haciéndolo a mucha distancia de la metrópoli. Fuera del Pacífico, Estados Unidos sólo comenzó a necesitar ese tipo de bases a partir de 1941, pero las obtuvo mediante el acuerdo con lo que podía considerarse genuinamente entonces una «coalición de los comulgantes». Hoy la situación es diferente. Estados Unidos ha cobrado conciencia de la necesidad de controlar directamente un gran número de bases militares y de seguir controlando indirectamente otras.

También hay diferencias importantes en la estructura del estado y su ideología. El Imperio británico estaba al servicio de los británicos, sin pretensiones de universalismo, aunque naturalmente sus propagandistas también proclamaban motivos más altruistas. Así, por ejemplo, la abolición de la trata de esclavos servía para justificar el poderío naval británico del mismo modo que hoy se esgrimen los derechos humanos para justificar el poderío militar estadounidense. Por otra parte, al igual que la Francia y la Rusia revolucionarias, Estados Unidos es una gran potencia nacida de una revolución universalista, por lo que mantiene la creencia de que el resto del mundo debería seguir su ejemplo, o incluso que debería contribuir a liberar el resto del mundo. Pocas

cosas hay más peligrosas que un imperio que persigue su propio interés con la creencia de que le está haciendo un favor a la humanidad.

La diferencia básica es que el Imperio británico, aunque global (en algunos aspectos aún más global que Estados Unidos hoy, ya que controlaba los océanos en una medida en que ningún país controla ahora los cielos), no pretendía el poder global y ni siquiera un poder terrestre político y militar en regiones como Europa o América. El imperio servía a los intereses básicos de Gran Bretaña, que eran sus intereses económicos, con la menor interferencia posible. Siempre fue consciente de las limitaciones del tamaño y los recursos británicos y a partir de 1918 era también muy consciente de su declive imperial.

Pero el imperio global de Gran Bretaña, el primer país industrial, iba en el mismo sentido que la globalización que el desarrollo de la economía británica hizo tanto por impulsar. Se trataba de un sistema de comercio internacional en el que Gran Bretaña, a medida que se desarrollaba su industria, exportaba cada vez más productos industriales a países menos desarrollados de los que a su vez importaba productos primarios, convirtiéndose en su principal mercado a escala mundial.[2] Una vez que dejó de ser el taller del mundo, Gran Bretaña se convirtió en el centro del sistema financiero global.

No sucede lo mismo con la economía estadounidense. Ésta se basaba en la protección de las industrias autóctonas, en un mercado interno potencialmente gigantesco,

2. *Ibid.*

frente a la competencia extranjera, y esto sigue siendo un aspecto decisivo de la política estadounidense. Cuando la industria estadounidense se impuso a escala global comenzó a convenirle más el libre comercio, como le había sucedido a Gran Bretaña; pero una de las debilidades del imperio estadounidense en este siglo XXI es que en el mundo industrializado de hoy su economía ya no es tan dominante como antes.[3] Estados Unidos importa en grandes cantidades productos industriales del resto del mundo, lo que provoca una reacción proteccionista tanto de los empresarios como de los votantes. Se tensa así una contradicción entre la ideología de un mundo dominado por el libre comercio controlado por Estados Unidos y los intereses políticos de importantes sectores estadounidenses que se sienten perjudicados por él.

Una de las pocas formas en que se puede superar esa contradicción es mediante la expansión del comercio de armas, y esto constituye otra diferencia entre el Imperio británico y el estadounidense. Especialmente a partir de la segunda guerra mundial, en Estados Unidos se ha producido un aumento constante y extraordinario del armamento a pesar de la paz relativa, sin precedentes en la historia moderna; esta puede ser la razón del dominio de lo que el presidente Eisenhower llamaba el «complejo militar industrial». Durante los cuarenta años de guerra fría ambos bandos hablaban y actuaban como si fuera a haber una guerra o estuviera a punto de estallar. El Imperio británico alcanzó su cenit en el transcurso de un siglo sin importantes guerras internacionales, de 1815 a 1914. Además, a pesar de la evidente desproporción entre el poderío estadounidense y el soviético, ese impulso al crecimiento de la industria armamentística estadounidense se ha venido intensificando, incluso antes de finalizar la guerra fría, y sigue haciéndolo desde entonces.

3. Chalmers Johnson, *Blowback: The Costs and Consequences of American Empire*, Owl Books, 2001 [hay trad. cast.: *Blowback: costes y consecuencias del imperio americano*, Laetoli, Pamplona, 2004].

La guerra fría convirtió a Estados Unidos en potencia hegemónica del mundo occidental, pero al frente de una alianza, por más que nadie se hiciera ilusiones sobre los poderes de los aliados. El poder real estaba en Washington y todos lo sabían; en cierta forma, Europa reconocía entonces la lógica de un imperio mundial estadounidense. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos se ve frente al hecho de que su imperio y sus objetivos ya no son genuinamente aceptados. No hay «coalición de los comulgantes»; de hecho, su política actual es más impopular que la de ningún otro de sus gobiernos —y probablemente de ninguna otra gran potencia— en toda la historia.

Estados Unidos dirigió la alianza occidental con cierto grado de cortesía tradicional en los asuntos internacionales, aunque sólo fuera porque los europeos se hallaban en la primera línea de fuego en caso de un conflicto abierto con los soviéticos; pero la alianza estaba subordinada permanentemente a Estados Unidos por la dependencia de los demás con respecto a su tecnología militar. Estados Unidos se opuso siempre a la constitución de una fuerza militar independiente en Europa. Las raíces de la larga fricción entre Estados Unidos y Francia desde los días de De Gaulle están en el rechazo francés a aceptar ninguna alianza entre estados como eterna y en su insistencia de mantener una capacidad

independiente de producir equipo militar de alta tecnología. Aun así la alianza era, pese a todas sus tensiones, una auténtica coalición de los comulgantes.

De hecho, el colapso de la Unión Soviética dejó a Estados Unidos como la única superpotencia, a la que ninguna otra potencia podía o quería desafiar. El repentino surgimiento de una ostentación extraordinaria, feroz y provocadora del poderío estadounidense es difícil de entender, tanto más cuanto que no concuerda ni con la larga política imperial desarrollada durante la guerra fría, ni con los intereses de su economía. La política que ha prevalecido recientemente en Washington les parece a todos los observadores exteriores tan insensata que resulta difícil entender qué es lo que se pretende realmente. Pero está claro que lo que pretende la gente que gobierna o parece gobernar en Washington es una manifestación pública de supremacía global mediante la fuerza militar. Su propósito sigue siendo confuso.

¿Es posible que tenga éxito? El mundo es demasiado complicado para que ningún estado lo domine por sí solo. Y con excepción de su superioridad militar en el armamento de alta tecnología, Estados Unidos cuenta con activos decrecientes, o potencialmente decrecientes. Su economía, aunque grande, constituye una parte relativa cada vez menor de la economía global. Es vulnerable a corto y también a largo plazo. Imaginemos que un buen día la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide facturar todas sus operaciones en euros en lugar de hacerlo en dólares.

Aunque Estados Unidos mantiene alguna de sus ventajas políticas, durante los últimos dieciocho meses ha arrojado por la borda la mayoría de ellas. Mantiene ciertos activos

como el dominio de la cultura estadounidense y de la lengua inglesa sobre la cultura mundial; pero el principal activo para los proyectos imperiales en este momento es el militar. El imperio estadounidense está más allá de cualquier competencia en el terreno militar y es probable que siga siendo así en el próximo futuro. Pero eso no significa que sea absolutamente decisivo, como lo es en guerras localizadas. A efectos prácticos no hay nadie, y menos China, al nivel de la tecnología estadounidense; pero a este respecto convendría un análisis meticuloso de los límites de la superioridad tecnológica.

Evidentemente Estados Unidos no pretende ocupar el mundo entero; lo que pretende hacer es ir a la guerra, instaurar unos cuantos gobiernos amigos y volver a casa. Pero eso no funcionará. En términos puramente militares la guerra de Iraq ha sido un éxito; pero como era puramente militar menospreció las tareas a llevar a cabo cuando se ocupa un país: gobernarlo, mantenerlo, como hicieron los británicos en la India con su modelo clásico. El modelo de «democracia» que Estados Unidos pretende ofrecer al mundo en Iraq es lo contario de un modelo e irrelevante a ese efecto. La creencia de que Estados Unidos no necesita auténticos aliados entre otros estados ni un auténtico apoyo popular en los países que su ejército pueda ahora conquistar (pero no administrar realmente) no es más que una fantasía.

La guerra de Iraq fue un ejemplo de la frivolidad con que se toman algunas decisiones en Estados Unidos. Iraq era un país que había sido derrotado por Estados Unidos y se negaba a rendirse; pero seguía tan débil que podría ser fácilmente derrotado de nuevo. Aunque contaba con importantes activos —el petróleo—, la guerra fue en realidad un ejercicio con el

que exhibir el poderío internacional. El plan del que los más insensatos de Washington están hablando, una reforma total, de arriba abajo, de todo el Oriente Medio, carece de sentido. Si su objetivo es derrocar el reino saudí, ¿qué es lo que planean poner en su lugar? Si estuvieran hablando en serio de cambiar Oriente Medio sabemos que una de las primeras cosas que tendrían que hacer es presionar a los israelíes. Bush padre estaba dispuesto a hacerlo, pero el actual ocupante de la Casa Blanca no lo está. Por el contrario, su gobierno ha destruido uno de los dos gobiernos laicos de Oriente Medio y está pensando en atacar al otro, el sirio.

La estupidez de esa política queda meridianamente clara en la forma en que se han planteado sus objetivos en términos de relaciones públicas. Frases como «eje del mal» u «hoja de ruta» no constituyen propuestas políticas, sino meros reclamos publicitarios que se agotan en su propia enunciación. La abrumadora neolengua que se ha apoderado del mundo durante los últimos dieciocho meses indica la ausencia de política real. Bush no hace política sino teatro. Funcionarios como Richard Perle y Paul Wolfowitz hablan en público como Rambo, y cabe suponer que así se expresan también en privado. Lo único que cuenta es el poder abrumador de Estados Unidos. En términos reales lo que indican es que Estados Unidos puede invadir cualquier país con tal que no sea demasiado grande y que se le pueda vencer en poco tiempo, pero eso no es una política, ni puede dar buen resultado. Sus consecuencias para Estados Unidos serán muy perjudiciales. El peligro real para un país que pretende controlar el mundo, esencialmente por medios militares, es la militarización de la vida ciudadana, y ese peligro se ha subestimado gravemente.

En cuanto al resto, el peligro es la desestabilización del mundo. Oriente Medio es sólo un ejemplo, y es mucho más inestable ahora que hace diez o incluso cinco años. La política estadounidense debilita todos los dispositivos alternativos, formales o informales, para mantener el orden. En Europa ha hecho embarrancar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que tampoco supone una gran pérdida. Pero tratar de convertir la OTAN en una policía militar mundial para Estados Unidos es una parodia. Ha saboteado deliberadamente la Unión Europea y también pretende de forma sistemática arruinar otro de los grandes logros mundiales desde 1945, la política de bienestar social de los estados democráticos más prósperos. La crisis, ampliamente percibida, de credibilidad de las Naciones Unidas es menos dramática de lo que parece, ya que en realidad nunca ha podido operar más que marginalmente debido a su dependencia absoluta del Consejo de Seguridad y a la capacidad de veto de Estados Unidos.

¿Cómo va a afrontar —contener— el mundo a Estados Unidos? Algunos, creyendo imposible enfrentarse a este país, prefieren unirse a su proyecto. Más peligrosa es la gente que odia la ideología que enarbola el Pentágono pero apoya el proyecto estadounidense suponiendo que a medida que avance mitigará algunas injusticias locales y regionales. Podríamos llamar a esto «imperialismo de los derechos humanos», y es evidente que se ha visto alentado por el fracaso europeo en los Balcanes durante la década de 1990. La división de opiniones sobre la guerra de Iraq mostró que hay una minoría de destacados intelectuales, como Michael Ignatieff en Estados Unidos o Bernard Kouchner en Francia, dispuestos a respaldar la intervención estadounidense por-

que creen necesario contar con una fuerza capaz de poner orden en los males del mundo. Cabe argumentar que hay gobiernos tan perjudiciales que su desaparición puede ser un gran beneficio para la humanidad; pero esto nunca puede justificar el respaldo a una potencia mundial que no está interesada en un mundo que no entiende, pero que es capaz de intervenir decisivamente con sus fuerzas armadas siempre que alguien hace algo que no le gusta a Washington.

Sobre ese telón de fondo se puede ver cómo crece la presión sobre los medios de comunicación, porque en un mundo en el que la opinión pública es tan importante se hace necesario manipularla.[4] Ya durante la primera guerra del Golfo, en 1990-1991, se intentó impedir a los medios aproximarse al lugar de la acción para evitar que se repitiera lo sucedido en Vietnam; pero no funcionó porque había medios como la CNN que informaban desde Bagdad de cosas que no se adecuaban a la historia que Washington pretendía transmitir. Esta vez, en la nueva guerra de Iraq, tampoco funcionó el control, por lo que se intensificará la búsqueda de formas más eficaces, ya sea un control directo o como último recurso el control tecnológico, pero la colusión entre los gobiernos y los dueños de los monopolios de la comunicación pretende mejorar la eficacia que ya tienen Fox News[5] o Silvio Berlusconi en Italia.

Resulta imposible saber cuánto durará la actual supremacía de Estados Unidos. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que será un fenómeno temporal, como lo han sido todos los demás imperios. En el curso de mi vida he visto el final de todos los imperios coloniales, el final del llamado Reich de Mil Años alemán, que duró sólo doce, y el final del sueño soviético de la revolución mundial.

Hay razones internas por las que el imperio estadounidense no puede durar, y la más inmediata es que la mayoría de los estadounidenses no están interesados en el imperialismo ni en la dominación mundial en el sentido de gobernar el mundo. Lo que les interesa es lo que les ocurre a ellos en su propio país. La economía estadounidense está tan desmejorada que en algún momento el gobierno y los electores decidirán que es mucho más importante concentrarse en la economía que emprender aventuras militares en el extranjero,[6] en particular si se tiene en cuenta que esas intervenciones militares en el extranjero correrán a cargo en buena parte de los propios estadounidenses, algo que no sucedió en el caso de la primera guerra del Golfo, ni tampoco, en gran medida, durante la guerra fría.

Desde 1997-1998 vivimos en una crisis de la economía-mundo capitalista. Eso no significa que se vaya a venir abajo por las buenas, pero al menos es improbable que Estados Unidos pueda proseguir sus ambiciosas aventuras en el extranjero cuando tiene problemas tan serios en casa. Ni siquiera para sus propias pautas empresariales se puede decir que la política económica de Bush sea la más adecuada para Estados Unidos; y su política internacional no favorece

4. «France protests US media plot», *International Herald Tribune*, 16 de mayo de 2003.

5. Eric Alterman, «United States: making up the news», *Le Monde Diplomatique*, edición en lengua inglesa, marzo de 2003.

6. «US unemployment hits an 8-year high», *International Herald Tribune*, 3 de mayo de 2003.

particularmente los intereses imperiales estadounidenses, y mucho menos los intereses del capitalismo estadounidense; de ahí las discrepancias de opinión que se manifiestan en su gobierno.

La cuestión clave ahora es qué hará el gobierno estadounidense a continuación, y cómo reaccionarán los demás países. ¿Seguirán algunos de ellos, como Gran Bretaña —el único miembro genuino de la coalición dominante— respaldando a cualquier coste los planes estadounidenses? Probablemente se extenderá la sensación de que hay que poner límites a lo que Estados Unidos puede hacer con su poder. La contribución más positiva hasta ahora ha sido la de los turcos, simplemente diciendo que hay cosas que no están dispuestos a hacer, aunque con ello pierdan eventuales beneficios. Pero en este instante la principal preocupación es la de, si no contener, al menos educar o reeducar a Estados Unidos. Hubo un tiempo en que el imperio estadounidense conocía sus límites, o al menos las ventajas de comportarse como si los reconociera. Esto se debía en gran medida al miedo al otro, la Unión Soviética. Al haber desaparecido ese temor, sólo el interés bien entendido y la educación pueden tomar el relevo.

5
NACIONES Y NACIONALISMO EN EL NUEVO SIGLO*

Disponemos hoy de una cantidad considerable de estudios académicos sobre la naturaleza y la historia de las naciones y el nacionalismo, volúmenes que vieron la luz a raíz de la publicación, en los años ochenta, de un puñado de textos influyentes.[1] Desde entonces, el debate sobre estas cuestiones no ha cejado. Sin embargo, tal vez convenga, en los albores del siglo XXI, detenerse un instante y reflexionar sobre los extraordinarios cambios históricos que se han producido en todo este tiempo y que podrían tener un cierto impacto en la cuestión, y el primero de todos ellos es el inicio, en 1989, de una etapa de inestabilidad internacional, cuyo fin nadie acierta a pronosticar. Sobre esto versarán las páginas siguientes.

Hoy, nos resulta mucho más fácil evaluar las extraordinarias consecuencias que tuvo el fin de la guerra fría y la desaparición de la URSS y de su esfera de influencia, factores ambos con un efecto estabilizador desde un punto de vista

* «Nations and Nationalism in the New Century», contribución al *Festschrift* en el ochenta aniversario de Rosario Villari; traducción castellana de Ferran Esteve.

1. Sobre todo Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*, Oxford, 1983 [trad. cast. en Alianza, Madrid, 2003]; Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflexions on the Origins and Spread of Nationalism*, Londres, 1983; A. D. Smith, *Theories of Nationalism*, Londres, 1983; véase también Eric Hobsbawm, *Nations and Nationalism since 1780*, Cambridge, 1990 [trad. cast. en Crítica, Barcelona, 1998].

político que nadie puede ya hoy negar. En 1989 tocó a su fin el sistema internacional de potencias, por vez primera en la historia europea desde el siglo XVIII, y ninguno de los intentos unilaterales por crear un nuevo orden global ha tenido éxito. Entretanto, en los años noventa asistimos a una notable balcanización de grandes zonas del viejo mundo, a causa principalmente de la desintegración de la URSS y de la caída de los regímenes comunistas de los Balcanes. En otras palabras, entre el final de la segunda guerra mundial y los años setenta se ha producido el aumento más importante en el número de estados soberanos reconocidos internacionalmente desde los procesos de descolonización de los imperios europeos en la época imperial. Las Naciones Unidas han admitido a 32 estados más desde 1988; un incremento del 20 por 100. También hemos vivido la aparición de los denominados «estados fracasados», estados cuyo gobierno central prácticamente se ha derrumbado o que viven una situación endémica de enfrentamiento armado interno. En esta tesitura se encuentran, sobre el papel, diversos estados independientes y situados en diferentes regiones del planeta, principalmente en África y en las zonas donde se ubicaban los estados que recogieron el testigo de los antiguos países del bloque del Este, pero también, como mínimo, en una región de América Latina. Tras la desaparición de la URSS, incluso el principal estado resultante, la Federación Rusa, pareció tener durante varios años todos los números para convertirse en uno de estos «estados fracasados», pero el empeño del gobierno del presidente Putin por recuperar el control real del país parece haber dado sus frutos, a excepción de la situación en Chechenia. Aun así, sigue habiendo grandes zonas del

planeta inestables, internacional e internamente, y esta inestabilidad se ve más acentuada si cabe por la pérdida progresiva por parte de los estados de uno de sus activos: el monopolio de la fuerza militar. La guerra fría dejó tras de sí un extraordinario arsenal mundial de armas pequeñas, pero no por ello menos mortíferas, y otros útiles de destrucción al alcance de grupos no gubernamentales, armamento al que se podía acceder fácilmente con los recursos financieros procedentes de un sector paralegal tan gigantesco como incontrolable y nacido bajo la égida de una economía de mercado que se había ido propagando por todo el planeta a una velocidad de vértigo. La denominada «guerra asimétrica» a la que se alude en los debates estratégicos norteamericanos de la actualidad se refiere precisamente a estos grupos armados no estatales que son capaces de hacer frente casi indefinidamente al poder doméstico y a las potencias internacionales.

Una de las consecuencias más inquietantes de todo lo dicho es la primera gran epidemia de sangre, genocidio y «limpieza étnica» desde los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial. Los ochocientos mil asesinatos de Ruanda en 1994 son sólo el ejemplo más extremo de genocidio y de expulsiones masivas de los años noventa, tanto en el África Occidental y Central como en Sudán, en las ruinas de lo que fue la Yugoslavia comunista, en Transcaucasia, en Oriente Medio... Con ser notable la cifra de muertos y de mutilados a causa de la sucesión casi ininterrumpida de guerras y de guerras civiles durante los años noventa, es imposible hacer una estimación rigurosa. Sin embargo, el flujo constante de refugiados y de desplazados de estas décadas miserables es tan importante si lo comparamos con la población afectada

como lo fuera durante la segunda guerra mundial y en los años posteriores a la contienda. En 2000, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció que su organización asistía a un total de 23,3 millones de personas en todo el mundo, principalmente procedentes de determinadas regiones del oeste y del sur de Asia, de África y del sudeste de Europa, zonas que, en ocasiones, también acogían a estos refugiados.[2] Una valoración posterior, de 2003, que incluía a los «desplazados internos», los refugiados que no habían abandonado su país, elevaba la cifra a unos 38 millones.[3]

Durante la guerra fría, el duopolio de superpotencias logró, en su conjunto, mantener las fronteras de los estados del mundo a salvo de cualquier amenaza, ya fuera externa o interior. Desde 1989, estas defensas *a priori* ya no se interponen en el camino de la desintegración del poder estatal centralizado en muchos de los estados independientes sobre el papel y que nacieron entre 1945 y el año 2000, e incluso en otros más antiguos, como Colombia. Así, grandes zonas del mundo se han visto inmersas de nuevo en una situación en la que un estado consolidado y fuerte interviene por la fuerza de las armas, por diferentes motivos o bajo varios pretextos, en regiones donde la estabilidad internacional ya no impera o que han escapado al control de sus gobiernos. En regiones estratégicas, como el mundo islámico, el resentimiento contra los invasores o los ocupantes occidentales después de un breve período de emancipación del control imperial vuelve a ser un factor políticamente importante.

2. *The State of World's Refugees*, ACNUR, Oxford, 2000, Anexo 2.
3. www.idpproject.org/global_overview.htm.

El segundo elemento nuevo que concurre en el problema de las naciones y el nacionalismo es la extraordinaria rapidez que ha adquirido en las últimas décadas el proceso de globalización y sus consecuencias sobre los desplazamientos y la movilidad de las personas. Ambos fenómenos se dan hoy a una escala sin precedentes. A finales del siglo pasado, unos 2.600 millones de personas viajaban cada año a bordo de las líneas aéreas; es decir, casi uno de cada dos habitantes del planeta volaba. En lo que respecta a la globalización de los movimientos migratorios masivos, que a menudo nacen en los países pobres para poner rumbo a los países ricos, la cifra es especialmente alta en países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que no han impuesto grandes barreras a la inmigración. A estos tres países llegaron entre 1974 y 1998 casi 22 millones de inmigrantes procedentes de todos los rincones del planeta, un total que supera la cifra de la gran inmigración anterior a 1914 y que casi dobla el número de llegadas anuales antes de esa fecha.[4] En el período comprendido entre 1998 y 2001, en estos tres países desembarcaron 3,6 millones de personas. Sin embargo, Europa Occidental, una región que durante mucho tiempo había sido el punto de partida de muchos emigrantes, acogió a 11 millones durante esos mismos años. La llegada de inmigrantes aumentó con el nuevo siglo. Entre 1999 y 2001, unos 4,5 millones de personas llegaron a los quince estados miembros de la Unión Europea. Bastará con poner un ejemplo: el número de extranjeros que vivían legalmente en España se triplicó entre 1996 y 2003, pa-

4. Angus Maddison, *The World Economy: A millennial perspective*, Centro de Desarrollo de la OCDE, París, 2001, p. 128.

sando de medio millón a 1,6 millones; de esta cifra, dos tercios provenían de fuera de la Unión Europea, principalmente de África y de Sudamérica.[5] El carácter abiertamente cosmopolita que han cobrado las grandes ciudades de los países más ricos es una de las consecuencias más evidentes de este proceso. En Europa, en definitiva el primer hogar del nacionalismo, las transformaciones de la economía mundial están acabando con lo que empezó con las guerras del siglo XX, sus genocidios y sus traslados forzosos de población: un mosaico de estados-nación étnicamente homogéneos.

Gracias a los cambios en el coste y la velocidad de las comunicaciones y del transporte que ha traído consigo la revolución tecnológica, los emigrantes con intención de instalarse en el país de acogida en el siglo XXI ya no sienten, a diferencia de los del siglo XIX, añoranza de su patria, salvo cuando reciben cartas, alguna visita esporádica o, a lo sumo, sufren el «nacionalismo de larga distancia» de organizaciones de emigrantes que financian a los órganos políticos de su país de origen. Los emigrantes más prósperos viven a caballo del viejo y del nuevo continente, e incluso trabajan a caballo de ambos mundos. En un día de fiesta, los aeropuertos de Estados Unidos se inundan de centroamericanos que cogen un vuelo para ir a un pueblo de El Salvador o Guatemala, llevando consigo todo tipo de aparatos electrónicos para regalar. A las reuniones familiares en un país, viejo o nuevo, asisten amigos y parientes de tres continentes que llegan al poco tiempo de haber sido avisados. Incluso los más pobres pueden llamar por teléfono a Bangla Desh o a Senegal a un precio económico y enviar regularmente las remesas que sirven para sostener las economías nacionales de esos países: en la actualidad, suponen ya el 10 por 100 del PNB en Marruecos y Ecuador, entre el 10 y el 15 por 100 en América Central y el Caribe, el 18 por 100 en Albania y el 22 por 100 en Jordania.[6] El número de países que permiten la doble nacionalidad se ha doblado entre 1994 y 2004, cuando ya se podía adquirir en 93 estados.[7] Hoy, la emigración no implica hacer una elección para un período largo de tiempo entre dos países.

Con todo, hoy es todavía imposible juzgar el efecto de esta extraordinaria movilidad a través de las fronteras a partir de los viejos conceptos de naciones y de nacionalismo, si bien no cabe duda de que dichos efectos serán considerables. Como tan acertadamente ha observado Benedict Anderson, la piedra filosofal de la identidad en el siglo XXI no es la partida de nacimiento del estado-nación, sino el documento de identidad internacional, el pasaporte. ¿En qué medida ha afectado y en qué medida podría afectar la nacionalidad plural, real o potencial —el pasado norteamericano de los políticos en los antiguos países del bloque comunista, la identificación de los judíos norteamericanos con el gobierno de Israel—, a la lealtad de los ciudadanos hacia un estado-nación?[8] ¿Qué sentido tienen los derechos y las obligaciones de los «ciudadanos» en estados donde una parte importante

5. *El País*, 13 de enero de 2001, p. 11.

6. *Stalker's Guide to International Migration*, tabla 5 «Developing country remittance receivers», 2001 (stalker.com/migration/mg_stats_5.htm).
7. money.cnn.com/2004/10/08/real_estate/mil_life/twopassports/.
8. Benedict Anderson, *The Spectre of Comparisons, Nationalism, Southeast Asia and the World*, Londres-Nueva York, 1998, pp. 69-71.

de la población vive en algún momento u otro fuera del territorio nacional y donde un sector amplio de los residentes permanentes goza de unos derechos que son inferiores a los de los nacionales? A la vista de las dimensiones que han alcanzado los movimientos de población, legales o clandestinos, ¿qué efecto tiene la pérdida de poder del estado a la hora de controlar lo que sucede dentro de sus fronteras o, como se puede deducir de la fiabilidad cada vez menor de los censos en Estados Unidos o el Reino Unido, de saber quién se halla en el territorio nacional? Aunque son preguntas para las que aún no tenemos respuesta, no por ello hemos de dejar de hacérnoslas.

El tercer elemento, la xenofobia, no es nuevo, pero sí que es cierto que subestimé sus dimensiones y sus implicaciones en mi propio trabajo sobre el nacionalismo moderno. En las patrias históricas de la Europa de las naciones y del nacionalismo, y en menor medida en países como Estados Unidos, formados principalmente por grandes oleadas de inmigrantes, la nueva globalización de los flujos migratorios ha consolidado la larga tradición de hostilidad económica popular hacia los grandes movimientos de personas, así como la resistencia contra todo aquello que se percibe como una amenaza contra la identidad cultural del grupo. La fuerza de la xenofobia queda de manifiesto en el hecho de que la ideología del capitalismo de mercado libre globalizado, que se ha apoderado de los principales gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales, no ha logrado consolidar en última instancia la libertad de movimientos de mano de obra a escala internacional, a diferencia de lo que sí ha sucedido en el terreno del capital y del comercio. Ningún gobierno democrático podría permitirse respaldar una iniciativa así. Sin embargo, el aumento evidente de la xenofobia da cuenta, al igual que los flujos migratorios internacionales masivos, del cataclismo social y de la desintegración moral de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Se trata de una combinación explosiva, evidentemente, y más en países homogéneos étnica, confesional y culturalmente, y en regiones que no están acostumbradas a acoger a grandes grupos de extranjeros. De ahí que una propuesta para convertir las iglesias protestantes que ya no se usan en mezquitas que sirvan como lugares de culto de una religión con más y más adeptos entre los inmigrantes haya provocado un breve terremoto en un país por otro lado tan tranquilo y tolerante como Noruega, y de ahí que prácticamente todos los lectores de este libro en las viejas patrias europeas del nacionalismo entiendan esta reacción.

La dialéctica de las relaciones entre globalización, identidad nacional y xenofobia tiene un claro ejemplo en una actividad pública donde se dan cita las tres: el fútbol. Gracias a la televisión transnacional, este deporte popular en el mundo entero se ha transformado en un complejo industrial capitalista a escala global, si bien sus dimensiones son más modestas si lo comparamos con otras actividades empresariales también globales. Como tan bien se ha dicho:

> De esta dicotomía entre lo «nacional», último refugio de las pasiones del mundo antiguo, y lo «transnacional», trampolín del ultraliberalismo del mundo nuevo, resulta, tanto para el aficionado al fútbol cuanto para los grupos que gravitan en torno de este deporte, una auténtica esquizofrenia, de una

complejidad extraordinaria ... que ilustra a la perfección, en última instancia, el mundo ambivalente en el que nos encontramos.[9]

Prácticamente desde el momento en que este deporte se ganó al gran público, el fútbol se ha convertido en el catalizador de dos formas de identificación de grupo: local (con el *club*) y nacional (con la *selección nacional*, formada por jugadores de club). Ambas eran, en el pasado, complementarias, pero la transformación del fútbol en un negocio global, y sobre todo el espectacular aumento de un mercado mundial de jugadores en los años ochenta y noventa, y más concretamente a partir de la sentencia Bosman de 1995 del Tribunal Europeo de Justicia,[10] ha hecho de los intereses nacionales y globales dos mundos progresivamente incompatibles en el terreno de los negocios, de la política, de la economía y del sentimiento popular. El negocio futbolístico global está en manos, fundamentalmente, de unas cuantas empresas capitalistas con nombres universales, un número reducido de superequipos de un puñado de países europeos[11] que compiten entre sí tanto en las competiciones nacionales como, preferiblemente, en las internacionales. Sus plantillas son transnacionales. A menudo, los jugadores

9. Pierre Brochand, «Économie, diplomatie et football», en Pascal Boniface, ed., *Géopolitique du football*, Bruselas, 1998, p. 78.
10. Universidad de Leicester, Centro de Sociología del Deporte: documento 16, *The Bosman Ruling: Football Transfer and Foreign Footballers*, Leicester, 2002.
11. Los 18 equipos que pretenden crear una «superliga» europea proceden de Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia, con tres cada uno, dos de los Países Bajos y uno de Portugal. Algo parecido hicieron varios clubes de ligas europeas menores con vistas a crear una «Liga Atlántica».

oriundos del país de origen del equipo son minoría. Desde los años ochenta, han lanzado con más asiduidad sus redes fuera del mercado europeo, y especialmente al africano; la cifra de jugadores de este continente que jugaban en las ligas europeas en 2002 rondaba los tres mil. Las consecuencias de este hecho se observan en tres frentes. En lo que respecta a los clubes, ha debilitado seriamente a todos aquellos que no participan en las grandes ligas y en los grandes torneos, pero especialmente a los equipos de los países exportadores de jugadores, y más concretamente a los de América y África. Esto explica la crisis en que se hallan varios equipos brasileños y argentinos antaño entre los grandes.[12] En Europa, los clubes pequeños resisten la acometida de los gigantes comprando jugadores a bajo precio, principiantes con talento llegados de otros continentes, por ejemplo, con la esperanza de venderlos a los grandes clubes cuando se hayan convertido en estrellas —varios futbolistas de Namibia juegan en Bulgaria, en Luxemburgo y Polonia encontramos a jugadores de Níger, en Hungría, a algunos de Sudán, en Polonia, a otros de Zimbabwe...

En segundo lugar, la lógica empresarial transnacional ha chocado con el fútbol en tanto que manifestación de una identidad nacional, tanto por su tendencia a preferir los enfrentamientos internacionales entre grandes equipos en vez de las ligas y las copas nacionales tradicionales como por el hecho de que los intereses de los grandes clubes topan con los

12. Cf. *Fútbol, Futebol, Soccer: Football in the Americas*, Conferencia del Instituto de Estudios Latinoamericanos, 30 y 31 de octubre de 2003, Londres (www.sas.ac.uk/ilas/sem_football.hmt).

de los combinados nacionales, abanderados de una identidad nacional no exenta de contenido político y emocional y que, sin embargo, deben recurrir únicamente a jugadores en posesión del pasaporte adecuado. A diferencia de los grandes clubes, que pueden llegar a ser más fuertes que las selecciones nacionales, estas últimas son efímeras. En la actualidad, suelen ser un grupo de jugadores, muchos de los cuales, y en algunos casos extremos, como el de Brasil, la mayoría, juegan en algún equipo extranjero que pierde dinero por cada día de ausencia del jugador, en cumplimiento de los períodos mínimos estipulados para que entrenen y jueguen bajo la disciplina de la selección nacional. Para los grandes clubes y para las superestrellas, los clubes son más importantes que su país. Aun así, los imperativos no económicos de la identidad nacional han sabido imponerse en el juego, y han podido crear una competición de selecciones nacionales, el Mundial, que se ha erigido en la mejor manifestación de la presencia económica global del fútbol.

En tercer lugar, se advierte el aumento de los comportamientos xenófobos y racistas entre la hinchada, fundamentalmente masculina, de los países imperiales. Los seguidores se ven atrapados entre el orgullo que sienten por los grandes equipos de su país o por el combinado nacional, para el que juegan futbolistas extranjeros o negros, y la presencia cada vez mayor en la arena nacional de contrincantes que representan a países considerados inferiores durante mucho tiempo. Los episodios racistas que se observan periódicamente en los estadios de fútbol de países que no se habían considerado como racistas hasta la fecha, como España o los Países Bajos, y la relación que existe entre las hinchadas

radicales y los políticos de extrema derecha son la manifestación de estas tensiones.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la xenofobia también es el reflejo de la crisis de una identidad nacional culturalmente representada por estados-nación donde todo el mundo tiene acceso a la educación y a los medios de comunicación y en un momento en el que la política de una identidad colectiva excluyente, étnica, religiosa o basada en el género o en el estilo de vida, busca una regeneración artificial de una *Gemeinschaft* en el seno de una *Gesellschaft* cada vez más remota. El proceso por el que los campesinos se convirtieron en franceses y los inmigrantes en ciudadanos norteamericanos se ha invertido, y las identidades de los grandes estados-nación se desmoronan para dejar paso a una identidad colectiva consciente de sí misma, o incluso a identidades privadas a-nacionales de *ubi bene ibi patria*. A su vez, todo no es sino el reflejo de la pérdida de legitimidad del estado-nación a ojos de quienes ocupan su territorio, y la reducción de lo que puede exigir a sus ciudadanos. Que los estados del siglo XXI prefieran librar sus guerras con ejércitos profesionales o incluso con contratistas militares privados no responde únicamente a cuestiones técnicas, sino a que ya no pueden confiar en que los ciudadanos se alisten masivamente para morir por su patria en el campo de batalla. Los hombres y las mujeres pueden aceptar morir (o, mejor dicho, matar) por dinero, o por algo más o menos importante; sin embargo, en las patrias originales de la nación, ya no están dispuestos a morir por el estado-nación.

¿Y qué sustituirá, si sucede tal cosa, al estado-nación como modelo de gobierno popular en el siglo XXI? La respuesta sigue siendo una incógnita.

6
LAS PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA*

Hay palabras con las que nadie quiere que se le asocie en público, como racismo e imperialismo. Por otra parte las hay que logran que todo el mundo arda en deseos de demostrar entusiasmo, como maternidad y medio ambiente. La palabra «democracia» es una de ellas. Tal vez recuerden que en los tiempos de lo que solía llamarse «socialismo real» hasta los regímenes más inverosímiles se reclamaban democráticos en sus denominaciones oficiales: tal fue el caso de Corea del Norte, de la Camboya de Pol Pot y de Yemen. Hoy, desde luego, es imposible, a excepción de unas cuantas teocracias islámicas y de otros tantos reinos y feudos hereditarios de jeques asiáticos, encontrar un régimen que no rinda oficialmente tributo, tanto en su constitución como en su gobierno, a asambleas o a presidentes elegidos mediante competición electoral. Cualquier estado que posea estos atributos es oficialmente considerado superior a cualquier otro que carezca de ellos, y así sucede, por ejemplo, con la Georgia postsoviética frente a la Georgia soviética, o con la oposición entre la Ghana malograda por la corrupción civil y el régimen del señor Rawlings. Con independencia de su historia y de su cultura, las características constitucionales que son comunes a Suecia, Papúa Nueva Guinea y Sierra Leona (en los casos en

* «The Prospects of Democracy», *The Athenaeum Lecture*, Londres, 2000, pp. 3-16; traducción castellana de Tomás Fernández y Beatriz Eguibar.

que es posible encontrar aquí presidentes electos) sitúan oficialmente a todos estos países en una misma clase, mientras que Pakistán y Cuba pertenecen a otra. Esta es la razón de que el debate racional y público acerca de la democracia sea necesaria e inusitadamente difícil.

Además, dejando a un lado toda retórica, como señala hoy el profesor John Dunn con la debida concisión, «por primera vez en la historia humana existe una única y clara forma dominante de estado, la moderna república democrática, constitucional y representativa». No obstante, debe indicarse igualmente que la mayoría de los sistemas políticos estables que los observadores imparciales no tendrían inconveniente en considerar democráticos son hoy monarquías, ya que éstas parecen haber perdurado mejor en este contexto político, a saber, el de la Unión Europea y Japón.

De hecho, en el discurso político de nuestros días, cuya práctica totalidad puede describirse, en las palabras del gran *Leviatán* de Thomas Hobbes, como un «lenguaje sin sentido»,* la palabra «democracia» alude a este modelo estándar de estado; es decir, a un estado constitucional que ofrece la garantía del imperio de la ley, así como diversos derechos y libertades civiles y políticos, y al que gobiernan sus autoridades, entre las que deben figurar necesariamente asambleas representativas, elegidas por sufragio universal y por la mayoría numérica del conjunto de sus ciudadanos, en elecciones celebradas a intervalos regulares en las que se enfrenten distintos candidatos y organizaciones rivales. Los historiadores y los científicos políticos podrían recordarnos con razón que este no es el significado original de la palabra «democracia», y que ciertamente no es el único. Para mi propósito presente, este matiz va más allá de nuestro asunto. A lo que hoy nos vemos confrontados es a la «democracia liberal», y sus perspectivas son la materia de mi examen.

Tal vez se ciña algo más a la cuestión recordar que no existe un vínculo necesario o lógico entre los distintos componentes del conglomerado que compone la «democracia liberal». Podrían cimentarse estados no democráticos en el principio del *Rechtstaat*, o imperio de la ley, como sucedió indudablemente en los casos de Prusia o de la Alemania imperial. Las constituciones, incluso las constituciones eficaces y operativas, no tienen por qué ser democráticas. Sabemos, desde Tocqueville y John Stuart Mill, que a menudo la democracia es más una amenaza que una protección para la libertad de las minorías y la tolerancia que se les profesa. También sabemos, desde Napoleón III, que los regímenes que alcanzan el poder mediante un *coup d'état* pueden continuar ganándose el apoyo de auténticas mayorías mediante sucesivos llamamientos al sufragio universal (masculino). Y —por escoger únicamente unos cuantos ejemplos recientes— ni Corea del Sur ni el Chile de las décadas de 1970 y 1980 sugieren la existencia de una ligazón orgánica entre el capitalismo y la democracia, aunque la retórica política de Estados Unidos

* Se refiere el autor a la diferencia que establece Hobbes entre el *error* y el *absurdo*, derivado lo primero de conjeturar, en una sucesión de hechos posibles, una consecuencia específica que finalmente no se da, pero no era ilógica, mientras que lo segundo ocurre cuando de un razonamiento con palabras «llegamos a una inferencia general que es falsa», lo que, aún recibiendo también, por lo común, el nombre de *error*, «es en realidad un *absurdo*, un lenguaje sin sentido», puesto que las palabras, al tener un significado específico, hacen *imposible* sacar de un aserto falso una derivación verdadera, o, al revés; *Leviatán*, traducción, prólogo y notas de Carlos Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1992, capítulo 5, p. 44. (*N. de los t.*)

trate ambas cosas como si se tratara casi de gemelos siameses. Con todo, dado que nos ocupamos de la práctica política y social de hoy, y no de la teoría, tal vez podamos considerar que estas cuestiones son meros tiquismiquis académicos, excepto en la medida en que sugieran que buena parte de los argumentos favorables a la democracia liberal dependen más de su componente liberal constitucional que de su ingrediente democrático o, más exactamente, electoral. La defensa del voto libre no estriba en que garantice los derechos, sino en que permite que la gente (en teoría) se deshaga de los gobiernos impopulares. Y a veces así ocurre.

No obstante, hay tres observaciones críticas que son de más inmediata relevancia.

La primera es obvia, pero su significación no siempre se admite.

La democracia liberal, al igual que cualquier otra forma de régimen político, precisa de una unidad política que enmarque su ejercicio: por lo común el tipo de estado que habitualmente conocemos como «estado-nación». No puede aplicarse en aquellos ámbitos en que no exista dicha unidad, o en los que parezca estar aún alumbrándose, y singularmente no es posible aplicarla a las cuestiones globales, por muy urgentemente que éstas nos acucien. Descríbase como se describa, la política de las Naciones Unidas no admite ser encajada en el marco de la democracia liberal, excepto en sentido figurado. Aún está por ver si es posible adecuar a dicho marco la del conjunto de la Unión Europea. Esta es una reserva particularmente sustantiva.

La segunda reflexión arroja algunas dudas sobre la afirmación, ampliamente aceptada —de hecho, en el discurso

público estadounidense, admitida de forma universal—, de que la gobernanza liberal democrática es siempre e *ipso facto* superior, o al menos preferible, a la no democrática. No hay duda de que esto es cierto, siendo idénticas todas las demás circunstancias, pero la cuestión es que no siempre lo son. No les pediré que consideren el caso de la empobrecida Ucrania, que ha accedido a la política democrática (más o menos) a costa de perder las dos terceras partes del modesto producto nacional que tenía el estado en la época soviética. Fíjense más bien en Colombia, una república que, juzgada según pautas latinoamericanas —y de hecho en función de los criterios que hoy gozan de general aceptación—, posee una plusmarca casi única en relación con la permanencia prácticamente ininterrumpida de un gobierno democrático, representativo y constitucional. Tal como exige la teoría, dos partidos enfrentados electoralmente, el de los liberales y el de los conservadores, han protagonizado aquí, por lo general, la pugna política. Salvo durante algunos breves intervalos, Colombia nunca se ha encontrado sometida al gobierno del ejército o de los caudillos populistas. Sin embargo, y a pesar de que el país no se haya visto implicado en ninguna guerra internacional, en Colombia el número de personas muertas, mutiladas y expulsadas de sus casas se ha venido contando por millares a lo largo del último medio siglo. Casi con toda certeza, la cifra supera de lejos a la de cualquier otro país del hemisferio occidental. Es sin duda incomparablemente superior a la de cualquiera de los países de ese continente, atormentados, como es notorio, por las dictaduras militares. No estoy sugiriendo que los regímenes no democráticos sean mejores que los regímenes democráticos. Simplemente les recuerdo el

hecho —que con demasiada frecuencia se pasa por alto— de que el bienestar de los países no depende de la presencia o ausencia de un único tipo de orden institucional, por muy recomendable que sea desde el punto de vista moral.

La tercera observación quedó expresada en la clásica máxima de Winston Churchill: «La democracia es la peor de todas las formas de gobierno, a excepción de todas las demás». Pese a que esto se toma habitualmente como un argumento *en favor* de la democracia liberal representativa, es de hecho una expresión de profundo escepticismo. Sea cual sea la retórica que se emplee en campaña, los analistas políticos y los profesionales siguen mostrándose extremadamente escépticos respecto a que la democracia representativa de masas sea de hecho una forma efectiva de administrar los gobiernos —o cualquier otra cosa—. Los argumentos en pro de la democracia son básicamente negativos. Incluso como alternativa a otros sistemas, su defensa va indefectiblemente acompañada de suspiros de resignación. Esto no tuvo una excesiva importancia durante la mayor parte del siglo XX, ya que los sistemas políticos que la desafiaron —hasta el final de la segunda guerra mundial, tanto desde la derecha como desde la izquierda autoritarias, y en tanto no terminó la guerra fría, principalmente desde la extrema izquierda— eran, o al menos así se lo parecían a la mayor parte de los liberales, manifiestamente espantosos. No obstante, mientras no hubo de enfrentarse a esos retos, los defectos inherentes a la democracia liberal representativa como sistema de gobierno resultaron obvios tanto para la mayoría de los pensadores serios como para los satíricos. De hecho, esos defectos fueron objeto de amplios y francos debates, incluso entre los políticos,

hasta que se reveló poco aconsejable que éstos dijeran en público lo que verdaderamente pensaban de la masa de votantes de la que dependía su elección.

Con todo, en los países cuyas tradiciones de gobierno representativo llevaban largo tiempo establecidas, la democracia no sólo se aceptaba porque los sistemas alternativos parecieran mucho peores, sino también porque, a diferencia de lo sucedido en la terrible época de las guerras mundiales y de la catástrofe económica global, era muy poca la gente que sentía la necesidad de un sistema alternativo; en particular en un período de prosperidad general que lograba una vida mejor hasta para los pobres, y que estaba provisto, además, de sistemas de bienestar público muy amplios. No es en modo alguno seguro que muchas partes del globo, hoy nominalmente regidas por gobiernos representativos, vivan épocas tan felices.

Es —siempre lo ha sido— un juego de niños criticar la retórica de campaña de la democracia liberal como forma de gobierno. Y sin embargo, hay algo en ella que resulta innegable: «el pueblo» (sea cual sea el grupo de humanos definido como tal) es hoy el fundamento y el punto de referencia común a todos los gobiernos estatales, excepto el teocrático. Y esto no es sólo inevitable, sino justo, pues si el gobierno tiene algún propósito ha de ser el de hablar en nombre de todos los ciudadanos, y con vistas a la procura de su bienestar. En la era del hombre de la calle, todo gobierno es un gobierno del pueblo y para el pueblo, aunque evidentemente no pueda ser, en sentido operativo alguno, un gobierno regido *por* el pueblo. Este era un punto de encuentro que compartían los demócratas liberales, los comunistas, los fascistas, o los nacionalistas

de todo tipo, pese a que tuvieran ideas diferentes respecto a cómo formular, expresar e influir —no nos andemos con rodeos— en «la voluntad del pueblo». Esta es la herencia común que el siglo xx, un siglo de guerras totales y de economías coordinadas, ha transmitido al xxi. Ese legado descansa no sólo en el igualitarismo de unos pueblos que ya no están dispuestos a seguir aceptando una situación de inferioridad en una sociedad jerárquica dominada por superiores «naturales», sino también en el hecho de que, hasta ahora, los estados nacionales, las economías y los sistemas sociales modernos no han podido funcionar sin el respaldo pasivo e incluso la activa participación y movilización de un número muy elevado de ciudadanos. La propaganda de masas ha sido un elemento esencial incluso para los regímenes dispuestos a aplicar una coerción sin límite a sus pueblos. Ni siquiera las dictaduras pueden sobrevivir mucho tiempo si sus súbditos dejan de estar dispuestos a aceptar el régimen. Esta es la razón de que, llegado el momento de la verdad, los llamados regímenes «totalitarios» de la Europa del Este, a pesar de seguir contando con la lealtad de su aparato estatal y de tener su maquinaria represiva en buen orden de funcionamiento, desaparecieran de forma rápida y silenciosa.

Esta es la herencia del siglo xx. ¿Seguirá constituyendo aún en el siglo xxi el fundamento del gobierno popular, incluido el liberal democrático? El argumento que planteo en esta conferencia es que la actual fase del desarrollo capitalista globalizado la está socavando, y que esto tendrá, y está teniendo ya, graves implicaciones para la democracia liberal, tal como la concebimos en el momento presente. Y ello porque, hoy, la política democrática se asienta en dos supuestos,

uno moral, o si lo prefieren, teórico, y otro práctico. En términos morales, la democracia requiere que el régimen cuente con el apoyo expreso del grueso de sus ciudadanos, lo que, se presume, corresponde a la fracción más numerosa de los habitantes del estado. Por muy democráticos que fueran los arreglos para blancos en la Sudáfrica segregacionista, un régimen que prive permanentemente del voto a la mayoría de su población no puede ser considerado democrático. Puede que algunos de los actos por los que se expresa el asentimiento personal a la legitimidad del sistema político, como el de votar periódicamente en las elecciones, sean poco más que gestos simbólicos, y de hecho, durante mucho tiempo, los científicos políticos han considerado un lugar común que en los estados con grandes cifras de ciudadanos sólo una modesta minoría participa de forma constante y activa en los asuntos de su estado u organización de masas. Esto resulta conveniente para quienes dirigen, y de hecho los políticos y los pensadores moderados han abrigado durante mucho tiempo la esperanza de que exista un cierto grado de apatía política. Sin embargo, estos actos son importantes.

Hoy nos enfrentamos a una secesión extremadamente obvia: la de los ciudadanos respecto de la esfera de la política. La participación en las elecciones parece estar disminuyendo en la mayoría de los países liberaldemócratas. Si la elección popular es el principal criterio de la democracia representativa, entonces, ¿en qué medida es posible hablar de legitimidad democrática de una autoridad elegida, como la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por una tercera parte del electorado potencial o, como en el caso del reciente gobierno local británico y de las elecciones al

Parlamento europeo, por algo así como el 10 o el 20 por 100 del electorado? O de hecho, ¿cómo considerar legítimo a un presidente de los Estados Unidos elegido por poco más de la mitad del 50 por 100 de los estadounidenses con derecho a voto?

Desde el punto de vista práctico, los gobiernos de los modernos estados-nación territoriales —todos los gobiernos— descansan en tres presupuestos: en primer lugar, que tienen más poder que otras unidades que operan en su territorio; en segundo lugar, que los habitantes de sus territorios están más o menos dispuestos a aceptar de buena gana su autoridad; y en tercer lugar, que los gobiernos pueden proporcionar a los ciudadanos servicios que de otro modo no sería posible prestar en absoluto, o no con la misma eficacia —como es el caso, según advierte la frase proverbial, de «la ley y el orden»—. En los últimos treinta o cuarenta años, estas presunciones han ido perdiendo validez de forma progresiva.

Vayamos al primer punto: pese a que aún sean mucho más fuertes que cualquier rival interno, como lo muestran los últimos treinta años vividos en Irlanda del Norte, hasta los estados más fuertes, estables y eficaces han perdido el monopolio absoluto de la fuerza coercitiva. Y una de las razones, nada desdeñable, que lo explica es la catarata de nuevos instrumentos de destrucción, pequeños y portátiles, que hoy se encuentran fácilmente al alcance de los pequeños grupos disidentes, así como el carácter de la vida moderna, extremadamente vulnerable a episodios de súbita desorganización, por breves que sean. Fijémonos ahora en la segunda cuestión: los dos pilares más sólidos de un gobierno estable han comenzado a tambalearse, esto es (en los países

que descansan en la legitimidad popular), la lealtad y el servicio voluntario de los ciudadanos a los estados, y (en los países que prescinden de dicha legitimidad popular) la disposición a acatar el poder del estado, pese a que éste esté muy arraigado y sea abrumador. Sin el primero de estos pilares, las guerras totales basadas en el servicio universal y en la movilización de la nación habrían sido tan imposibles como el incremento experimentado por la renta pública de los estados, que no habría podido elevarse hasta alcanzar el porcentaje del Producto Nacional Bruto al que actualmente ha llegado, un incremento que, permítanme recordárselo, puede que hoy supere el 40 por 100 del PNB en algunos países y que asciende aproximadamente al 20 por 100 de la riqueza nacional incluso en Estados Unidos y en Suiza. Sin el segundo, según manifiesta la historia de África y de grandes regiones de Asia, no habría sido posible que pequeños grupos de europeos hubiesen conservado su dominio colonial por espacio de varias generaciones con un coste relativamente moderado.

El tercer presupuesto se ha visto socavado no sólo por el debilitamiento del poder del estado sino, a partir de la década de 1970, por el hecho de que los políticos y los ideólogos hayan vuelto a proceder, con argumentos favorables al *laissez faire*, a una crítica extremadamente radical del estado, crítica que sostiene que el papel de éste debe ser reducido a toda costa. Se argumenta, con más convicción teológica que pruebas históricas, que todo servicio que puedan proporcionar las autoridades públicas es, bien indeseable, bien redundante, pues «el mercado» puede prestarlo mejor, con mayor eficacia y a menor coste. Desde que se ha planteado este argu-

mento, los servicios públicos (y, por cierto, también los servicios cooperativos) han sido sustituidos de forma generalizada por servicios privados o privatizados. Actividades tan características del gobierno nacional, o del local, como las oficinas de correos, las prisiones, los colegios, el suministro de agua e incluso los servicios de asistencia social han sido puestas en manos de empresas privadas o transformadas en negocios lucrativos, y, al mismo tiempo, los funcionarios públicos han sido transferidos a agencias independientes o reemplazados por subcontratistas comerciales. Se han subcontratado incluso algunos sectores de la defensa militar. Y, por supuesto, el *modus operandi* de la empresa privada, centrada en la maximización de beneficios, se ha convertido en el modelo al que aspira incluso el gobierno. En la medida en que esto se verifica, el estado tiende a confiar en mecanismos económicos privados y a sustituir con ellos la movilización activa y pasiva de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, no puede negarse que, en los países ricos del mundo, los extraordinarios triunfos de la economía ponen a disposición de la mayoría de los consumidores más bienes de los que el gobierno o la acción colectiva hayan prometido o proporcionado jamás en épocas de menor bonanza.

Sin embargo, en esto reside precisamente el problema. El ideal de la soberanía del mercado no es un complemento de la democracia liberal, sino una alternativa a este sistema. De hecho, es una alternativa a todo tipo de política, ya que niega la necesidad de tomar decisiones *políticas*, que son precisamente decisiones relacionadas con intereses comunes o de grupo en tanto que intereses distintos de la suma de opciones, racionales o de otra clase, de unos individuos dedicados

a la procura de sus preferencias privadas. En cualquier caso, el mencionado ideal sostiene que el constante proceso de averiguación que conduce a descubrir qué es lo que la gente quiere, averiguación que proporciona el mercado (junto con los estudios de mercado), es necesariamente más eficaz que el ocasional recurso al burdo recuento de papeletas electorales. La participación en el mercado sustituye a la participación en la política. El consumidor ocupa el lugar del ciudadano. En este sentido, el señor Fukuyama ha argumentado que el hecho de optar por no votar, como el de preferir comprar en un supermercado en lugar de en un pequeño comercio local, «es reflejo de que la población realiza una elección democrática. Los ciudadanos *desean* la soberanía del consumidor».[1] No hay duda de que así es, pero ¿es esta preferencia compatible con lo que ha venido considerándose un sistema político liberal demócrata?

Por consiguiente, tanto el estado territorial soberano como cualquier combinación de estados, siendo como son el marco esencial de la política democrática o de cualquier otro tipo de política, viven hoy una situación de mayor debilidad que antes. El alcance y la eficacia de sus actividades son inferiores a los de épocas pasadas. Su imperio sobre la obediencia pasiva y el servicio activo de sus súbditos o ciudadanos está declinando. Los dos siglos y medio en que los estados territoriales modernos, fuera cual fuese la naturaleza o la ideología de sus regímenes, han asistido al crecimiento ininterrumpido de su poder, de su campo de acción, de sus ambiciones y de la capacidad de movilización de sus habitantes,

1. *Prospect*, agosto-septiembre de 1999, p. 57.

parecen llegar a su fin. La integridad territorial de los estados modernos (lo que los franceses llaman «la república una e indivisible») ya no es algo que se dé por supuesto. Dentro de treinta años, ¿será una sola España, o Italia, o Gran Bretaña, la que constituya el principal polo de lealtad de sus ciudadanos? Por primera vez en siglo y medio resulta posible plantear esta interrogante con realismo. Y todo esto no puede sino afectar a las perspectivas de la democracia.

En primer lugar, la relación entre los ciudadanos y las autoridades públicas adquiere un carácter más lejano, y sus vínculos se atenúan. Se ha producido un marcado declive de ese «poder divino que protege» no sólo la majestad shakespiriana,* sino los símbolos públicos de la cohesión nacional y la lealtad de los ciudadanos en cualquier gobierno legítimo, en especial en los democráticos: la presidencia, la monarquía y, lo que quizá resulte aún más teatral en Gran Bretaña, el Parlamento. ¿Qué podría resultar más significativo de su declive que el mero hecho de que la imagen gráfica oficial del Parlamento que aparece en nuestras pantallas apenas intente disimular la dispersión de un puñado de personajes en un espacio de verdes escaños vacíos? Sus sesiones no son materia informativa, ni siquiera en la prensa seria, excepto como pugilatos de tribuna o chistes. Ha habido un profundo declive en los movimientos o las organizaciones políticas

* Cita textual de la réplica de Claudio, rey de Dinamarca, a Laertes en *Hamlet*: «¿Por qué razón, Laertes, crece tu rebelión como si fuera un gigante? Dejadle, Gertrud; no habéis de temer por mí, pues un poder divino protege la majestad de forma que la traición ni siquiera intuye su objetivo, no pudiendo consumar la acción»; Shakespeare, *Hamlet*, edición bilingüe del Instituto Shakespeare, versión definitiva de Manuel Ángel Conejero y Jenaro Talens, Cátedra, Madrid, 1999, Acto IV, Escena V. (*N. de los t.*)

dedicadas a activar al conjunto de los pobres, llamamiento que confería un significado de cierta autenticidad a la palabra «democracia».

De ahí que no sólo haya menguado la disposición de los ciudadanos a participar en política, sino también la eficacia de la clásica y —según la teoría convencional— única forma legítima de ejercer la ciudadanía, esto es, la elección por sufragio universal de aquellas personas que representan al «pueblo» y están por tanto autorizadas a gobernar en su nombre. Entre dos elecciones consecutivas —es decir, por espacio de varios años, habitualmente—, la democracia existe sólo como una amenaza potencial que se cierne sobre la reelección de esas personas o el éxito de sus partidos. Ahora bien, esto adolece claramente de falta de realismo, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como desde la perspectiva del gobierno. De ahí que empeore cada vez más la ya baja calidad intelectual de la retórica pública de los políticos democráticos, en especial cuando se ven confrontados con dos de los elementos del actual proceso de la política democrática que han adquirido un carácter progresivamente más central: el papel de los medios de comunicación modernos, y la expresión de la opinión pública a través de la acción (o la inacción) directa.

La razón es que estos son los dispositivos con los que, en el lapso que media entre dos elecciones, se ejerce un cierto control sobre las acciones del gobierno. Su desarrollo compensa asimismo el debilitamiento de la participación ciudadana y la merma de la eficacia del tradicional proceso vinculado al gobierno representativo. Los titulares, o mejor dicho, las irresistibles imágenes de la televisión, son el objetivo in-

mediato de todas las campañas políticas, porque resultan mucho más efectivas que la movilización de decenas de miles de personas. Y porque, desde luego, es mucho más fácil emitirlas que activar a la gente. Hace ya mucho tiempo que quedaron atrás los días en que todo el trabajo del despacho de un ministro quedaba aparcado para responder a una inminente indagación crítica ante el Parlamento. Lo que para en seco al mismísimo número 10 de Downing Street es la perspectiva de que un periodista de investigación pueda publicar algo. Y no son siquiera los debates parlamentarios, ni las políticas editoriales, las que suscitan unas expresiones de descontento público tan patentes que incluso los gobiernos con la más segura de las mayorías quedan obligados a tomar nota de ellas entre dos períodos electorales: son los impuestos municipales, el gravamen de los carburantes y la aversión a los alimentos transgénicos. (No abordo aquí la cuestión de si dichas muestras de insatisfacción están justificadas o no.) Y cuando se producen, no tiene demasiado sentido desautorizarlas diciendo que son obra de pequeñas minorías no electas y poco representativas, aunque por regla general lo sean.

El principal papel de los medios en la política moderna es obvio. Gracias a ellos, la opinión pública es más poderosa que nunca, lo que explica el ininterrumpido crecimiento de las profesiones que se especializan en influir en ella. Lo que no suele comprenderse con la misma claridad es el crucial vínculo que une la política mediática y la acción directa, esto es, la acción que emana desde abajo e influye directamente en los más altos mandatarios encargados de adoptar decisiones, saltándose los mecanismos intermedios con que cuentan los gobiernos representativos oficiales. Esto se hace más patente allí donde no existen dichos mecanismos intermedios, por ejemplo, en los asuntos transnacionales. Todos estamos familiarizados con el llamado «efecto CNN» —la percepción, de gran potencia política, pero por completo carente de estructura, de que «es preciso hacer algo»— que surge al hilo de las imágenes de espantosa atrocidad que ofrece la televisión —ya sea en Kurdistán, en Timor o en cualquier otro lugar—, y que ha tenido la fuerza suficiente como para generar, a modo de respuesta, una acción más o menos improvisada por parte de los gobiernos. Más recientemente, las manifestaciones de Seattle y Praga han mostrado que una acción directa con un objetivo bien elegido y realizada por grupos pequeños y plenamente conscientes de la importancia de las cámaras puede ser muy eficaz, incluso contra organizaciones concebidas para resultar inmunes a los procesos políticos democráticos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Si hoy es posible leer titulares como éste: «Los dirigentes de la economía mundial tienen en cuenta las advertencias» (*International Herald Tribune*, 2 de octubre de 2000, p. 13), la causa reside, al menos en parte, en esas fotogénicas refriegas que enfrentan a grupos de radicales de pasamontañas negros con policías antidisturbios provistos de cascos y escudos, como en las batallas medievales, en los lugares de más alta cotización mediática.

Todo esto sitúa a la democracia liberal frente a lo que quizá sea su más inmediato y serio problema. En un mundo cada vez más globalizado y transnacional, los gobiernos nacionales conviven con fuerzas que ejercen cuando menos el mismo impacto que ellos en la vida cotidiana de sus ciudadanos, pero que se encuentran, en distintos grados, fuera de su

control. Y sin embargo, no tienen la opción política de claudicar ante esas fuerzas que escapan a su control, ni siquiera en caso de que lo desearan. Las declaraciones de impotencia respecto a la inveterada propensión alcista de los precios del petróleo no son prudentes porque, cuando algo va mal, los ciudadanos, incluidos los ejecutivos de las empresas, se muestran convencidos, no sin fundamento, de que el gobierno puede y debe hacer algo al respecto, y esto incluso en países como Italia, donde no se espera nada, o muy poco, del estado, o Estados Unidos, donde amplios sectores del electorado no creen en el estado. Esa es, después de todo, la función del gobierno.

Pero, ¿qué pueden y deben hacer los gobiernos? Más que en el pasado, éstos se hallan sometidos a la incesante presión de una opinión pública sujeta a un continuo seguimiento, y también son más sensibles a ella. Esto restringe sus opciones. Ahora bien, los gobiernos no pueden dejar de gobernar. De hecho, las exhortaciones de sus expertos en relaciones públicas les indican que ha de *vérselos* gobernando constantemente, y esto, como sabemos por la historia británica de finales del siglo xx, multiplica los gestos, las declaraciones y, a veces, las legislaciones innecesarias. No obstante, incluso al margen del imperativo de sus relaciones públicas, y contrariamente a la idea de quienes sueñan con un mundo entera (y benéficamente) gobernado por la «mano invisible» de Adam Smith, hoy las autoridades públicas se enfrentan constantemente al hecho de tener que tomar, sobre los intereses comunes, unas decisiones cuyo carácter es tanto técnico como político. Y aquí los votos democráticos (o las preferencias de los consumidores en el mercado) no

sirven en modo alguno de guía. En el mejor de los casos constituyen un acelerador o un freno. Las consecuencias medioambientales del ilimitado crecimiento del tráfico motorizado y las mejores estrategias para enfrentarse a ellas no pueden descubrirse simplemente por medio de referendos. Además, esas estrategias podrían resultar impopulares. Y en una democracia, es poco prudente decirle al electorado cosas que éste no quiere oír. ¿Cómo puede organizarse racionalmente la economía del estado, si los gobiernos están persuadidos de que toda propuesta que aumente los impuestos de cualquier artículo o servicio equivale a un suicidio electoral, si las campañas electorales son, por consiguiente, otros tantos certámenes de fraude tributario, y si los presupuestos del gobierno son un ejercicio de ocultación al fisco? En resumen, la «voluntad del pueblo», sea cual sea la forma en que ésta se exprese, no puede determinar de hecho las tareas específicas del gobierno. Como ya observaran esos olvidados teóricos de la democracia que son Sydney y Beatrice Webb en relación con los sindicatos, el pueblo no es capaz de juzgar los proyectos, sino los resultados. Se le da inconmensurablemente mejor votar en contra que a favor. Y cuando en efecto logra uno de sus más significados triunfos negativos, como el de acabar con cincuenta años de regímenes de posguerra corruptos en Italia y Japón, es incapaz de proporcionar por sí mismo una alternativa. Veremos si puede hacer lo mismo en Serbia o no.

Y sin embargo, se gobierna para el pueblo. Los efectos del gobierno han de juzgarse en función de lo que éste haga al pueblo. Por muy desinformada, ignorante o incluso estúpida que se presente la «voluntad del pueblo», por inadecuados

que sean los métodos para descubrir en qué consiste, esa voluntad es indispensable. ¿De qué otro modo podríamos valorar la forma en que las soluciones técnico-políticas que damos a los problemas que preocupan a la humanidad —por muy especializadas y técnicamente satisfactorias que resulten en otros aspectos— influyen en las vidas de los seres humanos de carne y hueso? Los sistemas soviéticos fracasaron porque no existía una comunicación de doble sentido entre quienes tomaban las decisiones «en interés del pueblo» y aquellos sobre quienes se imponían tales decisiones. En los últimos veinte años, la globalización del *laissez-faire* ha cometido el mismo error. Como tal, esa globalización ha sido obra del gobierno, que ha eliminado sistemáticamente todos los obstáculos que se le oponían, siguiendo el consejo de los más autorizados especialistas en técnicas económicas. Tras pasar veinte años sin prestar atención a las consecuencias sociales y humanas de un capitalismo global carente de trabas, el presidente del Banco Mundial ha llegado a la conclusión de que, en la mayoría de la población del planeta, la palabra «globalización» suscita más «temor e inseguridad» que «oportunidad e inclusión» (*International Herald Tribune*, 2 de octubre de 2000, p. 13). Incluso Alan Greenspan y Larry Summers (ex presidente de la Reserva Federal estadounidense y ex ministro de Hacienda de ese mismo país, respectivamente) se muestran de acuerdo en que «el sentimiento de antipatía que despierta la globalización se halla tan profundamente arraigado» que tanto el abandono de las políticas orientadas por el mercado como la recuperación del proteccionismo se han convertido en «posibilidades reales».

Y sin embargo, nadie puede negar que, en el marco de la democracia liberal, una de las cosas que añaden dificultad a la gobernanza es el hecho de tener que escuchar la voluntad del pueblo. Hoy, los gobiernos casi nunca cuentan con la solución ideal. Esa solución es la que antiguamente daba fundamento a la confianza que depositábamos en los profesionales de la medicina y en los pilotos de aviación, la misma en la que ambos especialistas tratan aún de afianzarse —en un mundo en el que están aumentando los recelos—, a saber, la convicción popular de que tanto nosotros como ellos compartimos los mismos intereses. No les indicábamos de qué modo tenían que servirnos, dado que, al no ser expertos no podíamos hacerlo, pero poníamos nuestra confianza en ellos mientras algo no saliera mal. Pocos gobiernos (en tanto que instancias distintas de los regímenes políticos) disfrutan hoy de esta fundamental confianza *a priori*. En las democracias liberales, esto es, en las multipartitas, es raro que los gobiernos vengan a representar una mayoría efectiva de los votos, y menos aún del electorado. (Desde 1931 no ha habido en el Reino Unido ningún partido que haya obtenido por sí sólo más del 50 por 100 de los votos; y tampoco ha habido ningún gobierno, desde el de coalición que surgió en los años de la guerra, que haya representado a una clara mayoría.) Las viejas escuelas de democracia y sus principales motores, es decir, los partidos y las organizaciones de masas que un día proporcionaron a «sus» gobiernos precisamente ese tipo de confianza *a priori* al ofrecerles su constante apoyo, se han desmoronado. En el clima creado por los omnipresentes y todopoderosos medios de comunicación, los pasajeros del vehículo democrático, empeña-

dos en dar consejos al conductor al pretender hallarse en posesión de una pericia capaz de rivalizar con la del gobierno en su labor, se dedican a comentar constantemente la actuación de éste.

En tales circunstancias, la solución más conveniente para los gobiernos democráticos, y a veces la única, consiste en mantener el mayor número de decisiones posible al margen de la publicidad y de la política, o en eludir al menos el proceso que conlleva el gobierno representativo, lo que implica prescindir tanto del electorado final como de las actividades de las asambleas y las instancias elegidas por él. (Estados Unidos —que constituye, hemos de admitirlo, un caso extremo— sólo funciona como un estado provisto de una política gubernamental coherente debido a que, en ocasiones, los presidentes han encontrado formas de sortear los extraordinarios enredos que genera el Congreso elegido democráticamente.) Incluso en Gran Bretaña, la impresionante centralización de un poder investido con una capacidad de toma de decisiones que ya era sólida de por sí ha ido de la mano del menoscabo de la Cámara de los Comunes y de una transferencia generalizada de funciones a instituciones no emanadas de las urnas, tanto públicas como privadas, y todo ello con independencia de que los gobiernos fuesen conservadores o laboristas. Esto hará que una buena cantidad de cuestiones políticas se negocien y se decidan entre bastidores, lo que aumentará la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno y empeorará la opinión que tienen de los políticos. Los gobiernos librarán una constante guerra de guerrillas contra la coalición compuesta por una bien organizada minoría decidida a hacer campaña en favor de los intereses económicos y los medios de comunicación. Dichos medios tenderán cada vez más a considerar que su función política consiste en publicar lo que los gobiernos preferirían mantener oculto, pese a que al mismo tiempo confíen —y esa es la ironía de una sociedad basada en un ilimitado flujo de información y en el ocio— en los propagandistas de las instituciones que debieran criticar para dar contenido a sus pantallas y a sus páginas.

Por consiguiente, ¿cuál es el futuro de la democracia liberal en esta situación? Sobre el papel no parece demasiado sombrío. Salvo por la teocracia islámica, no existen ya, en principio, movimientos políticos pujantes que rivalicen con esta forma de gobierno, y no es probable que surja ninguno en el inmediato futuro. La segunda mitad del siglo xx fue la edad de oro de las dictaduras militares, las cuales constituyeron, con gran diferencia, un peligro mucho mayor que el comunismo para los regímenes occidentales y los sistemas electorales independientes de las antiguas colonias. El siglo xxi no parece ser tan favorable para esas dictaduras —ninguno de los numerosos estados pertenecientes a la antigua esfera comunista ha optado por continuar en esa senda—, y en cualquier caso, la práctica totalidad de dichos regímenes carecen de una convicción antidemocrática plenamente resuelta, y se limitan a pretender ser los salvadores de la constitución hasta el día (no especificado) en que se recupere la gobernanza civil. Aunque esto tampoco significa que estemos asistiendo al fin de los gobiernos impuestos mediante efectivos provistos de tanques apostados en las esquinas de las calles, en especial en las numerosas regiones en que subsiste la pobreza y el descontento social.

Además, fuera como fuese la situación anterior a los seísmos económicos de los años 1997 y 1998, hoy está claro que no va a cuajar la utopía de un mercado global del *laissez-faire* en el que vayan a disolverse los estados. Por tanto, la mayor parte de la población mundial, y ciertamente las personas que habitan en regímenes liberal demócratas dignos de tal nombre, seguirá viviendo en estados operativamente eficaces, pese a que en algunas desdichadas regiones el poder del estado y de la administración haya quedado prácticamente desintegrado. La mayoría de los países pertenecientes a las Naciones Unidas conseguirán sacar el mejor partido posible de un sistema político recién reformado, o (como sucede en grandes zonas de América Latina) de un sistema con el que llevan familiarizados mucho tiempo, aunque de forma intermitente. Este sistema no conocerá el éxito con excesiva frecuencia, pero es posible que a veces lo alcance. Por consiguiente, la política permanecerá. Y dado que seguiremos viviendo en un mundo populista en el que los gobiernos deben tener en cuenta al «pueblo» y en el que el pueblo no puede vivir sin gobierno, las elecciones democráticas continuarán produciéndose. Hoy se reconoce de forma casi universal que dichas elecciones son el factor que determina la legitimidad y, por cierto, el que proporciona a los gobiernos una forma práctica de consultar al «pueblo» sin obligarles a comprometerse necesariamente con nada que tenga un carácter muy concreto.

En resumen, nos enfrentaremos a los problemas del siglo XXI con un conjunto de mecanismos políticos radicalmente inadecuados para abordarlos. En efecto, dichos mecanismos se hallan circunscritos al marco definido por las

fronteras de los estados-nación, cuyo número está aumentando, y han de hacer frente a un mundo globalizado que supera el alcance de su capacidad operativa. Ni siquiera está claro hasta qué punto ha de resultar posible aplicarlos en el interior de un territorio vasto y heterogéneo que de hecho posee un marco político común, como la Unión Europea. Han de encarar y competir con una economía mundial que opera eficazmente a través de entidades muy diferentes en cuyo seno las consideraciones de legitimidad política y de interés común no tienen aplicación: las compañías transnacionales. Estas empresas eluden la política todo cuanto pueden, que es mucho. Y sobre todo, nuestros mecanismos políticos arrostran los fundamentales problemas que plantea el futuro del mundo en una época en que el impacto de la acción humana sobre la naturaleza y el globo ha pasado a convertirse en una fuerza de proporciones geológicas. Su solución, o su alivio, exigirá —debe exigir— medidas para las que, casi con toda certeza, no será posible encontrar apoyo mediante el recuento de votos o la estimación de las preferencias de los consumidores. A largo plazo, esta perspectiva resulta tan poco alentadora para las expectativas de la democracia como para las del globo.

En pocas palabras, encaramos el tercer milenio como aquel irlandés del cuento a quien, tras preguntársele el modo de llegar a Ballynahinch, se le oyó decir, no sin previa cavilación: «Si yo fuera usted, no partiría de aquí».

Pero de aquí es de donde hemos de partir.

7

LA DIFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA*

En el momento presente nos hallamos embarcados en un proceso por el que los estados poderosos, según pretenden, se han lanzado a una reorganización planificada del mundo. Las guerras que se libran en Iraq y Afganistán no son sino uno de los elementos del esfuerzo, supuestamente universal, destinado a generar orden en el mundo mediante «la difusión de la democracia». Esta idea no es simplemente quijotesca; es peligrosa. La retórica que rodea a esta cruzada implica que el sistema resulta aplicable en su forma (occidental) estándar, que puede alcanzar el éxito en todas partes, que es capaz de poner remedio a los dilemas transnacionales contemporáneos, y que tiene en su mano traer la paz, en vez de sembrar el desorden. Lo cierto es que no puede hacerlo.

La democracia es propiamente popular. En el año 1647, los *levellers*** ingleses propagaron la vigorosa idea de que «todo gobierno se asienta en el libre consentimiento del pueblo». Se proponían extender la capacidad de voto a todos los ciu-

* «Spreading Democracy», *Foreign Policy*, septiembre-octubre de 2004, pp. 40-41; traducción castellana de Tomás Fernández y Beatriz Eguibar.

** Se conoce con el nombre de *levellers* (es decir, «niveladores», por ser partidarios de la igualdad de derechos) a los líderes de una coalición social reunida bajo la bandera de los *Agreements of the People* (o «Acuerdos del pueblo»). La base de esos «Acuerdos» consistía en reflejar en un documento escrito los derechos y las libertades fundamentales de los ingleses, así como las características del tejido institucional democrático que habría de permitir su conservación. (*N. de los t.*)

dadanos. Desde luego, el sufragio universal no garantiza ningún resultado político en particular, y las elecciones no pueden asegurar siquiera su propia perpetuación —da fe de ello la República de Weimar—. Del mismo modo, es poco probable que la democracia electoral produzca resultados que convengan a los poderes hegemónicos o imperiales. (Si la guerra de Iraq hubiera dependido del consentimiento libremente expresado de «la comunidad mundial», no habría tenido lugar.) Sin embargo, estas incertidumbres no disminuyen el atractivo de la democracia electoral.

Aparte de la popularidad de la democracia, hay otros factores que explican la peligrosa e ilusoria creencia de que, en efecto, los ejércitos extranjeros pudieran materializar su propagación. La globalización sugiere que la evolución de los asuntos humanos se orienta en la dirección de un modelo universal. Si los surtidores de gasolina, los iPods, y los fanáticos de los ordenadores son iguales en todo el mundo, ¿por qué no habrían de serlo las instituciones políticas? Este punto de vista minusvalora la complejidad del mundo. El hecho de que en muchas partes del planeta se haya caído de modo tan manifiesto, una y otra vez, en el derramamiento de sangre y en la anarquía ha contribuido igualmente a que la idea de difundir un orden nuevo resultara más atractiva. Lo ocurrido en los Balcanes parece haber mostrado que en las zonas en que se producen desórdenes y catástrofes humanitarias se requiere la intervención, militar en caso necesario, de estados fuertes y estables. En ausencia de una gobernación internacional efectiva, algunos partidarios del humanitarismo siguen dispuestos a apoyar un orden mundial impuesto por el poderío de Estados Unidos. No obstante, uno

debería albergar siempre algún recelo cuando las potencias militares pretenden estar haciendo, mediante la derrota y la ocupación de otros estados más débiles, un favor a sus víctimas y al mundo.

Con todo, es posible que haya otro factor más importante: Estados Unidos ha contado, como elemento derivado de sus orígenes revolucionarios, con la necesaria mezcla de megalomanía y mesianismo. Hoy es indiscutible la supremacía técnica y militar de Estados Unidos, que no sólo están convencidos de la superioridad de su sistema social, sino que, desde el año 1989, no cuentan ya con nadie que venga a recordarles —advertencia que no faltó ni a los mayores imperios conquistadores— que su poder material conoce límites. Al igual que el presidente Woodrow Wilson (que en su día protagonizó un espectacular fracaso internacional),* los ideólogos de hoy ven en Estados Unidos una sociedad modélica en acción: una mezcla de leyes, de libertades liberales, de actividad empresarial competitiva y privada, y de reñidas elecciones periódicas dirimidas mediante sufragio universal. Todo lo que se necesita es rehacer el mundo a imagen de esta «sociedad libre».

«Los estados poderosos están tratando de generalizar un sistema que incluso ellos mismos consideran inadecuado para responder a los retos actuales.»

* El autor se refiere probablemente a los célebres 14 puntos que en 1918 expuso en un programa político para lograr la paz en Europa. Wilson se trasladó al escenario bélico para tomar parte personalmente en las negociaciones. Sin embargo, en los seis meses que duraron éstas, los representantes de los países europeos combatieron y derrotaron sus criterios, y prevaleció una paz más dura que la que recomendaba el dirigente estadounidense. (*N. de los t.*)

Esta idea es un peligroso silbido en la oscuridad.* Aunque la acción de una gran potencia pueda tener consecuencias deseables desde el punto de vista moral o político, es peligroso asociarla con ambas cualidades, porque la lógica y los métodos de la acción estatal no son los de los derechos universales. Todos los estados afianzados dan prioridad a sus propios intereses. Si tienen capacidad para hacer algo, y si consideran que el fin es lo suficientemente crucial, los estados justifican los medios que les permiten concretarlo (aunque rara vez en público) —en particular si piensan que Dios está de su parte—. Tanto el imperio del bien como el imperio del mal han hecho que nuestra época regrese a la barbarie, una barbarie a la que ahora viene a contribuir la «guerra contra el terror».

La campaña para difundir la democracia no sólo amenaza la integridad de los valores universales, sino que no alcanzará el éxito. El siglo xx ha demostrado que los estados no podían ponerse simplemente a rehacer el mundo o a abreviar las transformaciones históricas. Tampoco les es dado generar con facilidad un cambio social mediante el expediente de transferir instituciones a través de las fronteras. Incluso en el marco de los estados-nación territoriales es raro que se den las condiciones para un gobierno democrático eficaz, esto es, la existencia de un estado que disfrute de legitimidad, de

* Expresión que denota un temor aprendido en las guerras de trincheras. Al igual que la superstición que atribuye mala suerte a encender de noche tres cigarrillos seguidos (el primero alerta al enemigo, el segundo le permite apuntar, y el tercero se convierte en blanco), el dicho alude a la imprudencia que supone perder la ventaja de la oscuridad y revelar la posición haciendo ruido irreflexivamente. (*N. de los t.*)

consentimiento y de capacidad para mediar en los conflictos que enfrentan a los grupos locales. Sin ese consenso, no existe un único pueblo soberano, y por consiguiente no hay legitimidad para las mayorías aritméticas. Cuando ese consenso —ya se funde en la religión, en las características étnicas, o en ambas cosas— no se da, la democracia queda en suspenso (como sucede en el caso de las instituciones democráticas de Irlanda del Norte), el estado se divide (como en Checoslovaquia), o la sociedad queda atrapada en una guerra civil permanente (como en Sri Lanka). Después de 1918, y también después de 1989, la «difusión de la democracia» no ha logrado sino el agravamiento de los conflictos étnicos y la disgregación de los estados en regiones multinacionales y multicomunales: una perspectiva desoladora.

Al margen de sus escasas posibilidades de éxito, el esfuerzo encaminado a difundir la democracia occidental estándar es también víctima de una paradoja fundamental. Ese esfuerzo ha sido concebido, en no pequeña medida, como una solución a los peligrosos problemas transnacionales de nuestros días. En la actualidad, una parte cada vez mayor de la actividad humana transcurre en ámbitos inaccesibles a la influencia de los votantes —en entidades transnacionales públicas y privadas que carecen de electorado, o que, en todo caso, no son electorados democráticos—. Y la democracia electoral no puede funcionar eficazmente fuera del espacio definido por unidades políticas como las de los estados-nación. Por consiguiente, los estados poderosos están tratando de generalizar un sistema que incluso ellos mismos consideran inadecuado para responder a los retos actuales.

Europa es prueba de ello. Un organismo como la Unión Europea (UE) ha podido transformarse en una estructura poderosa y eficaz precisamente por no contar con más electorado que el compuesto por un pequeño número (creciente, no obstante) de gobiernos asociados. La UE no llegaría a ninguna parte sin su «déficit democrático», y su Parlamento no tiene futuro, ya que no existe un «pueblo europeo», sino únicamente un conjunto de «pueblos partícipes», de los cuales, menos de la mitad se tomó la molestia de votar en las elecciones de 2004 al Parlamento europeo. «Europa» es hoy una entidad operativa, pero, a diferencia de sus estados-miembro, no cuenta con legitimidad popular ni con respaldo electoral. De este modo no resulta sorprendente que hayan surgido problemas tan pronto como el proyecto de la UE ha pasado de ser objeto de negociaciones entre gobiernos a sujeto de una campaña democrática en los estados-miembro.

El esfuerzo conducente a difundir la democracia resulta igualmente peligroso de un modo más indirecto: transmite a quienes no disfrutan de esta forma de gobierno la ilusión de que de hecho gobierna a quienes sí disponen de ella. Pero ¿los gobierna realmente? Hoy sabemos algunas de las circunstancias que rodearon la decisión *de facto* que llevó a declarar la guerra a Iraq en, al menos, dos estados de incuestionable buena fe democrática: Estados Unidos y el Reino Unido. Aparte de hacer que el engaño y la ocultación se convirtieran en complejos problemas para los gobernantes, la democracia electoral y las asambleas representativas tuvieron poco que ver con ese proceso. Las decisiones se tomaron en privado y en el seno de pequeñas camarillas, de un modo no muy distinto a lo que suele ser práctica común en países

no democráticos. Por fortuna, en el Reino Unido, la independencia de los medios de comunicación no pudo burlarse con la misma facilidad. Ahora bien, no es la democracia electoral la que garantiza necesariamente la efectiva libertad de prensa, los derechos de los ciudadanos y la independencia judicial.

8

LAS TRANSFORMACIONES DEL TERROR*

¿Ha cambiado la naturaleza del terror político en las postrimerías del siglo XX? Permítanme comenzar con el inesperado brote de violencia surgido en una isla hasta ahora pacífica, Sri Lanka, en la que una mayoría de cingaleses budistas (cuya religión e ideología es todo lo contrario que se puede ser a la violencia) convive con una minoría de tamiles emigrados desde el sur de la India hace siglos o venidos como mano de obra para las plantaciones a finales del siglo XIX. Su hinduismo tampoco es partidario de la violencia. El movimiento antiimperialista en Sri Lanka no se caracterizó ni por un elevado militantismo ni por una eficacia extraordinaria, y el país obtuvo su libertad calladamente, en realidad como subproducto de la independencia india. De hecho, en el Sri Lanka colonial se había desarrollado un partido comunista más bien pequeño, y, cosa bastante curiosa, un partido trotskista de dimensiones muy superiores, ambos encabezados por miembros cultos y agradables de la élite occidentalizada, y las dos formaciones, como buenos partidos marxistas, se opusieron al terrorismo. No hubo intento de insurrección alguno. Tras la independencia, el país siguió un plácido derrotero de socialismo moderado, cosa que resultó excelente para el bienestar y la esperanza de vida de la población. En resumen, medido con criterios asiáticos, el Sri Lanka anterior

* «Terror», 2006; traducción castellana de Tomás Fernández y Beatriz Eguibar.

a la década de 1970 era una rara isla de civismo, como Costa Rica y (antes de esa misma década) Uruguay en América Latina. Hoy se enfrenta a un baño de sangre.

Los tamiles, una minoría del 25 por 100 cuya representación en las profesiones cultas es superior a su peso demográfico, han desarrollado un comprensible resentimiento hacia el régimen cingalés que en la década de 1950 decidió sustituir el inglés por el singalés como lengua administrativa nacional. En la década de 1970, un movimiento separatista tamil, no sin el apoyo de un estado indio meridional, creó varias organizaciones armadas, precursoras de los actuales Tigres Tamiles de Liberación de la Patria Tamil,* que han venido librando lo que de hecho es una guerra civil desde mediados de la década de 1980. A sus miembros se los conoce sobre todo por contarse entre los grandes instauradores y probablemente entre los mayores activistas del terrorismo suicida, aunque, dicho sea de paso, dada su ideología laica, carece de las habituales motivaciones religiosas. Los tamiles no son lo suficientemente fuertes como para lograr la secesión, y el ejército esrilanqués** es demasiado débil para derrotarlos en el plano militar. La intransigencia de ambas partes ha mantenido la guerra a pesar de las distintas mediaciones por las que terceras partes (India, Noruega) han tratado de lograr un arreglo.

* Sus siglas inglesas son LTTE, correspondientes a Liberation Tigers of Tamil Eelam, donde Eelam significa precisamente eso, patria. (*N. de los t.*)

** Aunque no haya cuajado aún una sanción «canónica», se siguen aquí las indicaciones del libro de estilo de *El País* para los nombres relacionados con Sri Lanka. De este modo, «cingalés» se aplica a la etnia de la isla (enfrentada a la tamil), «singalés» designa su lengua, y esrilanqués denota a los ciudadanos o naturales de ese estado (que no son necesariamente cingaleses). (*N. de los t.*)

Entretanto, dos son las cosas que le han ocurrido a la mayoría de la sociedad cingalesa. Las tensiones étnico-lingüísticas generaron una fuerte reacción que adoptó la forma de una ideología nacionalista basada en el budismo y en la superioridad racial, dado que la lengua singalesa es indoeuropea (esto es, «aria»). Resulta bastante curioso que este racismo se halle presente en la tradición de la India hindú, y de hecho, tanto en Sri Lanka como en Pakistán, aún pueden encontrarse rastros del antiguo sistema de castas hindú bajo la superficie, oficialmente igualitaria. Al mismo tiempo, el JVP,* un organismo izquierdista asentado principalmente en la actividad de jóvenes cingaleses cultos que no conseguían encontrar un trabajo adecuado, así como en ideas castristas con un toque de maoísmo y una gran dosis de resentimiento hacia la vieja élite sociopolítica, organizó una importante insurrección a principios de la década de 1970. Fue sofocada con cierta dureza y un gran número de muchachos fueron enviados durante un tiempo a la cárcel. De los vestigios de esta rebelión juvenil al estilo del mayo del 68 surgió una organización terrorista militante que, acantonada principalmente en la campiña esrilanquesa, convirtió su maoísmo original en un vehemente chovinismo racista de raíz budista. En la década de 1980 organizó una campaña de asesinatos sistemáticos contra sus adversarios políticos, lo que hizo de la política una actividad de alto riesgo. (La recientemente retirada presidenta de Sri Lanka vio cómo su

* Siglas del Janatha Vimukthi Peramuna, o Frente de Liberación Popular: partido fundado en 1964, prohibido tras el intento de golpe de estado de 1971, autorizado otra vez en 1977, vetado de nuevo en 1983, y vuelto a legalizar en 1988. Es marxista y de predominio cingalés. (*N. de los t.*)

padre, ex primer ministro, y su marido, caían asesinado ante sus propios ojos, y perdió un ojo en otros atentados si milares encaminados a asesinarla a ella.) También se utiliz sistemáticamente el terror para lograr el control de las ciu dades y de los pueblos del campo. Como en el caso del mo vimiento maoísta Sendero Luminoso en el Perú de la décad de 1980, es imposible saber hasta qué punto la dominació del JVP encontró su sostén inicial en el apoyo de las masas en qué grado se vio ese respaldo alienado por el terror, e qué medida fue a su vez contrarrestado por el resentimient producido por la represión del gobierno y hasta qué punt genera escepticismo acerca de los revolucionarios. Dos co sas están claras. Que el JVP contó con un apoyo generali zado en aquellos sectores de la población trabajadora de campo cingalés de cuyos miembros cultos se nutría su cú pula dirigente, y que el JVP realizó un gran número de ma tanzas, la mayoría de ellas perpetradas por un grupo de militantes que en América Latina habrían recibido el nombre de sicarios o asesinos a sueldo. La tentativa de asalto al poder del JVP fue reprimida del mismo modo, esto es, mediante el equivalente de las «guerras sucias» latinoamericanas orientadas a la eliminación de los líderes y de los militantes rebeldes. A mediados de la década de 1990 se estimaba que habían muerto unas sesenta mil personas, víctimas de estos conflictos. Desde sus orígenes, a finales de la década de 1960, el JVP ha intervenido de manera intermitente en la política oficial de Sri Lanka.

Parece evidente que Sri Lanka es simplemente un ejemplo del crecimiento y la mutación sorprendentes que ha experimentado la violencia política en el mundo de finales del

siglo xx. La pregunta «¿por qué?» es excesivamente amplia para este ensayo, tanto más cuanto que resulta difícil desligarla del incremento general del nivel de violencia o acción directa que las comunidades occidentales han llegado a aceptar socialmente, tanto en el plano mediático como en el de la realidad. Esto se ha producido tras un largo período en el que se ha asistido, en la mayoría de esas sociedades, al arraigo de la expectativa de que la civilización debería traer consigo el declive permanente de la violencia.

Sería tentador decir que la violencia social en general y la violencia política no tienen nada que ver la una con la otra, dado que una parte de la violencia política de la peor clase puede producirse en países dotados de una tradición política y social notablemente no violenta, como Sri Lanka o Uruguay. No obstante, no es posible mantenerlas separadas en los países de tradición liberal, aunque sólo sea porque dichos países son precisamente aquellos en los que la violencia política no oficial ha adquirido mayor relieve en el último tercio del siglo xx, y donde, en consecuencia, lo mismo ha sucedido con la violencia estatal de signo contrario, de intensidad habitualmente superior. Mientras conservan su capacidad operativa, los países dictatoriales o autoritarios dejan poco margen de maniobra a esta violencia política extraoficial, del mismo modo que apenas dejan espacio alguno a la política extraoficial no violenta.

El aumento de la violencia en general forma parte del proceso de reversión a la barbarie que ha venido fortaleciéndose en el mundo desde la primera guerra mundial, y que he examinado en otro lugar. Su progreso resulta particularmente sorprendente en los países provistos de estados sóli-

dos y estables, así como de instituciones políticas (en teoría) liberales, en los que el discurso público y las instituciones políticas no distinguen más que entre dos absolutos que se excluyen mutuamente: la «violencia» y la «no violencia». Esta ha sido una forma más de sentar la legitimidad del monopolio nacional que el estado tiene de la fuerza coercitiva, lo que ha venido íntimamente unido al desarme total de la población civil registrado en los estados desarrollados del siglo XIX, excepto en Estados Unidos, que por consiguiente han tolerado siempre un mayor grado de violencia en la práctica, aunque no en teoría. Desde finales de la década de 1960, los estados han perdido una parte de ese monopolio del poder y los recursos, y una porción aún mayor de la percepción de legitimidad que inducía a los ciudadanos a acatar la ley. Por sí solo, esto explica buena parte del aumento de la violencia.

La retórica liberal ha sido siempre incapaz de reconocer que ninguna sociedad funciona sin *cierta* violencia en la política —aunque sólo sea en la forma cuasi simbólica de los piquetes de huelguistas o las manifestaciones de masas—, y que la violencia tiene grados y reglas, como es de dominio público en las sociedades en las que forma parte de la urdimbre de las relaciones sociales y como constantemente trata de recordar la Cruz Roja Internacional a los embrutecidos beligerantes del siglo XXI. Sin embargo, cuando las sociedades o los grupos sociales no acostumbrados a un alto grado de violencia social se ven en la tesitura de practicarla, o cuando en las sociedades tradicionalmente violentas se descomponen las reglas normales, los límites establecidos sobre el uso o el grado de la violencia pueden saltar. Por ejemplo, tengo la impresión de que las tradicionales rebeliones campesinas, teniendo en cuenta la brutalidad general de la vida y la conducta rurales, no eran habitualmente demasiado sanguinarias —por lo común menos que su represión—. Cuando dichos levantamientos caían en la masacre o en la atrocidad, la violencia solía ir dirigida contra personas o categorías de personas concretas y contra propiedades —por ejemplo las casas de la pequeña aristocracia—, mientras que, a la inversa, otras gentes quedaban específicamente al margen debido a que gozaban de buena reputación. Los actos violentos no eran arbitrarios, sino prescritos, casi podríamos decir, por el ritual de la ocasión. No fue la Revolución de 1917, sino la guerra civil rusa la que extendió las carnicerías a gran escala a la campiña rusa. Ahora bien, cuando desaparecen los frenos de la conducta consuetudinaria, los resultados pueden ser aterradores. Una de las razones de que los narcotraficantes colombianos hayan tenido tanto éxito en Estados Unidos estriba, a mi entender, en que, en la pugna con sus rivales, han dejado de aceptar la acostumbrada convención machista de que no se debe matar a las mujeres y a los hijos de los adversarios.

Esta degeneración patológica en violencia política afecta tanto a los insurrectos como a las fuerzas estatales. Se ve favorecida simultáneamente por la creciente anomia que preside la vida de los barrios urbanos pobres, en especial entre los jóvenes, una anomia que refuerzan tanto la difusión de la cultura de las drogas como la posesión de armas personales. Al mismo tiempo, el declive de los antiguos ejércitos integrados por reclutas obligados a prestar el servicio militar, y el surgimiento de una soldadesca profesional a tiempo completo —y particularmente la aparición de fuerzas de élite

especiales como las SAS*—, disipan, en unos hombres que en esencia siguen siendo civiles, toda inhibición del *esprit de corps* que se les haya podido inculcar como representantes estatales con dedicación exclusiva al uso de la fuerza. Entretanto se ha producido una abolición virtual de los límites convencionales de cuanto es posible mostrar y describir en los medios de comunicación, cada vez más omnipresentes y proclives a englobarlo todo. La visión, la audición y la descripción de la violencia en sus formas extremas es parte de la vida cotidiana, y en consecuencia, los controles sociales que gravitan sobre su práctica quedan disminuidos. En la Rusia soviética —o al menos en las ciudades en que había datos criminológicos adecuados— la proporción de homicidios cometidos bajo la influencia del alcohol se situaba entre el 80 y el 85 por 100 del total. Hoy ya no necesitamos este tipo de sustancias que disipan las inhibiciones.

Sin embargo, existe una fuente de violencia ilimitada aún más peligrosa. Me refiero a la convicción ideológica imperante en los conflictos, tanto internacionales como internos, desde el año 1914: la de que la propia causa es tan justa y la del adversario tan odiosa que la utilización de todos los medios es no sólo legítima, sino *necesaria*, para alcanzar la victoria o evitar la derrota.

Esto significa que tanto los estados como los insurrectos tienen la percepción de poseer una justificación moral para la barbarie. En la década de 1980, se observó que los jóvenes militantes de Sendero Luminoso, en Perú, estaban plenamente dispuestos a matar campesinos a montones con la

* Special Air Service, Fuerzas aéreas especiales de Gran Bretaña. (*N. de los t.*)

conciencia perfectamente tranquila: al fin y al cabo no estaban actuando como individuos, los cuales pueden albergar sentimientos sobre el particular, sino como soldados de la causa. Tampoco los oficiales del ejército o la armada que instruían a los reclutas, sobre los cadáveres de los prisioneros políticos, en las técnicas de tortura eran necesariamente brutos y sádicos en su vida privada. Esta circunstancia —tal como sucede en el caso de los miembros de las SS, a quienes de hecho se castigaba si cometían un homicidio involuntario en calidad de individuos particulares, aunque al mismo tiempo se les entrenara a perpetrar con toda calma asesinatos en masa— hace que sus actividades resulten más reprensibles, no menos. El ascenso de un colosal terror a lo largo del último siglo no es reflejo de «la banalidad del mal», sino de la sustitución de los conceptos morales por imperativos superiores. No obstante, al menos al principio, existe la posibilidad de reconocer el carácter inmoral de semejante conducta, como sucedió en los regímenes militares de América Latina en la época en que podía obligarse a *todos* los oficiales argentinos de una unidad a participar en actos de tortura a fin de que recayera sobre ellos, en conjunto, lo que de este modo quedaba admitido como una infamia compartida. Es de temer que en el siglo XXI la aceptación de la tortura haya quedado convertida en algo demasiado rutinario como para dar pie a este tipo de gestos.

El crecimiento de la barbarie ha sido constante pero desigual. Alcanzó un máximo de inhumanidad entre 1914 y finales de la década de 1940, en la época de las dos guerras mundiales, de sus secuelas revolucionarias, de Hitler y de Stalin. La época de la guerra fría trajo consigo una marcada mejoría

en el Primer y el Segundo mundos, esto es, en los países capitalistas desarrollados y en la región soviética, pero no en el Tercer Mundo. Esto no significa que la barbarie retrocediera de hecho. En Occidente, esta época (*c.* 1960-1985) fue testigo del aumento de los torturadores provistos de adiestramiento oficial y de una oleada de regímenes militares, carente de todo precedente histórico, que en América Latina y el Mediterráneo se dedicaron a practicar la «guerra sucia» contra sus ciudadanos.

Con todo, muchos esperaban que después del gran cambio de 1989, la bruma de las guerras religiosas que había impregnado el siglo XX se dispersaría, y con ella una de las mayores fuentes de barbarie. Por desgracia no sucedió así. Si, por un lado, la desmedida magnitud del sufrimiento humano creció de forma espectacular en la década de 1990, por otro, las guerras religiosas alimentadas por ideologías laicas se vieron reforzadas, o sustituidas, por la reaparición de varias modalidades de fundamentalismo religioso propensas a desencadenar cruzadas y contracruzadas.

Dejando a un lado el derramamiento de sangre y la destrucción causada por las guerras entre estados, o promovidas por estados (por ejemplo: en Vietnam, en las confrontaciones indirectas de las superpotencias registradas durante la década de 1970 en África y Afganistán, o en las guerras entre India y Pakistán e Iraq e Irán), ha habido tres brotes principales de violencia y de contraviolencia política desde la década de 1960. El primero de ellos se produjo con la reactivación de lo que habría sido más correcto denominar «neoblanquismo» a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, a saber, el intento por parte de grupos de élite, por lo general peque-

ños y endogámicos, de derrocar regímenes o de alcanzar los objetivos del nacionalismo separatista mediante la acción armada. Fue un proceso en gran medida circunscrito a la Europa occidental, donde estos grupos, procedentes principalmente de las clases medias y por lo general carentes de respaldo popular al margen de las universidades (excepto en Irlanda del Norte), dependían en buena medida de la realización de acciones terroristas capaces de atraer la atención de los medios (la Fracción del Ejército Rojo en la Alemania Federal), aunque también de golpes a objetivos bien elegidos y capaces de desestabilizar la alta política de sus países, como el asesinato del previsible sucesor del general Franco en 1973 (por ETA) y el secuestro y posterior asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro en 1978 (por las Brigadas Rojas). En América Latina, estos grupos trataron fundamentalmente de poner en marcha las actividades de la guerrilla y una serie de operaciones armadas a cargo de unidades de mayor tamaño, habitualmente en regiones apartadas, pero en algunos casos (Venezuela, Uruguay) también en ciudades. Algunas de esas operaciones fueron bastante serias —en los tres años del levantamiento Montonero de Argentina las fuerzas en conflicto, tanto regulares como irregulares, sufrieron 1.642 bajas (entre muertos y heridos)—.[1] Las limitaciones de estos grupos quedaron particularmente de manifiesto en la guerra de guerrillas rural, para la que resulta esencial un importante grado de respaldo popular, no ya para el éxito, sino para la supervivencia. Cuando algunos elementos ajenos

1. Juan Carlos Marín, *Los hechos armados. Argentina 1973-1976*, Buenos Aires, 1996, p. 106, cuadro 8.

al entorno inmediato intentaron establecer movimientos guerrilleros basados en el modelo cubano, la experiencia se saldó con fracasos espectaculares en toda Sudamérica, salvo en Colombia, donde grandes regiones del país habían escapado al control de la administración y de las fuerzas del gobierno central.

El segundo brote de violencia, que no se haría notar hasta finales de la década de 1980 y que se extendió enormemente debido a la desorganización civil y al derrumbamiento de varios estados en la década de 1990, es de raíz primariamente étnica y confesional. África, las zonas occidentales del islam, el sur y el sudeste de Asia, así como el sudeste de Europa, fueron las principales regiones afectadas. América Latina permaneció inmune a los conflictos étnicos y religiosos, el este de Asia y la Federación Rusa (a excepción de Chechenia) apenas se vieron implicados, mientras que la Unión Europea sólo se vio involucrada por el hecho de ser escenario de una xenofobia creciente, aunque sin derramamiento de sangre. En otros lugares, la ola de violencia política produjo matanzas de dimensiones desconocidas desde la segunda guerra mundial, y constituyó el episodio que mayores semejanzas haya presentado en los últimos tiempos con una reactivación del genocidio sistemático. A diferencia de los neoblanquistas europeos, que por lo general carecían del respaldo popular de las masas, los grupos activistas de esta época (Al Fatah, Hamás, la Yihad Islámica palestina, Hizbolá, los Tigres Tamiles, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, etc.) lograron contar con el apoyo general de sus poblaciones, y encontrar en ellas una cantera de reclutamiento permanente. Por consiguiente, los actos individuales de terror no revistieron para

este tipo de movimientos una importancia capital, excepto como única respuesta posible al abrumador poderío militar del estado ocupante (como en Palestina), o en todo caso, en las guerras civiles, como elemento con el que compensar el armamento inmensamente superior del adversario (como en Sri Lanka). Aquí iba a revelarse el formidable y extraordinario carácter de una de las principales novedades de la época: el terrorista suicida. Esta práctica —nacida como consecuencia indirecta de la revolución iraní de 1979, la cual trajo aparejada la potente ideología del chiismo, con su visión idealizada del martirio— fue utilizada por primera vez en el año 1983 por Hizbolá en el Líbano, con efectos decisivos, contra los estadounidenses. Su eficacia quedó tan de manifiesto que fue adoptada por los Tigres Tamiles en 1987, por la palestina Hamás en 1993, y por Al Qaeda y otras formaciones islámicas ultras en Cachemira y Chechenia entre los años 1998 y 2000.[2]

La otra, y muy sorprendente, manifestación de terrorismo individual o de pequeños grupos en esta época fue la notable reactivación del asesinato político. Si el período comprendido entre 1881 y 1914 fue la primera edad de oro de los homicidios políticos al más alto nivel, los años que van de mediados de la década de 1970 a mediados de la de 1990 se convirtieron en la segunda: así desaparecieron Sadat en Egipto, Rabin en Israel, Rajiv e Indira Gandhi en la India y un conjunto de dirigentes en Sri Lanka, pero también el aparente sucesor de Franco en España, y los primeros ministros

2. Sigo aquí el argumento de Diego Gambetta, basándome en el material que ese mismo autor expone, como compilador, en *Making Sense of Suicide Missions*, Oxford, 2005.

de Italia y Suecia —aunque en el caso de Suecia el elemento político resulte dudoso—. Las consecuencias de estas acciones no fueron revolucionarias, pese a que en ocasiones tuvieran claros efectos políticos, como en Israel, Italia y tal vez España.

No obstante, desde entonces, el alcance universal de la televisión ha hecho que las acciones dirigidas a causar el máximo impacto mediático sean políticamente más efectivas que las dirigidas contra las personas encargadas de tomar decisiones. A fin de cuentas, fueron acciones de este tipo las que pusieron fin en la década de 1980 a la presencia militar formal de Estados Unidos en el Líbano, y lo mismo ocurrió en Somalia en la década de 1990 y, de hecho, en Arabia Saudí después del año 2001. Uno de los lamentables signos del avance de la barbarie es que los terroristas hayan descubierto que, con tal de contar con la cobertura de las pantallas del mundo, el asesinato masivo de unos hombres y mujeres que en otras condiciones resultarían insignificantes, asumiendo que sea de proporciones suficientes, capta la atención de los titulares mejor que cualquiera de los más célebres o simbólicos objetivos contra los que pudieran dirigir sus bombas.

En la tercera fase, que parece ser la predominante en el inicio del presente siglo, la violencia política ha adquirido un carácter de sistemática globalidad, como consecuencia tanto de las políticas estadounidenses aplicadas por el segundo presidente Bush como del establecimiento, quizá por primera vez desde el anarquismo de finales del siglo XIX, de un movimiento terrorista que deliberadamente opera en un plano transnacional. En este caso, el apoyo de las masas populares vuelve a presentar un carácter irrelevante. En su origen parece que Al Qaeda era una organización estructurada integrada por una élite, pero funcionaba como un movimiento descentralizado cuyas células, pequeñas y aisladas, habían sido concebidas para actuar sin respaldo popular ni tipo alguno de sostén. Al Qaeda tampoco precisa de un territorio base. De este modo, ella misma, o una imprecisa red de células islamistas inspiradas por su organización, ha sobrevivido a la pérdida de su cuartel general en Afganistán y a la marginación del liderazgo de Osama Bin Laden. Lo característico de este período es que las guerras civiles, u otra clase de conflictos, imposibles de encajar en el panorama general, como los incesantes enfrentamientos en Sri Lanka, Nepal y Colombia, o los disturbios en los estados fallidos, o próximos a fracasar, de África, no han suscitado en Occidente más que un interés intermitente.

Dos son las cosas que distinguen a estos nuevos movimientos. Están integrados por pequeñas minorías, pese a que tales minorías disfruten de una cierta simpatía pasiva por parte de las masas en cuyo nombre dicen actuar, y su *modus operandi* característico ha venido siendo el de la acción en pequeños grupos. Se dice que las llamadas «unidades de servicio activo» del IRA Provisional no estuvieron nunca compuestas por más de doscientos o trescientos individuos, y dudo que las Brigadas Rojas de Italia o la ETA vasca contasen con más efectivos. En la época en que se hallaba radicado en Afganistán, es probable que el más formidable de los movimientos terroristas internacionales, el de Al Qaeda, no dispusiera de más de cuatro mil individuos.[3] Su segunda carac-

3. Gambetta, *op. cit.*, p. 260.

terística estriba en que (con raras excepciones, como la de Irlanda del Norte) sus militantes «son, por término medio, más cultos y proceden de un entorno social más elevado que el de otros miembros de la comunidad a la que pertenecen».[4] Incluso en Palestina, donde representan un corte transversal de la población de los territorios ocupados, y entre cuyas filas cabe incluir un elevado porcentaje de activistas procedentes de campos de refugiados, el 57 por 100 de los terroristas suicidas poseen una cierta educación, por encima del nivel propio de los institutos de enseñanza secundaria, lo que contrasta con la representación de este grado de formación en la población total, que es del 15 por 100 entre las personas de edades comparables.[5]

Pese a ser muy pequeños, estos grupos han ejercido una presión lo suficientemente formidable como para que los gobiernos movilicen contra ellos fuerzas de dimensiones relativa, o incluso absolutamente, enormes. Sin embargo, aquí se observa una interesante divergencia entre el Primer y el Tercer Mundo (mientras duró, el Segundo Mundo de los regímenes comunistas, pese a hallarse al borde del desplome, permaneció enteramente inmune a tales movimientos, hasta que se vino efectivamente abajo). En Europa, en conjunto, al menos durante los dos primeros períodos que aquí estudiamos, se opuso a la nueva violencia política una fuerza limitada que no causó fisuras dignas de mención en los gobiernos constitucionales, aunque se produjeran algunos momentos de histeria y unos cuantos abusos de poder graves, en especial por parte de la policía de los estados y de las fuerzas armadas, bien formales o informales. ¿Se debió esto a que los movimientos europeos no supusieron una amenaza clave para los regímenes nacionales? Es cierto que no representaron, y siguen sin representar, tal amenaza, aunque de hecho los movimientos nacionalistas separatistas de Irlanda del Norte y el País Vasco hayan estado más cerca de alcanzar sus fines políticos con la ayuda de la presión armada del IRA y de ETA. También es probablemente cierto que la policía y los servicios secretos europeos eran y son lo suficientemente eficientes para haberse infiltrado en muchos de esos movimientos, principalmente en el IRA, y es probable que también en las Brigadas Rojas italianas. No obstante, resulta significativo que, a pesar de algunas implacables actividades contraterroristas realizadas por «entidades oficiales desconocidas» tanto en Irlanda como en España, no se hayan producido fenómenos de «guerra sucia» de la magnitud, y con el grado de tortura sistemática y de terror, que encontramos en América Latina. En esta zona, el grado de violencia del contraterrorismo excedió con mucho el de la violencia política de los insurrectos, incluso en los casos en que éstos eran proclives a cometer atrocidades, como los de Sendero en Perú.

En esencia, estas infames «guerras sucias» iban dirigidas contra grupos de este tipo, y con frecuencia su realización corría a cargo de pequeñas fuerzas integradas por especialistas profesionales equivalentes a los de la minoría terrorista. De este modo, en América Latina el objeto de los regímenes torturadores, en la medida en que no se tratara de una degeneración patológica de la política, no estribaba por

4. Gambetta, *op. cit.*, p. 270.
5. Gambetta, *op. cit.*, pp. 327-328.

lo común en disuadir a la gente e impedir que tomase parte en actividades subversivas, sino, de forma más concreta, en obtener información de los activistas en relación con las operaciones de sus grupos. Tampoco fue la disuasión el objetivo de los escuadrones de la muerte. La meta era más bien eliminar a los individuos a quienes se había dado en considerar culpables sin demoras legales ni riesgo de absolución. Por lo general, el terror dirigido contra poblaciones enteras juzgadas disidentes es de por sí notablemente brutal, como ha sido el caso de la segregación racial en Sudáfrica y en Palestina, pero su aplicación es aún más tosca. El número de personas muertas en Palestina antes de la segunda Intifada fue casi con toda certeza inferior a la cifra de «desaparecidos» en el Chile de Pinochet. Hay que admitir que la barbarie ha progresado lo suficiente para que se haya llegado a considerar que una represión que no produzca más que uno o dos cadáveres al día no alcanza el nivel de mortandad que automáticamente se aúpa a los titulares. Pese a ello, las autoridades de países como Colombia y Perú han combatido sus movimientos guerrilleros rurales con insólita furia.

Desde septiembre de 2001, la globalización de la «guerra contra el terror», así como la reactivación de las intervenciones armadas en el extranjero por parte de una gran potencia que en el año 2002 denunció formalmente las normas y convenciones relativas a los conflictos internacionales aceptadas hasta la fecha han empeorado la situación. El peligro efectivo que representan las nuevas redes terroristas para los regímenes de los estados estables del mundo desarrollado, así como para los de Asia, sigue siendo insignificante. Unas cuantas decenas o unos centenares de víctimas de un atentado con bomba en los sistemas del transporte metropolitano de Londres o Madrid no perturban la capacidad operativa de una gran ciudad sino por espacio de unas pocas horas. Por horrenda que haya sido la carnicería del 11-S en Nueva York, el poderío internacional y las estructuras internas de Estados Unidos han permanecido completamente intactas. Si ambos elementos se han deteriorado no ha sido como consecuencia de las acciones de los terroristas, sino de las del gobierno estadounidense. La India, la mayor democracia del mundo, es un buen ejemplo de la capacidad de resistencia de un estado estable. Pese a que en los últimos veinte años haya perdido a dos dirigentes a manos de asesinos, viva una situación de guerra de baja intensidad en Cachemira y sufra los actos de un amplio abanico de movimientos guerrilleros en sus provincias nororientales, además de los de una insurrección marxista-leninista (naxalita*) en algunas zonas tribales, a nadie se le ocurriría decir que no sigue siendo un estado estable con plena capacidad operativa.

Esto pone en evidencia la relativa y absoluta debilidad de la fase que viven actualmente los movimientos terroristas. Dichos movimientos son síntomas, no agentes históricos significativos; lo cual no se ve alterado por el hecho de que, gracias a las transformaciones de los armamentos y las tácticas, grupos pequeños, e incluso individuos, puedan cau-

* La guerrilla maoísta «naxalita», que pretende crear un estado comunista independiente en una parte del este y el sur de la India, debe su nombre a un movimiento estudiantil de los años setenta denominado «Naxalbari», en el que se inspiró. Desde entonces ha matado a más de seis mil personas. (*N. de los t.*)

sar mayor daño per cápita del que solían, y tampoco queda modificado por los utópicos objetivos que defienden, o dicen defender, algunos grupos terroristas. Al operar en estados estables con regímenes estables, carentes además del apoyo de importantes sectores de la población, constituyen un problema policial, no militar. Incluso en aquellas situaciones en que el terrorismo practicado por células pequeñas forma parte de un movimiento general de disidencia, como es el caso de los brotes de Al Qaeda en la resistencia iraquí, éstos no integran la parte principal del movimiento, ni la más eficiente desde el punto de vista militar, sino que constituyen únicamente elementos marginales que vienen a añadírsele. Y en lo que hace a su actividad fuera del radio de acción de la población que les profesa simpatía, como en el caso de los terroristas suicidas palestinos de Israel o de un puñado de jóvenes integristas musulmanes de Londres, apenas tiene otra importancia que la propagandística. Nada de lo que estoy afirmando significa que no sean necesarias sólidas medidas policiales de orden internacional para combatir el terrorismo de los pequeños grupos, en especial el de los de tipo transnacional, aunque sólo sea porque existe el peligro de que en el futuro pudiera darse la circunstancia de que estos grupos se las arreglaran para hacerse con un dispositivo nuclear y con la tecnología precisa para utilizarlo.

Resulta comprensible que esos movimientos creen un gran nerviosismo entre la gente corriente, principalmente en las grandes ciudades occidentales, y en especial cuando tanto el gobierno como los medios se aúnan para generar, en beneficio de sus propios objetivos, un clima de temor, al darles, como han venido haciendo desde el 11 de septiembre de 2001,

la máxima publicidad. (Se hace difícil recordar que antes de esa fecha el modo normal, y por completo racional, en que los gobiernos se enfrentaban a dichos movimientos —ETA, Brigadas Rojas, IRA— consistía en «privarles del oxígeno de la publicidad» en la mayor medida posible.) Se trata de un clima de miedo irracional. En una época en que ya no tienen la menor verosimilitud, la vigente política de Estados Unidos ha intentado reactivar los apocalípticos terrores de la guerra fría, y lo ha hecho inventando «enemigos» que legitimen la expansión y el empleo de su poderío planetario. Los peligros de la guerra contra el terror «global» no proceden de los terroristas suicidas musulmanes.

Nada de todo esto mengua la magnitud de la muy auténtica crisis global de la que son expresión las transformaciones de la violencia política. Estas transformaciones parecen constituir un reflejo de las profundas dislocaciones sociales que ha provocado en todos los niveles de la sociedad la más rápida y espectacular metamorfosis de la vida y la sociedad humanas que jamás haya podido experimentarse en el espacio de una vida individual. Dichos cambios parecen ser imagen de la crisis de los tradicionales sistemas de autoridad, hegemonía y legitimidad en Occidente, así como de su derrumbe en Oriente y el Sur, y reflejo igualmente, y al mismo tiempo, de la crisis de los movimientos tradicionales que hasta ahora pretendían ofrecer una alternativa a esa situación. Las modificaciones se han visto exacerbadas por los fracasos de la descolonización en diversas zonas del mundo y, desde el desplome de la Unión Soviética, por el fin de un orden internacional estable —y en realidad, por el fin de cualquier género de orden global—. Por si fuera poco, estas trans-

formaciones desbordarán la capacidad de los utopistas neoconservadores y neoliberales para exportar los valores liberales de Occidente con el concurso del mercado y el crecimiento militar.

9
EL ORDEN PÚBLICO EN UNA ÉPOCA DE VIOLENCIA*

1. En cierto momento de la década de 1970, la Asociación de Jefes de Policía dijo al gobierno del Reino Unido que ya no era posible seguir evitando los desórdenes públicos en las calles, como en el pasado, sin contar con una nueva Ley de orden público. Unos cuantos años después, supongo que a principios de la década de 1980, fui invitado a un coloquio en algún punto de Noruega y observé que el folleto de reserva del hotel en el que debía alojarme —el habitual centro de convenciones situado en un entorno turístico— anunciaba que el establecimiento contaba con ventanas a prueba de balas. ¿En Noruega? Efectivamente, en Noruega. Me propongo dar comienzo a esta conferencia con estos dos incidentes. La época se ha vuelto más violenta, incluso en sus imágenes. No hay duda alguna al respecto. La charla que voy a dar trata del significado de esta situación y de los medios que los gobiernos debieran poner en marcha para proporcionar amparo a los ciudadanos en su vida cotidiana. Como verán, no hablaré únicamente de terrorismo. El asunto es mucho más amplio. Por ejemplo, incluye el gamberrismo del fútbol, otro fenómeno históricamente novedoso que empezó a presentar sus credenciales en la década de 1970.

* «Public Order in an Age of Violence», 2006; traducción castellana de Tomás Fernández y Beatriz Eguibar.

2. Es evidente, tal como sugiere el recuerdo noruego que acabo de evocar, que una gran parte de esa violencia resulta posible por la extraordinaria explosión experimentada por el suministro y la disponibilidad globales de unos armamentos portátiles —o susceptibles de ser transportados por cualquiera— que poseen gran capacidad destructiva y unos precios relativamente económicos, lo que permite que tanto individuos como grupos de particulares puedan procurárselos. En su origen, se trató de una de las consecuencias de la guerra fría, pero a partir del momento en que se vio claro que resultaba posible ganar elevadas sumas de dinero con estos ingenios, su producción no dejó de crecer vertiginosamente. Desde el año 1960, el número de empresas que los fabrican aumenta década tras década, en especial en la Europa occidental y en Norteamérica. En 1994 había trescientas compañías en 52 países implicadas en el negocio de las armas de pequeño calibre, un 25 por 100 más que a mediados de los años ochenta. En 2001, se estimaba que dichas empresas eran ya quinientas. Dicho de otro modo: los Kaláshnikov o rifles de asalto AK47, originalmente desarrollados en la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial, son la más formidable de todas las armas cortas. Según el Boletín de los Científicos Atómicos, hoy circulan por el mundo algo así como unos 125 millones de estos fusiles. Se pueden comprar por internet, al menos en Estados Unidos en la página estadounidense de Kaláshnikov. Y en cuanto a las pistolas y los puñales, ¿quién podría estimar su número?

Sin embargo, está claro que el desorden público, incluso en la forma extrema del terrorismo, no depende de la alta tecnología ni de los equipamientos caros, como quedó demostrado el 11 de septiembre de 2001. Los secuestradores de los aviones que causaron el desplome de las Torres Gemelas sólo iban armados con cúteres. Los grupos armados más persistentes, como el IRA y ETA, han dependido principalmente de explosivos, algunos de los cuales eran de hecho de fabricación casera. El 7 de julio de 2005, los terroristas de Londres elaboraron un explosivo propio y, si los últimos informes son correctos, la matanza de ese día costó a los suicidas, además, por supuesto, de sus propias vidas, tan sólo unos cuantos centenares de libras esterlinas. Por consiguiente, y aunque no conviene olvidar que el mundo de hoy está más inundado que nunca de objetos que matan y mutilan, ese es únicamente uno de los elementos del problema.

¿Es el orden público más difícil de mantener? Claramente, los gobiernos y las empresas lo creen así. En Gran Bretaña, los efectivos de las fuerzas policiales han crecido un 35 por 100 desde el año 1971, y si a finales de siglo había 34 funcionarios de policía por cada diez mil ciudadanos, treinta años antes eran 24,4 (lo que implica un incremento superior al 40 por 100). Y ni siquiera estoy teniendo aquí en cuenta el medio millón de personas que, según se estima, están empleadas en la industria de la seguridad como guardas y otros puestos similares —este es un sector de la economía que ha visto multiplicado su negocio a lo largo de los últimos treinta años, desde que en 1971 la compañía Securicor se considerara de magnitud suficiente como para cotizar en bolsa—. El pasado año 2005 había unas 2.500 compañías. Como saben, la desindustrialización de Gran Bretaña ha generado un gran número de hombres físicamente capaces para quienes la obtención de un trabajo como guardia de seguridad se ha con-

vertido en una de las escasas modalidades de empleo disponibles. Podría decirse que la economía, en lugar de basarse en que cada uno de nosotros saque a relucir los trapos sucios de los demás, podría llegar a descansar algún día en el empleo masivo de gentes ocupadas en vigilarse unas a otras.*

3. No sólo se hace intervenir una mayor cantidad de recursos humanos, sino que también se emplea más la fuerza. En nuestros días, los especialistas en el control de multitudes cuentan con cuatro tipos de medios para hacer frente a las manifestaciones que crean problemas. Son los siguientes: químicos (por ejemplo los gases lacrimógenos), y «cinéticos» (como los rifles antidisturbios, las balas de goma, etc., los cañones de agua y la tecnología de los dispositivos aturdidores). A continuación incluyo una lista de países que ilustra el paso del control de masas tradicional al moderno y más severo. Noruega no utiliza ninguno de los cuatro medios. Finlandia, Países Bajos, India e Italia sólo usan uno, el químico. Dinamarca, Irlanda, Rusia, España, Canadá y Australia emplean dos. Bélgica y los países verdaderamente estrictos —Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y la pequeña Austria— tienen los cuatro listos para entrar en acción. Está claro que Gran Bretaña, que antiguamente se enorgullecía de que sus policías fueran completamente desarmados, no vive ya en el pacífico mundo de Noruega o Finlandia.

* Hobsbawm hace aquí un juego de palabras intraducible, puesto que el contraste se basa en la contraposición de dos expresiones, la primera real, y la segunda ideada por el autor, diferenciadas por dos únicas letras: «...the economy ... instead of being based on *taking each other's washing*, may one day rest on ... people *taking each other's watching*». (*N. de los t.*)

4. ¿Cómo ha llegado a producirse esta situación? Creo que han estado ocurriendo dos cosas. La primera representa la inversión de lo que Norbert Elias ha analizado en un trabajo titulado *El proceso de la civilización*.* Esta obra trata de la transformación de la conducta pública en Occidente, de la Edad Media en adelante. Occidente se ha vuelto menos violento, más «amable», más considerado, primero en el ámbito de una restringida élite, y después a mayor escala. Sin embargo, esto ha dejado de ser cierto en la actualidad. Nos hemos acostumbrado hasta tal punto a cosas como a blasfemar en público, a la pública utilización de un lenguaje deliberadamente basto y ofensivo, que ya resulta difícil recordar lo reciente que es, en comparación con otras, dicha práctica. Por supuesto, las palabrotas y los juramentos han sido desde hace tiempo cosa común en los grupos de varones especializados en actividades peligrosas, como es el caso de los soldados, aunque no creo que ningún ejército occidental cuente con el amplio abanico de obscenidades del ruso. Con todo, cuando yo mismo abandoné el ejército tras la última guerra, período durante el cual tomé por primera vez contacto con esa costumbre, todavía tuve oportunidad de regresar a un mundo menos malhablado. En cualquier caso, las mujeres rara vez utilizaban entonces ese tipo de lenguaje, y como práctica social generalizada, puede decirse que en los años sesenta apenas había comenzado aún a proliferar. Quizá recuerden ustedes que antes de esa década la palabra «joder»

* La traducción española de este libro, cuyo subtítulo indica: *Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, es de Ramón García Cotarelo, FCE, México, Madrid, Buenos Aires, 1987. (*N. de los t.*)

todavía no había pasado a formar parte de la cultura general británica en letra impresa. De hecho, apareció por primera vez en un diccionario británico en el año 1965, y en uno estadounidense en 1969. (Véase el *Online etymo.dictionary*.)

Al mismo tiempo, las tradicionales normas y convenciones sociales han ido debilitándose. Por ejemplo, parece claro que la delincuencia juvenil —la protagonizada por muchachos de entre catorce y veinte años— inició su desproporcionado incremento en la segunda mitad de la década de 1960. Los hombres jóvenes, espoleados por la testosterona y la afirmación masculina, siempre han sido alborotadores, en especial cuando han formado parte de grupos organizados, lo que se toleraba en ocasiones especiales para, idealmente, mantener esa conducta dentro de unos límites aceptables. Esto era válido incluso en el caso de los jóvenes y bien educados miembros del Club de los Zánganos de P. G. Wodehouse. Si recuerdan, su propensión a tirar al suelo los cascos de los policías en las tardes de regata hizo que Bertie Wooster diera con sus huesos en la comisaría de Vine Street.* Sin embargo, no ha sido únicamente el deterioro de las normas y de las convenciones sociales, sino la corrosión de las avenencias y las relaciones existentes en el seno de la familia, lo

* Sir Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975) es un maestro de la literatura humorística inglesa. En una de sus obras crea una institución imaginaria: el Club de los Zánganos, con sede en Dover Street. Es un refugio para los jóvenes ociosos de Londres, una colección de niños bitongos que, en su mayoría, dependen de las asignaciones de sus riquísimos tíos. Miembro arquetípico del club es Bertram Wilberforce Wooster —Bertie—, descendiente bobalicón de un distinguido cruzado cuyo estricto código de honor conserva, y que, en unión de su empleado Jeeves, escudero personal del consumado caballero, protagonizará mil peripecias satíricas de la realidad social. (*N. de los t.*)

que ha convertido a los varones jóvenes de edades comprendidas entre catorce y veinte años en lo que los victorianos habrían denominado «clases peligrosas». No me extenderé aquí sobre el particular, ni sobre el más dilatado proceso de avance de la barbarie al que ha asistido el siglo XX y que ha conducido a una escandalosa situación en la que los ideólogos occidentales ofrecen de hecho una justificación intelectual de la tortura, pero desde luego este es el tema que subyace a cuanto aún he de añadir.

5. El segundo fenómeno, más directo, también comenzó a finales de la década de 1960. Se trata de la crisis del tipo de estado en el que todos nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en el último siglo: el estado-nación territorial. Durante los doscientos cincuenta años anteriores a este punto de inflexión, el estado no dejó de incrementar su poder, sus recursos, la gama de sus actividades, así como el conocimiento y el control de cuanto ocurría en su territorio. Esta evolución de los acontecimientos fue independiente de la política y de la ideología: sucedió tanto en los estados liberales como en los conservadores, tanto en los comunistas como en los fascistas. Alcanzó su punto culminante en las décadas doradas del estado del bienestar y de la economía mixta posterior a la segunda guerra mundial. Sin embargo, todo esto tenía su base en la previa afirmación de que el estado debía hacer prevalecer el monopolio de sus propias leyes y tribunales de justicia sobre otro tipo de leyes y normas de conducta (por ejemplo, religiosas o consuetudinarias). Lo mismo es válido respecto del monopolio estatal de la fuerza armada. En el transcurso del siglo XIX, la mayoría de los estados occidentales impidieron que sus ciudadanos llevaran y utilizasen

armas (salvo con fines deportivos). De esta medida exceptuaron a sus propios agentes, y al final las armas quedaron prohibidas incluso en los duelos, corrientes entre la nobleza y la alta burguesía. (De entre los países industrializados, Estados Unidos constituye una notable excepción en este sentido, y también lo es su tasa de homicidios, creciente a lo largo de los dos últimos siglos, cuando en Europa, en ese mismo período, ha sido descendente; *American Historical Review*.)* En Gran Bretaña, las convenciones eliminaron incluso la utilización de puñales y dagas en las reyertas particulares, por considerarlas «contrarias al espíritu inglés», y se introdujeron reglas para pelear con los puños —las normas pugilísticas del marqués de Queensberry—. En condiciones de estabilidad social, hasta los agentes del orden se mostraban desarmados en público. En el Reino Unido, los policías sólo iban armados en Irlanda, cuyo carácter potencialmente insurrecto era conocido, pero no en Gran Bretaña. Se institucionalizaron los levantamientos, los disturbios y las marchas, es decir, quedaron reducidos cada vez más a manifestaciones mediante el hábito de negociar previamente con la policía. El alcalde de Londres, Ken Livingstone, acaba de recordar a los chinos que eso es lo que ha venido ocurriendo tanto en Hyde Park como en Trafalgar Square desde la época victoriana. Esta condición desarmada de la fuerza pública se ha verificado incluso en aquellos países que, según nuestro punto de vista, muestran cierta propensión a la violencia callejera, como

* La reseña completa es la siguiente: Eric Monkkonen, «Explaining America's Exceptionalism», Foro de la *American Historical Review* sobre el homicidio, n.º 111.1, 12 de diciembre de 2006. Puede consultarse en www.historycooperative.org/journals/ahr/111.1/monkkonen.html. (*N. de los t.*)

Francia, con independencia de lo incendiarios que pudieran ser los lemas de las manifestaciones de masas. La gran revuelta estudiantil del París de 1968 es buen ejemplo de ello: esa es la razón de que prácticamente no produjese víctimas en ninguno de los bandos, y lo mismo puede decirse de las recientes movilizaciones que han hecho fracasar la nueva ley de empleo juvenil francesa.

6. No obstante, existe otro factor en este debilitamiento del estado: se está reduciendo la lealtad que los ciudadanos le profesan y su disposición a hacer lo que éste quiere que hagan. Los países contendientes en las dos guerras mundiales lucharon en ellas con ejércitos de reemplazo; es decir, con ciudadanos convertidos en soldados y dispuestos a matar y a morir a millones «por la patria», como suele decirse. Esto ya no ocurre. Dudo que cualquier gobierno que diera a sus ciudadanos una mínima capacidad de decisión en la materia, y lo dudo igualmente de los varios que no les ofrecen tal opción, pudiera volver a hacer lo mismo —desde luego no Estados Unidos, que abolió el servicio militar obligatorio tras la guerra de Vietnam—. Ahora bien, en un terreno más apacible, esta reticencia se aplica igualmente a la disposición de los ciudadanos a respetar la ley; o dicho de otro modo, a la percepción que éstos tienen de la justificación moral de las leyes. Si nos parece que una ley es legítima, la acatamos de bastante buena gana. Consideramos de razón que los partidos de fútbol requieran la presencia de árbitros y jueces de línea, y confiamos en que éstos ejerzan sus legítimas funciones. Si no lo creyéramos así, ¿qué efectivos de la fuerza pública no se precisarían para establecer y conservar el orden en el campo? Muchos automovilistas no aceptan la justifica-

ción moral de los radares de control de velocidad, y por tanto no dudan en desentenderse de ellos. Si se consigue pasar algo de contrabando, nadie se formará mala opinión de uno. Cuando la ley carece de legitimidad y su acatamiento depende principalmente del temor a ser detenido y castigado resulta mucho más difícil, y, ni que decir tiene, mucho más caro, hacerla cumplir. Creo que apenas existen dudas de que hoy, por diversas razones, es mucho menos probable que antes que los ciudadanos se atengan a las normas legales o se dejen guiar por convenciones informales de conducta social.

7. Por si fuera poco, la globalización, esto es, el enorme aumento de la movilidad, acompañado por la eliminación a gran escala de los controles efectivos de las fronteras, tanto en Europa como en otros lugares, ha hecho que los gobiernos encuentren cada vez más difícil controlar qué objetos entran o salen de su territorio o qué ocurre en ellos. De este modo, sólo es técnicamente posible inspeccionar una minúscula fracción del contenido de los recipientes que llegan a nuestros puertos o salen de ellos sin provocar la práctica detención del pulso de la vida económica cotidiana. Los comerciantes ilegales y los traficantes aprovechan al máximo estas facilidades, como ya hicieran con la incapacidad en que se ven los estados, no ya para controlar las transacciones económicas internacionales, sino para proceder siquiera a su seguimiento. El estudio más reciente de este fenómeno, expuesto en el libro de Moisés Naím titulado *Illicit*, dice categóricamente lo siguiente: «Los gobiernos están fracasando en la lucha contra el comercio ilícito internacional ... Simplemente no existe nada que nos permita entrever la posibilidad de que

las tornas puedan cambiar de forma inminente para el sinnúmero de redes ... dedicadas al comercio ilícito».

8. Todo esto ha reducido seriamente el poder de los estados y los gobiernos en los últimos treinta años. En los casos extremos, éstos podrían llegar a perder el control de una parte de sus territorios. En el año 2004, la CIA identificó en todo el mundo cincuenta regiones sobre las que los gobiernos centrales ejercen un control muy escaso o nulo. «Ahora bien», si se me permite volver a citar el libro del profesor Naím sobre la economía ilegal, «es de hecho raro en nuestros días encontrar un país en el que no existan bolsas de desgobierno bien integradas en vastas redes internacionales» (Moisés Naím, *Illicit*, Nueva York, 2005).* En casos menos extremos, otros estados por lo demás estables y prósperos, como el Reino Unido y España, logran vivir durante décadas con pequeños grupos armados en sus territorios, como el IRA y ETA, organizaciones que sus gobiernos son incapaces de eliminar por completo. Y ello a pesar del hecho evidente de que nuestra información sobre el país y la población es muy superior a la de cualquier época pasada. Aunque las autoridades públicas tengan hoy una capacidad tecnológica mayor que la de cualquier otro gobierno anterior para no

* Moisés Naím es director de la revista *Foreign Policy* de Washington, una de las publicaciones más importantes de política y economía internacionales. Es autor de ocho libros y numerosos ensayos y artículos. Columnista en *The Financial Times*, ha sido ministro de Comercio e Industria en Venezuela. Actualmente dirige un programa de doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La obra aquí citada, *Illicit. How Smugglers, Traffickers and Copycats are Hijacking the Global Economy*, acaba de ser publicada en español: *Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo*, Debate, Barcelona, 2006. (*N. de los t.*)

perder de vista a sus habitantes, escuchar a hurtadillas sus conversaciones, leer sus correos electrónicos y, en Gran Bretaña, vigilarles a través de un sinfín de cámaras de circuito cerrado, muy bien pudiera darse el caso de que el conocimiento que tengan respecto a qué individuos se encuentren efectivamente en su territorio en un momento dado, e incluso respecto a cuál sea su número, su residencia o los asuntos a los que se dedican, resulte inferior al que tenían sus predecesores. Hoy, las personas que elaboran censos muestran bastante menos confianza en la información que manejan que la que solían tener sus colegas en tiempos de los reyes Jorge V y Jorge VI —y no les faltan buenos motivos.

9. Todo esto explica por qué incluso los estados eficaces y con buena capacidad operativa han tenido que adaptarse en cierta medida a un grado de violencia no oficial mucho más elevado que el de épocas pasadas. Piénsese en la Irlanda del Norte de los últimos treinta años. Gracias a una combinación de medidas de fuerza y de acuerdos tácitos, ha podido darse curso al gobierno efectivo y a la vida normal, incluyendo los movimientos de entrada y salida a la provincia, pese a vivirse una situación de guerra civil latente. En todo el mundo los ricos se adaptan a la amenaza que representan los pobres violentos mediante la creación de urbanizaciones cerradas, un fenómeno que en Gran Bretaña es bastante reciente y que se hace patente sobre todo en las zonas portuarias. Se dice que en Inglaterra hay unas cien, la mayoría de ellas de pequeño tamaño, aunque esto no es nada si lo comparamos con los siete millones de familias que en Estados Unidos viven en este tipo de complejos fortificados, máxime cuando más de la mitad de ellas residen en vecindarios «en los que el acceso está controlado por medio de verjas, códigos de acceso, llaves electrónicas y guardias de seguridad» (Crimedoctor).* A medida que los tiempos se vuelven más violentos, esta tendencia crece rápidamente, como puede confirmar cualquiera que haya visitado a lo largo de los años Río de Janeiro o Ciudad de México. Ahora bien, ¿es posible hacer algo para controlar la situación?

10. Surgen dos cuestiones. En primer lugar, ¿es posible controlar los nuevos problemas de orden público que surgen en una época de violencia? La respuesta ha de ser necesariamente afirmativa, aunque no sepamos aún con claridad en qué medida será posible hacerlo. El gamberrismo en el fútbol es un ejemplo de cómo puede lograrse esto, y de cómo se ha conseguido de hecho. Surgió como un fenómeno habitual de masas en la Gran Bretaña de los años sesenta, y fue calcado en muchos otros países. Llegó a su punto culminante en la década de 1980, con los espantosos incidentes de Bradford y las 39 víctimas mortales producidas en el estadio de Heysel de Bruselas durante la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus. Se habló mucho de la necesidad de adoptar medidas extremas, como la implantación obligatoria del carné de identidad, pero de hecho, en el Reino Unido el gamberrismo en el fútbol se ha reducido notablemente desde entonces con medidas más moderadas. Entre ellas se encuentra la introducción de modificaciones de naturaleza técnica, como graderíos en los que todos los espec-

* Crimedoctor es el nombre de una conocida página de internet en la que se da información exhaustiva, a base de artículos, consultas, noticias y consejos, sobre cuestiones de seguridad para las personas y los bienes. Su dirección es la siguiente: www.crimedoctor.com. (*N. de los t.*)

tadores estén sentados y circuitos cerrados de televisión, un mejor desempeño de las tareas de averiguación y coordinación, estrategias policiales más selectivas de identificación de los gamberros conocidos, todo ello unido a —o más bien en sustitución de— la «contención» generalizada de todos los seguidores del equipo «visitante», tanto dentro como fuera del estadio. Además, la policía ha tenido la posibilidad de concentrarse mejor en incidentes más serios, ya que el control del orden en el interior del recinto ha pasado a ser responsabilidad de los guardias de seguridad de los clubes. Todo esto ha resultado más costoso, mucho más costoso, tanto por las sumas económicas como por los efectivos humanos. Se precisaron diez mil hombres para mantener el orden en la Eurocopa de la UEFA de 1996, celebrada en Gran Bretaña. No he visto estimaciones del coste en dinero y en efectivos humanos que ha supuesto la Copa del Mundo FIFA 2006 disputada este verano en Alemania. Sin embargo, las mejorías se han logrado sin necesidad de aplicar las medidas extremas que se sugirieron en su día. Del mismo modo, Nueva York es hoy un lugar mucho más seguro que antes, y lo podríamos confirmar quienes recordamos el Nueva York mugriento y verdaderamente peligroso de los años setenta y ochenta. Sin menoscabar la medida en que esto pueda deberse al alcalde Rudy Giuliani, este resultado también fue más una consecuencia de la introducción de cambios en las tácticas policiales (tolerancia cero) que resultado de aumentar el ya impresionante arsenal armamentístico de los policías de Nueva York.

Esto me conduce a la segunda cuestión: ¿cuál debe ser el equilibrio entre el empleo de la fuerza y el recurso a la persuasión o a la confianza ciudadana en el control del orden público? El mantenimiento del orden en una época de violencia ha sido a un tiempo más difícil y más peligroso, circunstancia que ha afectado en no pequeña medida a unas fuerzas policiales cada vez más armadas y más provistas de tecnología y que también con mayor frecuencia operan con un equipamiento —concebido para repeler las agresiones físicas— que les confiere un aspecto de caballeros medievales, con escudos y armaduras. Los agentes policiales pueden ceder a la tentación de considerarse a sí mismos como un cuerpo de «guardia» dotado de un saber profesional especializado, aislado de (y criticado por) la gente de la calle, los políticos y los medios. Tras las tranquilas décadas de 1950 y 1960, la reacción inicial frente a la nueva situación existente en el Reino Unido, provocada por el IRA, las huelgas de mineros y los disturbios raciales —incluso en la propia isla de Gran Bretaña— hizo que la policía empezara a mostrarse más violenta, más agresiva, casi militar incluso. El hecho de tener que hacer frente a los terroristas ha espoleado la militarización de la policía. La política de «tirar a matar» ya se ha cobrado varias víctimas inocentes, y por cierto evitables —la más reciente de las cuales ha sido el brasileño Menezes—. Por fortuna, no obstante, Gran Bretaña aún no ha profundizado demasiado en la imitación de la tendencia que conduce al resto de Europa a crear brigadas especiales antidisturbio armadas, como los CRS franceses.

11. Por otro lado, dos son los elementos que forman parte de la cordura policial básica. El primero consiste en saber que los policías no son utopistas. No tratan de eliminar el delito en su totalidad. Lo que se proponen es reducirlo, contro-

larlo y quitárselo de encima a la población civil. El segundo, que resulta incluso más relevante, es que mientras los policías identifican y persiguen a los «agitadores», no deben provocarse rivalidades entre las personas cuyo orden público es preciso proteger. La fuerza excesiva o desnuda, en especial empleada contra grupos, puede contrariar, cuando no al público en su totalidad, sí quizá a los grandes conjuntos de población en los que se considera que existe un número desproporcionado de indeseables: el de los negros, el de los adolescentes de los barrios pobres, el de los asiáticos en nuestros días, o cualquier otro. De este modo se multiplican los peligros que gravitan sobre el orden público. Un buen ejemplo de cómo puede producirse este efecto fueron los disturbios del carnaval de Notting Hill en los años setenta, que se desencadenaron como consecuencia de una operación policial excesivamente indiscriminada de «detención y cacheo» destinada a controlar a los carteristas, ya que las gentes de la localidad lo interpretaron como una agresión racial contra los negros. Se trata de un peligro real. Durante las algaradas de Brixton, en el año 1981, es prácticamente indudable que la policía juzgó que todos los negros eran alborotadores en potencia, lo que deterioró las relaciones con los habitantes locales. Por fortuna, en el transcurso de los tumultos de Irlanda del Norte las fuerzas policiales de Gran Bretaña se mostraron en buena medida reacias a ceder a la tentación de considerar a todos los irlandeses residentes en Inglaterra como potenciales miembros del IRA. El mantenimiento del orden público, sea o no en una época de violencia, depende de un equilibrio entre fuerza, confianza e información. En circunstancias normales, cuando se produce de vez

en cuando una crisis aislada, uno debe tener, en general, confianza en el equilibrio que establecen tanto el gobierno como las fuerzas de orden público.

Sin embargo, desde el 11 de septiembre de 2001, las circunstancias han dejado de ser normales. Hemos sido inundados por una oleada de retórica política que nos habla de los desconocidos pero terribles peligros que pueden llegar del extranjero (la histeria de las armas de destrucción masiva), de la «guerra contra el terror» y de la «defensa de nuestra forma de vida» frente a unos enemigos externos mal definidos y sus elementos terroristas, infiltrados en el interior de nuestras sociedades. Se trata de una retórica concebida más para poner la piel de gallina a los ciudadanos que para contribuir a combatir el terror —con qué fines políticos, es cosa que dejo a su consideración—. Y es que lo que los terroristas desearían lograr es precisamente poner la piel de gallina a la gente, o crear una situación de pánico. Su objetivo político no consiste tanto en producir la matanza en sí como en conseguir que la publicidad de la carnicería desmoralice a los ciudadanos. Durante los años en que Gran Bretaña tuvo realmente un ininterrumpido problema de terrorismo —esto es, el provocado por las operaciones del IRA—, la norma fundamental que siguieron las autoridades encargadas de luchar contra los terroristas consistió en no darles, siempre que fuese posible, la menor publicidad, o en no anunciar las medidas destinadas a contrarrestarlos.

Por consiguiente, despejemos nuestra mente de toda esta porquería. La llamada «guerra contra el terror» no es ninguna guerra, salvo en el sentido metafórico que empleamos al hablar de la «guerra contra las drogas» o de la «guerra

de los sexos». «El enemigo» no está en condiciones de derrotarnos, ni siquiera se encuentra en situación de causarnos un daño decisivo. Nos enfrentamos a grupos terroristas pequeños como los que estamos acostumbrados a sufrir —con la única reserva de dos significativas novedades—. A diferencia de los primeros terroristas, estos grupos están dispuestos a provocar una masacre indiscriminada, y de hecho tal vez puedan lograrla. En realidad, tienen ya en su haber una matanza que provocó varios miles de muertos, unas cuantas que han causado centenares de víctimas, y un buen número de atentados con decenas de fallecidos. La otra novedad es la espantosa introducción histórica del terrorista suicida. Estas novedades son lo suficientemente serias, en especial en la era de internet y del acceso generalizado a toda una serie de artefactos de pequeño tamaño, transportables pero de gran capacidad de destrucción. No niego que se trate de una amenaza más grave que la de los terrorismos anteriores y que esto justifica la realización de esfuerzos excepcionales por parte de aquellos que tienen la encomienda de combatirla. Pero, permítanme reiterarlo, no es ni va a convertirse en una guerra. Es fundamentalmente un problema de orden público muy serio.

12. Ahora bien, la seguridad pública, lo que la gente entiende por «ley y orden», es cosa garantizada en esencia por las instituciones y autoridades que organizan la vida civil en tiempo de paz, lo que incluye a la policía. Las instituciones bélicas —esto es, principalmente, las fuerzas armadas— no se movilizan más que en situaciones de guerra y en las raras ocasiones en que los contingentes civiles fracasan. Incluso en las situaciones de guerra parcial, como la registrada en Irlanda del Norte, una larga experiencia nos ha enseñado los peligros políticos derivados de asignar el mantenimiento del orden público a los soldados, sin contar con una fuerza de policía profesional e independiente del ejército.

A pesar de lo mucho que se habla sobre el terrorismo, ninguno de los países de la Unión Europea está en guerra ni es probable que lo esté, y tampoco hay ningún país en dicha Unión cuyo tejido social y político muestre una situación de fragilidad tan grande como para pensar que pueda verse gravemente desestabilizado por la acción de pequeños grupos de activistas. En su actual fase, el terrorismo internacional representa un problema más serio que el planteado en el pasado por ese mismo tipo de movimientos porque tiene capacidad para causar una matanza deliberadamente indiscriminada, pero no por ser una instancia política o estratégica. Tal como ha probado hasta el 11-S, dicho terrorismo no logró desorganizar Nueva York sino por espacio de unas pocas horas, y los servicios públicos corrientes se enfrentaron a sus efectos de forma rápida y eficaz. El terrorismo exige esfuerzos especiales, pero es importante que no nos haga perder la cabeza. En teoría, un país que a lo largo de treinta años de disturbios en Irlanda no llegó nunca a perder realmente la sangre fría no debiera perderla ahora. En la práctica, el verdadero peligro del terrorismo no reside en la amenaza real de un anónimo puñado de fanáticos, sino en el miedo irracional que sus actividades provocan, y que tanto los medios como los gobiernos imprudentes espolean —poniendo con ello en riesgo el «modo de vida» que se supone ha de protegerse—.

ÍNDICE ALFABÉTICO

ÍNDICE

Los efectos de la globalización, la crisis del estado-nación, el terrorismo, las corrientes migratorias, el racismo. El historiador británico **Eric Hobsbawm (1917-2012)** analiza en este libro de tolstoniano título los enormes desafíos que enfrenta el mundo del siglo XXI. **Se trata de una recopilación de ensayos que, desde el prisma de la crítica histórica,** arroja luz sobre los derroteros de un mundo atrapado en las redes de la injusticia, de la guerra y de la explotación.

